

**INFORME**

# **Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe: (Narco) neoliberalismo autoritario o democracia con demos**

**Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales**  
**Dirección de Investigación CLACSO**

**Dirección general:** Karina Batthyány

**Coordinación general:** Pablo Vommaro

**Colaboración y revisión:** Cecilia Gofman

**Diseño gráfico:** Renata Maestrovicente

**AFD**

Lorena Chara, Directora en Argentina, AFD

Carlos Pincemin, Especialista Economía & Cambio Climático, AFD

Philippe SERRES, Director Regional Países Andinos AFD

**Equipo de investigación y autorías**

René Ramírez Gallegos (Coordinador y editor)

Luciana Cadahia

Gabriela Gallardo

Jorge Zaruma

Juan Guijarro

Soledad Stoessel

Martín Retamozo

Julián Atilano

Marcela Schenck

Antonio Malo

Lucía Gallardo

Sebastián Irigoyen

Florencia Piñeyrúa

Alejandra Yáñez-Cancino

Andrea Guillem Macías

Julia Almeida Vasconcelos da Silva

Margarita Ramos Mier

Deisy Marisol Quintanilla Ibarra

Diana Carolina Alfonso

Marysabel Pacheco-Arreaño

# **Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe:**

**(Narco) neoliberalismo autoritario o democracia con demos**

**René Ramírez Gallegos  
(Coordinador y editor)**

# Índice

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción                                                                                            | 5  |
| 2. El fantasma antidemocrático: ¿el eterno retorno?                                                        | 7  |
| 3. Democracia y capitalismo                                                                                | 10 |
| 3.1. Democracia, acumulación por desfosilización y transición energética                                   | 14 |
| 3.1.1. Democracia y extractivismo                                                                          | 15 |
| 3.1.2. Los conflictos socioecológicos en América Latina                                                    | 16 |
| 3.1.3. Tierra concentrada, democracia sin demos                                                            | 18 |
| 3.2. Democracia y narcoacumulación                                                                         | 19 |
| 4. Democracia, Estado y movimientos sociales                                                               | 25 |
| 5. Democracia y autoritarismo                                                                              | 29 |
| 5.1. Antidemocracia y extrema derecha                                                                      | 31 |
| 6. Democracia e igualdad                                                                                   | 37 |
| 6.1. El segundo tiempo de la puja distributiva                                                             | 41 |
| 7. Democracia fake: negacionismo científico y religión                                                     | 47 |
| 7.1. Universidad e ideología                                                                               | 50 |
| 7.2. Democracia y movimientos estudiantiles universitarios                                                 | 55 |
| 7.2.1. Movimientos universitarios en el último sexenio de la región                                        | 56 |
| 7.3. Las “benditas redes sociales” y la democracia                                                         | 59 |
| 8. Democracia e ideología                                                                                  | 63 |
| 8.1. Democracia, feminismo y elecciones                                                                    | 67 |
| 8.1.1. Aporías de las democracias latinoamericanas                                                         | 68 |
| 8.1.2. Los partidos políticos frente a la construcción de una democracia feminista                         | 72 |
| 8.1.3. El actuar del movimiento feminista en el proceso electoral                                          | 73 |
| 8.1.4. Voto de las mujeres latinoamericanas                                                                | 74 |
| 9. Democracia o barbarie                                                                                   | 76 |
| 10. Democracia y buen vivir/vivir sabroso                                                                  | 78 |
| 11. A manera de epílogo. Vida, paz y democracia con demos como vacuna al (narco)neoliberalismo autoritario | 81 |
| 11.1. Decálogo de acciones estratégicas para una democracia con demos                                      | 85 |
| Bibliografía                                                                                               | 95 |

# 1. Introducción

El presente informe constituye una síntesis del libro *“Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia como igualdad”*. En el fondo de la variedad de aristas tratadas en el libro, nuestro punto de partida común ha sido ampliar la perspectiva para examinar las democracias realmente existentes en América Latina más allá de sus marcos institucionales. Pero no se trata de relegar la consideración de las reglas formales, sino por el contrario explorar su funcionamiento o no en contextos ampliados de interacción, valoraciones, prácticas y normas que operan en distintos niveles, desbordando lo institucional formal en un sentido estrecho. Así, la tesis de la perspectiva propuesta parte del hecho de que la convivencia social tiene reglas propias que son configuradas en el marco de una suerte de socioecología/economía política de la democracia. Las instituciones formales serían, bajo esta mirada, una suerte de síntesis de relaciones de poder, pero que deben ser analizadas previamente bajo el prisma de la correlación de fuerzas e intereses a los que responden.

Con este objetivo nos hemos propuesto abordar la coyuntura democrática en el marco de la estructura desde una mirada de los ciclos largos económicos, políticos y sociales que ha vivido la región. Hacer un panorama general del estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe, en el contexto de la crisis del capitalismo y su transición. Reflexionar geopolíticamente sobre el cambio hegemónico que atraviesa el mundo desde la perspectiva latinoamericana. El supuesto es claro: analizar la democracia implica indagar sobre las condiciones materiales (qué distancias, qué cercanías se generan en el proceso de reproducción de la vida y qué condiciones de libertad producen) que garantizan que las grandes mayorías puedan decidir libre y soberanamente sobre el presente y futuro que quieren vivir, entre una multiplicidad de opciones de convivencia social que se podría elegir. Sin soberanía de los cuerpos y de los pueblos, y con distancias socioeconómicas indignas, no hay libertad ni igualdad; y sin estas no hay democracia.

En este escenario se indagará sobre los momentos que ha vivido la democracia en la región circunscrita en los ciclos del capitalismo y su impacto en la sociedad. Coyunturalmente, se defenderá la tesis según la cual América Latina y el Caribe viven un momento destituyente/constituyente en el cual se está disputando entrar en una segunda ola progresista (o de movimientos nacional-populares) o en la tercera ola neoliberal con características diferentes a las vividas en el siglo XX, a lo que denominaremos narconeoliberalismo autoritario.

Un primer diagnóstico macro nos revela que la crisis de acumulación, las propuestas de superación de esta, y la crisis de hegemonía que vive el mundo no permiten la convivencia armónica entre capitalismo y democracia, razón por la cual esta última constituye un impedimento estructural para resarcir la tasa de ganancia del capital. Tal situación conlleva un asedio neoconservador a la democracia como estrategia para recuperar la agenda de acumulación neoliberal.

Desde una perspectiva teórica pero también político-programática, se evidencia el asedio a la democracia de los proyectos de derecha autoritarios neoliberales en el marco del cerco a los principios de igualdad-libertad. Tal

perspectiva permite describir las etapas largas desde los inicios del neoliberalismo en la región hasta el presente momento en el marco de su articulación con la democracia.

Bajo lo señalado, esta síntesis planteará un panorama amplio sobre la democracia, examinando: en el plano político las dictaduras electorales/democráticas y, en el plano económico, el autoritarismo neoliberal. En el escenario legado por los gobiernos progresistas que tuvieron lugar en los albores del siglo XXI y por las luchas históricas populares de la región, tales fenómenos encontrarán una resistencia creativa popular que ha buscado detener y revertir en el mediano plazo los fenómenos antes mencionados; generando cambios con diferentes matices de profundidad al intensificarse la lucha de clases ya latente en la región como consecuencia de la agudización de las contradicciones generadas por las promesas incumplidas de la democracia formal liberal.

Lo señalado resultará una bomba de tiempo en las coyunturas de crisis de acumulación que está experimentando el sistema capitalista –sobre todo cómo se está resolviendo o el papel que juegan en el marco global las economías dependientes como la latinoamericana y la caribeña–, lo que puede conducir –en caso de que no se respeten transparentemente los procesos institucionales democráticos y se resuelvan las condiciones materiales de reproducción de una vida digna de las grandes mayorías– a que la resolución del conflicto social sea por la vía violenta.

Para analizar lo mencionado, el documento se organiza en once partes. Luego de esta introducción, la segunda sección analiza el momento histórico que vive la región y los *habitus* asumidos por los latinoamericanos en el marco de los ciclos largos políticos, económicos y sociales, vistos desde una perspectiva del Sur Global. La tercera sección presenta, como parte del contexto de la región, el impacto que genera la crisis de acumulación capitalista en el marco de sus cambios en los procesos de generación de riqueza ligados al capitalismo digital leído desde América Latina y el Caribe. En esta sección se hará un *zoom* de dos fenómenos relevantes: el neoextractivismo y el narconeoliberalismo. La cuarta sección hace un recorrido sobre la relación entre Estado, democracia y movimientos sociales. La quinta sección pone de relieve el significado del oxímoron que pervive en la región: “dictaduras democráticas/electorales” y la restauración conservadora. En esta sección se hace una lectura en la que se analiza la subjetividad neoliberal autoritaria como consecuencia de los cambios en el modo de acumulación que vive la región y su repercusión en el mundo del trabajo.

A continuación, la sexta sección analiza la relación entre democracia e igualdad en el marco de comparar la economía política de la redistribución del ingreso y la riqueza según ideología de gobierno estudiada durante el último casi cuarto de siglo. La séptima sección aborda el asedio a la razón pública/verdad (no dogmática) y las instituciones sociales que la representan (universidades y sistemas científicos), como estrategia de asedio a la deliberación democrática. La octava sección estudia los determinantes de la ideología y la votación en los procesos electorales vividos en la región. En el marco de los procesos electorales y la vitalidad de la democracia analiza el rol de las mujeres y el feminismo en la democracia representativa, así como de los movimientos estudiantiles universitarios y el rol de la juventud en la democracia. La novena sección genera hipótesis sobre las potenciales bifurcaciones que puede tomar la historia de las democracias en América Latina, en el marco de las posibles vías de resolución de la historia futura de las democracias en la región. La sección décima retoma el pensamiento latinoamericano del “buen vivir”, vivir pleno, vivir sabroso del humanismo mexicano, para esbozar lineamientos estratégicos que permitan salidas emancipatorias de las crisis de democracia y de acumulación que vive América Latina. Finalmente, la sección undécima cierra con un epílogo donde recupera la síntesis de lo planteado a lo largo de la investigación.

## 2. El fantasma antidemocrático: ¿el eterno retorno?

El 2023 se cumplieron 40 años del retorno a la democracia en Argentina, luego de su última y más brutal dictadura; 50 años desde el golpe de Estado en Uruguay; otras cinco décadas del de Chile; 60 años del que tuvo lugar en República Dominicana y, el presente año, serán 60 del golpe ocurrido en Brasil. Sin embargo, hoy en día no podemos celebrar la consolidación de la democracia en la región. Muy por el contrario, somos testigos de nuevas formas de asedio a su funcionamiento y desarrollo. Resulta paradójico que, en los años en que se debería celebrar el triunfo de la democracia, Chile ratifique la Constitución del dictador Pinochet y no pueda superar su legado dictatorial, y también que gane en Argentina un presidente autodeclarado anarcocapitalista, con propuestas de gobierno protofascistas.

Más allá de que en Colombia, México y Chile lleguen al poder políticos declarados de izquierda en países con tradición neoliberal, o que retorne Lula da Silva a la Presidencia de Brasil luego del paso de un gobierno con tendencias autoritarias y neoliberales, es claro que existen prácticas de asedio sistemático a la democracia en un momento de disputa por la misma.

Si ampliamos la mirada y analizamos los ciclos largos económicos, políticos y sociales se puede tener una visión panorámica del momento que atraviesa la región y qué lo caracteriza. Es importante tener claro que la disputa por la democracia configura los ciclos políticos, los cuales deben ser leídos en el marco de los ciclos económicos y sociales.<sup>1</sup>

En los setenta, la instauración del neoliberalismo coincide con el ciclo recesivo económico y dictatorial en lo político en América Latina (primera ola de gobiernos neoliberales). Durante los ochenta y noventa se dan dos décadas perdidas en lo económico, en el momento de auge del neoliberalismo con el proceso de transición democrática representativa. En este período, se recupera la poliarquía y se pone fin a las dictaduras, mientras se implementan las políticas del Consenso de Washington. Tal período estuvo acompañado de una recuperación del ciclo de acumulación económica (en el marco de la revolución de las TIC) a nivel mundial, la convivencia entre políticas de cambio estructural proapertura de capitales y liberalización económica, en el marco de una cierta estabilidad institucional democrática. No obstante, los paupérrimos resultados sociales del modelo neoliberal hicieron posible que surjan movimientos sociales que dieron paso a que las poblaciones del continente se inclinen por gobiernos progresistas que buscaron modificar la economía política redistributiva y abrir espacios más democráticos inclusivos e institucionalizados. Es un período en el cual la democracia florece porque trasciende a la democracia representativa y se discute cómo avanzar en procesos democráticos con institucionalidad más

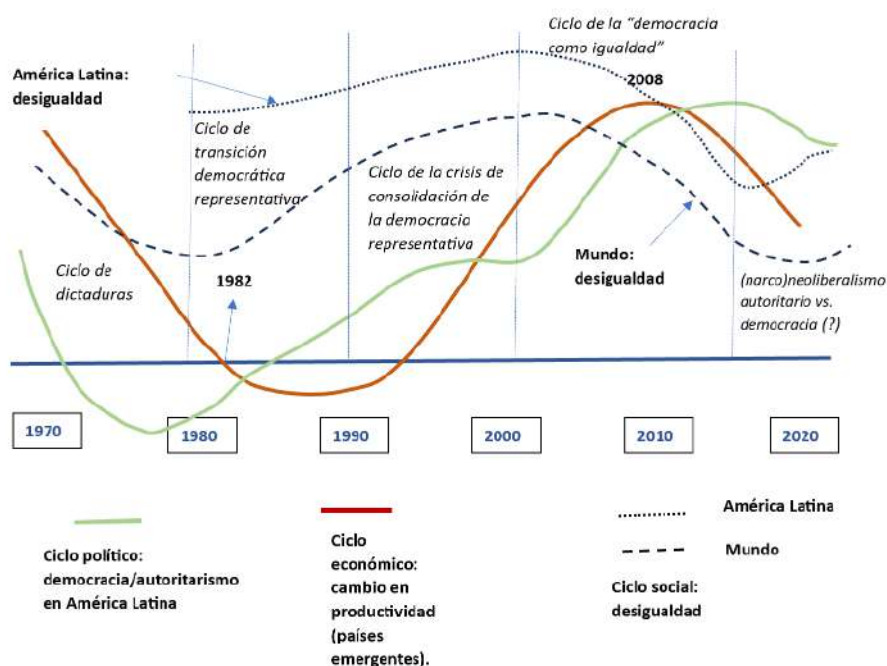
---

<sup>1</sup> Esta sección presenta una perspectiva macroglobal simplificada, teniendo conciencia de que el zoom de lo descrito permitiría observar lo que sucede al interior de los ciclos, como la existencia de democracias no liberales, o incompletas, o formas de autoritarismo que han coexistido, y coexisten, con los regímenes democráticos.

participativa, deliberativa o comunitaria. El nacimiento del neoconstitucionalismo latinoamericano es un buen ejemplo que da cuenta del ciclo expansivo democrático.

La primera ola de gobiernos progresistas –que coincide con un ciclo político de auge democrático en el que se cuestionan los resultados de la democracia liberal y del neoliberalismo– alcanzó la ola del ciclo económico positivo, que en el caso de la región estuvo acompañada del *boom* de *commodities*. No obstante, en el período 2007-2008 sucede la crisis financiera global que fue desencadenada por una crisis en el mercado de hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos. La quiebra de instituciones financieras importantes, como Lehman Brothers, desencadenó una crisis bancaria y una recesión global de la que el mundo no se ha recuperado. A pesar de tal tendencia, América Latina y el Caribe tuvieron un descenso de la desigualdad y una mejora del bienestar de su población hasta aproximadamente 2017-2018. Los ciclos económicos configuran los ciclos políticos y sociales, pero no siempre los determinan. Como se verá en las secciones 6 y 8, ¡la ideología importa, y mucho! (ver también Ramírez, 2023a, 2023b; 2024). No obstante, a la región llegó una restauración conservadora política que convergió casi dos lustros después del retorno de la crisis económica; y, vale decir, en el marco del continuo descenso de la tasa de ganancia del capital en el mediano y largo plazo, resultado del dominio del sector financiero sobre la economía y la sociedad, lo que ha llevado a un cambio en la distribución de las ganancias y una disminución en la inversión en el capital físico.<sup>2</sup> Como resultado, una proporción mayor de los beneficios se destina a los pagos a accionistas y a los intereses, en lugar de reinvertirse en producción física (Mazzucato et al., 2023). No solo aquello, el momento que vive la región –a diferencia de lo que sucedía a nivel mundial– está acompañado por un estancamiento en los procesos redistributivos del ingreso y la riqueza a nivel mundial. Es decir, el asedio a la democracia se configura en el marco de ciclos económicos recesivos y de estancamiento redistributivo con tendencia a la concentración tanto a nivel global como regional. A tal descripción se suma un hecho diferenciador: la crisis hegemónica de Estados Unidos y la emergencia de China como actor central en la geopolítica mundial (esquema 1).

Esquema 1. Ciclos económicos, políticos y sociales en América Latina y el mundo, 1970-2020<sup>3W</sup>



Fuente: Ramírez (2024).

Estamos en un segundo momento de la disputa por la democracia. Este segundo tiempo que disputa el progresismo,

<sup>2</sup>Como han señalado Rotta y Kumar (2024), la tasa mundial de ganancia cae porque la composición orgánica del capital [OCC, por su sigla en inglés] aumenta más rápido que el aumento en la tasa de plusvalía, la participación salarial del trabajo productivo se mantiene constante y se da un incremento de la inversión de capital productivo en China (país que gana relevancia en la economía global), en tanto que incrementa la inversión de capital improductivo en Estados Unidos (país que –en su defecto– pierde peso en la economía global).

<sup>3</sup>Para un análisis profundo de este esquema ver Ramírez (2024).

por una segunda ola o que no se inicie una tercera ola autoritaria neoliberal, viene acompañado de una estrategia cultural de los actores que buscan retomar la agenda neoliberal. En términos de disputa electoral podemos señalar que la estrategia más eficaz de los actores económicos y sociales que buscan instaurar el neoliberalismo –hoy en día– es el neoconservadurismo (de tintes fascistas). Para instaurar la agenda socioeconómica neoliberal, estos actores recurren a la estrategia cultural de construcción de identidades conservadoras. Esto es un tema que modifica el sentido de lo que fue el neoliberalismo del siglo XX.

Luego de gobiernos populares que interpelaron al neoliberalismo, hoy en día la democracia está nuevamente asediada; pero, su sentido en disputa. La crisis del capitalismo hace poco probable que incluso el matrimonio democracia electoral-neoliberalismo pueda prosperar.

Los proyectos políticos actuales de derecha en la región no ponen principalmente el centro del debate público en la agenda neoliberal (la del Consenso de Washington), sino que usan narrativas de la esfera cultural, aupando semánticas identitarias tales como la xenofobia, el antifeminismo, el racismo, la aporofobia y el anticomunismo, que tienden a configurar –con tendencias diferenciadas a las surgidas originalmente en Europa– nuevas tendencias fascistas. En ese marco y con sus respectivos matices, las contiendas electorales se polarizan en la región con dos concepciones del mundo opuestas, que disputan en dos registros diferentes en términos de narrativas: los gobiernos progresistas nacional-populares que colocan el debate principalmente en el ámbito de lo social y económico y las derechas neoliberales que apuestan al ámbito de lo cultural. No es casual en este marco que –en la región– el apoyo a las dictaduras militares haya crecido casi 14 puntos porcentuales desde el 2009 a la actualidad (Latinobarómetro, 2023).

Las fobias que generan las narrativas conservadoras engendran violencia social y la justifican. Configuran potenciales proyectos neoconservadores y neoliberales. A tal perspectiva se suman las estrategias de golpes institucionales dentro del mismo sistema democrático liberal que configuran autoritarismos neoliberales (Ramírez, 2020a, 2020b). Los estados de excepción, en este contexto, se hacen frecuentes, naturalizándose. Es claro que la propia democracia liberal es un sistema que ha permitido el desarrollo del neoliberalismo y la desigualdad, razón por la cual debe superarse su lógica netamente institucional si se buscan transformaciones sociales radicales.

Este fenómeno, que adquirió fuerza en los últimos lustros, choca con la ira justa del excluido del sistema económico, del discriminado por su color de piel, de la violentada por ser mujer, del señalado por ser migrante.

El debate mencionado no es una cuestión de moral sino de justicia; pero la narrativa neoconservadora lo moraliza porque resulta una de sus principales armas para diluir la política. Con la disolución de la política se niega la posibilidad de resolver los problemas por vías pacíficas.

Pero el problema resulta más profundo dado que, a diferencia de lo que sucedió en los setenta, la recesión económica viene de la mano de una crisis hegemónica en donde el imperio decadente (Estados Unidos) empieza a ser sustituido por uno nuevo (China), razón por la cual recurre a la estrategia de control vía la fuerza: las guerras.

El hecho de que el ciclo económico intente moldear los ciclos políticos y que exista un cierto retorno cíclico de lo económico, social y político no implica determinismos históricos. De hecho, como se esbozará más adelante, la ideología puede constituirse en un potente antídoto anticíclico de existir voluntad política (ver sección 6). Lo revisado simplemente busca dar cuenta del *habitus* en que se desenvuelve la democracia hoy en día.

Pero así como se pueden describir escenarios que parecen oscurecer el destino de las democracias en un aparente eterno retorno, América Latina ha mostrado dar la disputa desde lo social y lo político para buscar construir nuevos pactos en donde han emergido propuestas alternativas de convivencia sociales como el Buen Vivir, el Vivir a Plenitud, el Sumak Kawsay, el Alli Kawsay, el Vivir Sabroso. La crisis hegemónica también resulta un escenario con potencia transformadora si viene acompañada de una integración regional y la construcción de un mundo multipolar. La Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la organización intergubernamental compuesta por Brasil, India, China y Sudáfrica (BRICS) son instancias que no existían en los setenta. También se ganan las partidas cuando se juega de visitante. Entonces, es claro que la historia se disputa y en América Latina y el Caribe se está jugando la partida.

Como se esbozará más adelante, tal macroestructura debe dimensionarse bajo el prisma del impacto que tiene el capital transnacional en la promoción del neoliberalismo y el autoritarismo.

### 3. Democracia y capitalismo

Como es conocido, la salud del capitalismo es la rentabilidad. A lo largo de la historia capitalista, las ganancias se han producido o por transferencia de riqueza (etapa mercantil) o por la generación de plusvalor del trabajo (época del capitalismo industrial) (Shaikh, 2016).

Hoy en día, asistimos a una nueva acumulación originaria basada en la “minería de datos” y la información del *general intellect*, que se transforman en valor de cambio en los circuitos financieros. Así como en el mercantilismo la ganancia por transferencia se dio a través de procesos violentos de explotación de mano de obra esclava y de recursos naturales, hoy en día se retorna al mismo tipo de ganancia rentista a través de otro extractivismo: el infocognitivo.

El valor no se genera solo en el trabajo, sino que está en cada instante de la vida cotidiana que se transforma en información al ser procesado por grandes corporaciones monopólicas, que controlan las autopistas informáticas y que tienen la capacidad de procesarlas y colocarlas en los circuitos financieros. Este extractivismo infocognitivo no se genera fortuitamente a través de procesos denominados “minería de datos”. Así, por ejemplo, tanto o más valioso que el dinero de los bancos es la información que controlan sobre todas las transacciones que se hacen en los mercados financieros. Más allá del circuito financiero, el dato procesado adquiere la forma de capital. A las comunicaciones se les suma la logística y la domótica, lo que permitirá acrecentar un mayor nivel de extracción informacional.

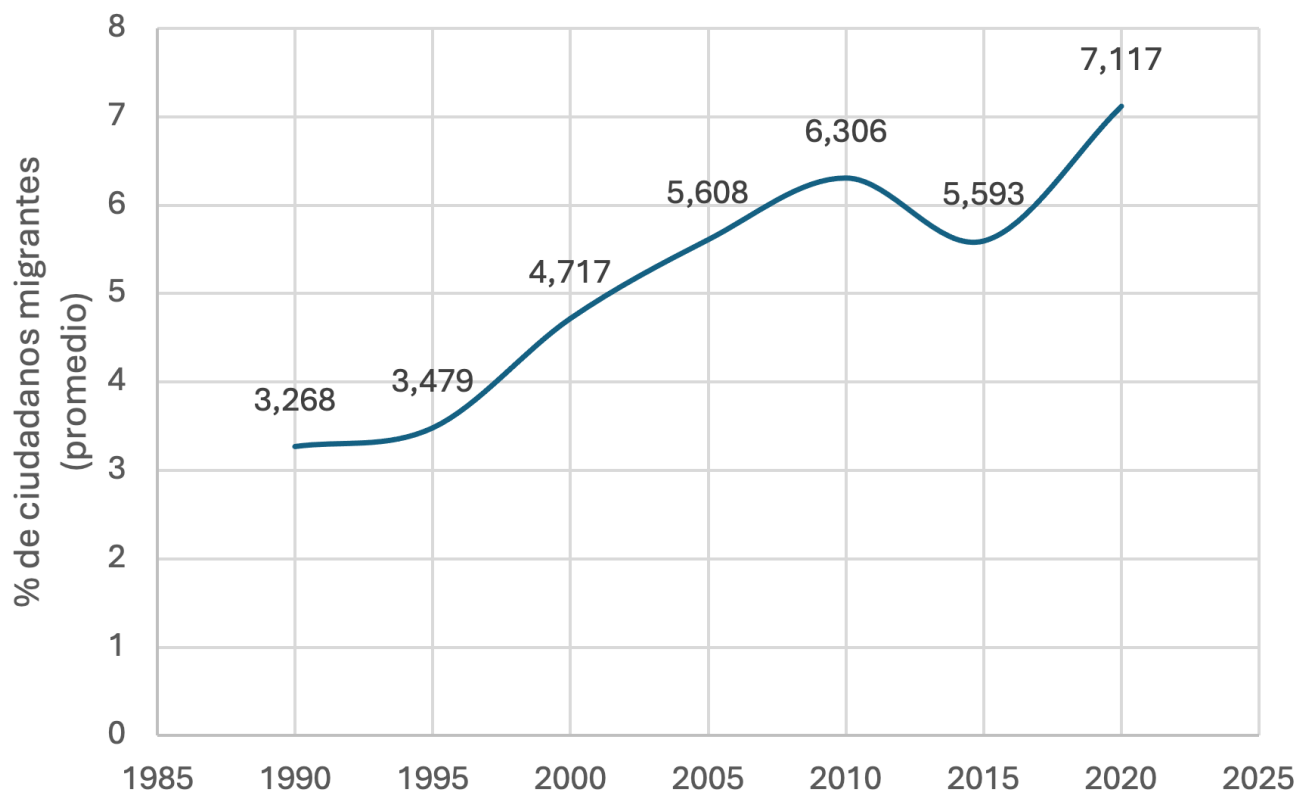
Así, estamos asistiendo a una metamorfosis en el mundo del trabajo con características específicas en el Sur Global, en donde existe insuficiencia de trabajo (puestos de empleo) sobre todo para la juventud y precarización laboral, que ocasionan estampidas migratorias como soluciones ficticias (disminuir desempleo y generar divisas).

En efecto, América Latina vive un fenómeno de desindustrialización de sus economías, lo que genera subempleo o insuficiencia de puestos de empleo en las economías. Si bien el desempleo es del 7 % en promedio a nivel regional, en los jóvenes este asciende al 17 %. A su vez, se puede señalar que un tercio de la población genera su propio empleo en la región (es decir, trabaja como cuentapropista) y un cuarto de las mujeres trabaja exclusivamente dentro del hogar sin remuneración (CEPAL, 2024).<sup>4</sup> Tal fenómeno genera un crecimiento sistemático de la migración, en donde 7 % de la población de la región ha migrado, llegando a alcanzar el 18,4 % de la población uruguaya o el 12,4 % de la paraguaya. Esta migración toma la forma de –al menos– tres grandes circuitos: la migración calificada (ligada a procesos de “robo” de cerebros que se insertan en el sector tecnológico o de conocimiento); mujeres cuidadoras; y población –predominantemente joven– que busca su destino en cualquier otra forma de empleo fuera de su país de nacimiento.

---

<sup>4</sup> Ver Statistics and Indicators: Demographic and Social - CEPALSTAT Statistical Databases and Publications

Gráfico 1. Porcentaje de la población del país que ha migrado (promedio simple)



Fuente: Elaboración propia basada en Restrepo Betancur (2021).

Por otra parte, la inversión extranjera que llega para generar manufactura desarrolla la industria con mano de obra precaria generando un nuevo paradigma productivo: modelos de exportación de mano de obra incorpórea (maquilas) (Delgado Wise, 2023). A su vez, el capitalismo de plataforma desarrolla un empleo con nuevas formas de explotación en doble vía. Por un lado, el cognitariado, que constituye parte del componente físico de la virtualidad: ser el ejército de programadores que corrige manualmente los programas para que la inteligencia artificial aprenda; realizar el trabajo manual que los robots hacen mal o no pueden hacer; realizar servicios digitales a destajo (traducciones, atender llamadas, etc.). Por el otro, el trabajador de plataformas se configura como el último eslabón de la cadena de valor: la entrega final del bien o servicio de las plataformas digitales (siendo el ejemplo paradigmático Amazon o Uber), en donde incluso parte del capital físico de lo virtual es invertido por el trabajador sin reconocimiento en las utilidades: la bicicleta, la moto o el auto.

La posición del Sur Global es principalmente pasiva. Al mencionado extractivismo de la minería de datos se suman otros procesos igualmente violentos de expoliación: 1) la transferencia de conocimientos Sur-Norte por el flujo neto de migrantes calificados y cuidadoras; 2) el aporte de la producción científica de investigaciones del Sur que son apropiadas por empresas transnacionales; 3) los procesos de biopiratería de recursos genéticos del Sur; y, 4) la extracción de saberes ancestrales y tradicionales para generar tecnologías.

Estos procesos se concretan a través de la construcción ficticia de las ideas, los saberes acumulados por los pueblos originarios, los conocimientos y la información de la biodiversidad como bienes escasos, a través de sistemas cada vez más sofisticados de propiedad intelectual, de tecnologías digitales y de nuevos productos financieros que se negocian en las bolsas de valores. Este panorama genera una nueva biopolítica sobre los cuerpos y las vidas (humanas y no humanas), en donde parte sustancial de la acumulación se basa en la construcción de panópticos mundiales, que mediante la vigilancia permiten generar información para que funcione la díada control-acumulación.

En América Latina, lo antes señalado es consecuencia de un problema estructural: su matriz productiva primario-exportadora, pero sobre todo la característica de tener una matriz secundario-importadora de bienes industriales

y terciario-importadora de conocimiento (Ramírez, 2018). Así como contar con ingentes reservas de petróleo y, por ejemplo, no poseer industria petroquímica no es un problema exógeno sino endógeno, actualmente existe un extractivismo infocognitivo porque no se ha desarrollado soberanía cognitiva en nuestra región. Se invierte poco en ciencia, tecnología e innovación y se tienen sistemas universitarios napoleónicos que no asumen el objetivo de generar un nuevo conocimiento ni desarrollar tecnología innovadora. Esta situación hace que la región sea más vulnerable en términos de soberanía a *shocks* externos, como lo demostró el impacto de la COVID-19.

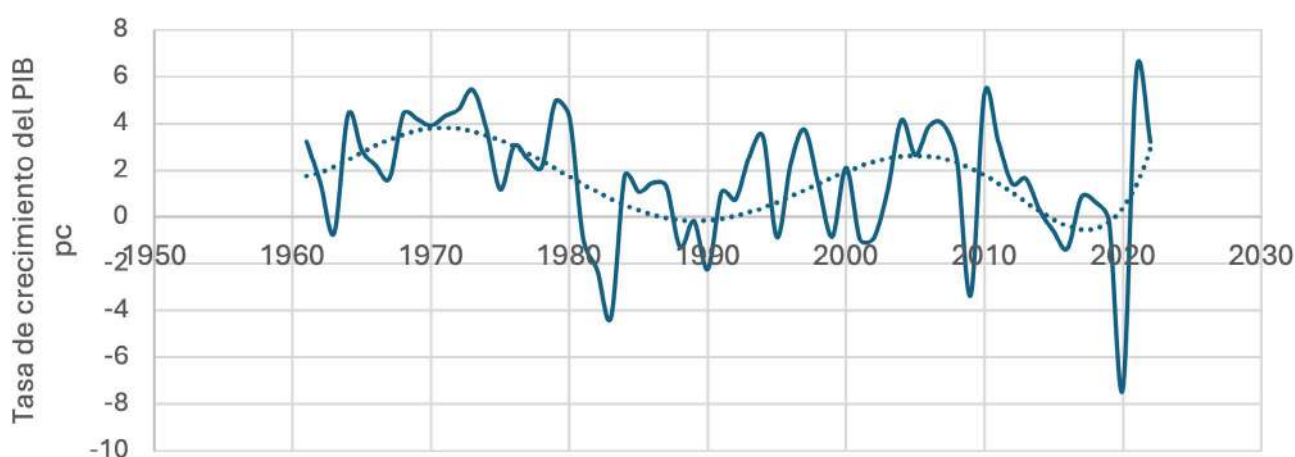
A su vez, el rentismo de las elites, sobre todo las importadoras y las pertenecientes al sistema financiero, produce inmovilidad estructural productiva. ¿Para qué producir tecnología o invertir en innovación si puedo importar y generar ganancias solo a través de la intermediación (sin riesgo)? En el marco de lo que sucede en el mundo se genera en la región latinoamericana un estrangulamiento tecnocognitivo (Ramírez, 2019), que va más allá de los circuitos monetarios y produce economías más vulnerables al generar un neodependentismo de la *mentefactura* de la periferia hacia los países “centrales”.

Mientras en la crisis del capitalismo los países industrializados o que más se han desarrollado ponen el foco del fomento productivo en el conocimiento y el desarrollo de tecnología (principalmente al principio y final de la cadena de valor), las economías de nuestra región continúan siendo primario-exportadoras; y sobre todo de servicios, de pequeños comerciantes que venden productos importados (generalmente de China) u otro tipo de servicios de muy bajo valor agregado.

Esto implica algo fundamental para el análisis de la democracia. La ciudadanía en su mayoría vive de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo en el día a día. Por eso no basta con buscar garantizar que no se despidan a la gente porque la mayoría de los ciudadanos trabajan en el mercado informal, es cuentapropista o se encuentra subempleada. Únicamente un sector muy pequeño de la economía se logra conectar a los circuitos de las cadenas de valor global.

A lo señalado se suma que en los últimos decenios en el mundo continúa la tendencia sistemática a la caída de la tasa de ganancia del capital, como bien lo han demostrado Maito (2013), Roberts (2014) o Rotta y Kumar (2024). Esto sucede a la par de que se observa también uno de los momentos de mayor concentración de la riqueza y el ingreso, como lo deja claro Piketty (2016). Esta concentración se debe, entre otras razones, a las nuevas prácticas que se dan en el capitalismo cognitivo y financiero que basa la ganancia en procesos de transferencia rentista y no de generación de ganancia “genuina” a través del plusvalor (Karabarbounis y Neiman, 2014). América Latina presenta, con diversos niveles, iguales patrones de ciclos económicos.

Gráfico 2. Crecimiento medio suavizado del PIB per cápita en América Latina y el Caribe, 1970-2022

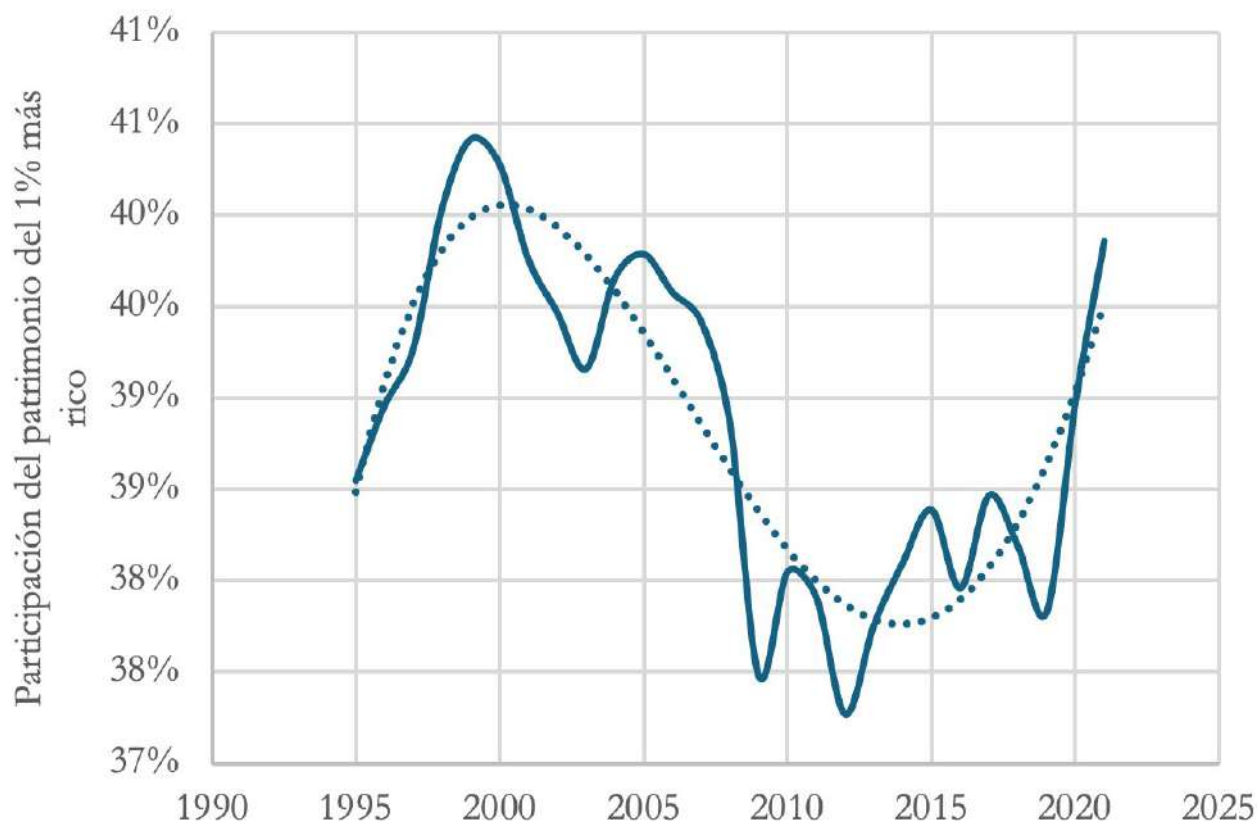


*Nota:* El crecimiento medio suavizado de la productividad laboral anual para los países emergentes o en desarrollo tiene igual comportamiento. Para un análisis de tal representación, ver Brynjolfsson et al. (2017).

*Fuente:* Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial (1970-2022).

Esta caída de la tasa de ganancia está acompañada de una concentración de la riqueza: la economía del capitalismo recesivo va de la mano con la política neoliberal de la desigualdad. En efecto, si estudiamos los datos de la World Inequality Database [WID], se puede observar que luego de la reducción en la concentración del 1 % más rico de la población desde, aproximadamente, el 2000 hasta el 2010, la segunda década del nuevo milenio se presenta una concentración en la participación del percentil más rico a nivel mundial.

Gráfico 3. Participación en el patrimonio mundial del 1 % más rico del mundo, 1990-2021



Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).

A la vez, la crisis y la transición capitalista se desarrollan en la región con otras dos particularidades que son núcleos estructurantes del desenvolvimiento de la democracia. Por un lado, se profundiza el extractivismo, dado que América Latina y el Caribe [ALC] es uno de los continentes donde están los minerales que garantizan la transición energética mundial y los materiales que se necesitan en el capitalismo digital: litio y tierras raras.

Por otra parte, la crisis del capitalismo en la región vino acompañada de una nueva geopolítica de la droga. La irrupción del fentanilo en el consumo de Estados Unidos y la victoria de un gobierno progresista en Colombia (Gustavo Petro) hizo que la industria del narco se desplace. Tal desplazamiento ha implicado la disputa por el Estado; la cual, a su vez, está marcada por la competencia por el territorio de cárteles que pugnan por nuevas rutas de producción y distribución, sobre todo de la cocaína. En este marco, existe un desplazamiento de la venta de coca de Estados Unidos a Europa y Asia. En este escenario, la geopolítica se desconcentra del circuito Colombia-México y se desplaza hacia el sur del continente. Así, se puede señalar que la crisis y transición capitalista en la región generan una doble necropolítica: la de la naturaleza (nuevas ecologías políticas de los recursos naturales) y la de los seres humanos que trabajan en la industria del narcotráfico.

En definitiva, se puede observar que: 1) se impone en el capitalismo contemporáneo una ganancia por transferencia que no genera valor genuino (extrae rentas del dato y la información); 2) crece la concentración de la riqueza y de los ingresos en el mundo y en la región (incremento de la desigualdad); 3) continúa sistemáticamente decreciendo la tasa de ganancia del capital. Tales fenómenos suceden a la par de la crisis hegemónica, ampliamente

documentada, en donde el bloque hegemónico liderado por EE. UU. pierde protagonismo global (el propio neoconservadurismo tiene una dimensión de repliegue nacionalista) y empieza a ser disputado por potencias emergentes en diversas regiones del mundo (en el Sudeste Asiático este proceso es significativo sobre todo por el crecimiento económico, en especial de China; pero este proceso no es ajeno al resurgir de la izquierda en ALC y en otras zonas, mostrando que no se trata de un fenómeno exclusivamente geoeconómico, etc.). No obstante, es claro que China es el país que adquiere mayor protagonismo en la geopolítica mundial.

A nivel regional se suman los siguientes fenómenos: 4) América Latina vive un estancamiento de su matriz productiva en donde se transita a un nuevo extractivismo, en el cual el litio y las tierras raras pasan a tener relevancia y se acentúa el componente secundario-importador de bienes industriales e importador de bienes terciarios, con un amplio resguardo de las elites económicas de la posesión de divisas en paraísos fiscales; y, 5) en el marco de un mercado laboral altamente segmentado, con altos niveles de informalidad y vulnerabilidad hacia los *shocks* externos, en donde sus trabajadores dependen de la venta diaria ininterrumpida de su fuerza de trabajo para garantizar la supervivencia mayoritaria de sus familias, el trabajo desplazado por la desindustrialización en buena parte es asimilado por un trabajo precarizado generado en el circuito de las plataformas digitales y en la industria del narcotráfico.

Como se verá más adelante, estas características constituyen el caldo de cultivo de una bomba de tiempo para la democracia, pues no tienen válvula de escape y en cualquier momento pueden explotar al agudizarse las contradicciones por la sobrevivencia.

Si bien lo señalado es la materialidad que configura los límites o potencia de la democracia, dos fenómenos adquieren relevancia, razón por la cual se desarrollarán con mayor precisión: a) el neoextractivismo alrededor de la transición energética mundial, y b) el narcocapitalismo.

### 3.1. Democracia, acumulación por desfosilización y transición energética<sup>5</sup>

Los nuevos y falsos procesos de desmaterialización de la economía global, disfrazados en su digitalización y en una mentirosa transición energética, han generado una demanda creciente de minerales y tierras raras. América Latina, por otro lado, se ha caracterizado por sus economías altamente rentistas, exportadoras y extractivistas (primario exportadoras), pero con niveles de especialización desiguales entre sus distintos países (Martín y Ramírez Gallegos, 2008; Warnecke-Berger, 2023). Hasta el 2014, el extractivismo de materias primas (minerales, combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales) representaba más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de los países de América Latina, llegando a sus máximos en Chile y Ecuador, donde superaba el 80 %. En Chile las exportaciones de metales representaban cerca del 30 % del total de exportaciones de materias primas, y las de minerales no metálicos cerca del 27 %. En Ecuador el principal rubro era, sin duda, el petróleo (cerca del 52 %), teniendo los metales y minerales una participación mínima de menos del 2 %. Sin embargo, hasta el 2022 las exportaciones de metales del Ecuador llegaron a representar el 11,07 % del total de sus exportaciones. En cuanto a la participación de la exportación de metales y minerales en las exportaciones totales, las economías de Chile (57 %), Venezuela (40 %), Perú (20 %) y Colombia (18 %) dependen en gran medida de ellas. En cuanto a los hidrocarburos, las más dependientes son Panamá (64 %), Colombia (54 %) y Ecuador. América Latina es también una región exportadora de carne y vegetales; de hecho, uno de cada cuatro kilogramos de carne vacuna consumida en el mundo proviene de esta región, lo que es posible gracias a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de sus elites, beneficiarias directas del extractivismo agrario (Guereña, 2016).

En el contexto de la transición energética del Norte Global, se ha incrementado la demanda global y, por tanto, las presiones sobre los *comunes* utilizados en las tecnologías de las energías renovables o limpias, tales como

---

<sup>5</sup>Esta sección se basa en el artículo “Las disputas (anti)democráticas por el control de los bienes comunes y la transición energética en América Latina” de Antonio Malo y Lucía Gallardo, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

el litio y la madera de balsa. El litio se utiliza sobre todo en las baterías de los dispositivos electrónicos y de los vehículos eléctricos, la madera de balsa para la producción de las aspas de los generadores eléctricos eólicos. En América Latina se encuentran estos dos *comunes* de manera abundante. Lamentablemente, no se han encontrado investigaciones sobre el impacto de la extracción de madera de balsa en los bosques húmedos tropicales latinoamericanos. Esta estructura impacta en la Amazonía, siendo el principal destino de exportación China.

El litio es un elemento estratégico a nivel global, el mundo desarrollado y las grandes transnacionales tecnológicas se disputan su control y hegemonía. Aunque las reservas de litio de Brasil, México (donde ha sido nacionalizado) y Perú sean comparativamente pequeñas, siguen siendo importantes (Hernandez y Newell, 2023). Se estima que el triángulo del litio, conformado por Bolivia, Chile y Argentina, contiene entre el 56 % y el 70 % del litio global. La transición energética global depende del litio, quien(es) lo controlen serán actores clave en el concierto global.

Las elites latinoamericanas, debido a las estructuras políticas y económicas que garantizan su propia acumulación de riqueza, han sido las beneficiarias directas del extractivismo en América Latina (Cañete Alonso y Bonilla, 2018). El 82 % de la minería a nivel global se produce para garantizar la transición energética del Norte Global (Sonter et al., 2020). De esta manera, el extractivismo de minerales en América Latina se ha producido también a costa de garantizar una transición energética latinoamericana propia, justa, igualitaria y soberana.

América Latina, junto con el Sudeste Asiático, es la región que más exporta materias primas por habitante, siendo las tasas de crecimiento de dichas exportaciones mayores a la media mundial. La participación de América Latina, por tanto, es cada vez mayor en los procesos globales de apropiación de los *comunes*. Sin embargo, es también una región con una alta diversidad de materias primas de exportación, lo que incrementa también la diversidad de procesos de degradación ecológica y de impactos ambientales. Por otro lado, los bienes que importa tienen un costo por kilogramo significativamente mayor a los de exportación, con lo cual el agotamiento de sus materias primas no ha generado un verdadero retorno económico (Infante-Amate et al., 2022). De esta manera, la apropiación de los *comunes* de América Latina ha contribuido directamente en los procesos de acumulación y reproducción del capital, tanto a nivel global, como a nivel de las elites latinoamericanas.

La situación de injusticia social, de grandes limitaciones en el acceso a los servicios, de grandes privilegios y de dificultades para acceder a los derechos, hace que sea urgente financiar al Estado. La respuesta de América Latina ha sido a través del endeudamiento público y del extractivismo en alguna(s) de sus formas. No obstante, su extracción no ha permitido la reinversión para generar otro modo de acumulación productiva.

### 3.1.1. Democracia y extractivismo

En los Estados latinoamericanos la asignación de los recursos primarios ha sido determinada por las relaciones de poder coloniales. El Estado, más que una institución de representación de la ciudadanía se ha constituido en uno de los instrumentos de dominación usados por las elites. Estos han consolidado tanto estructuras de dependencia paternalistas para campesinos, mujeres, indígenas y para la población afro, como el control de la tierra y los procesos de enriquecimiento directamente dependientes del latifundio (Guereña, 2016; Malo Larrea, 2015). Dichas elites, trabajando junto con la Iglesia, han justificado la limitación de los derechos políticos y ciudadanos de estos grupos, en la necesidad de protegerlos de ellos mismos (Albán, 2011; Durand, 2023). De esta manera, salvo períodos históricos específicos y excepciones puntuales, los Estados en Latinoamérica han garantizado los privilegios de sus elites, por sobre los derechos de la mayoría de la población (Cañete Alonso y Bonilla, 2018; Durand, 2023).

Desde esta lógica está muy claro que en América Latina existe una democracia con un Estado con autonomía relativa. El filósofo griego Aristóteles proponía dos criterios para definir un sistema político: quién(es) tienen el poder y para qué se utiliza (Vallès y Martí Puig, 2020). De esa manera, se podría plantear un análisis de los sistemas políticos latinoamericanos en función de quién tiene el poder sobre los *comunes* y para qué se utiliza ese poder. Democracia significa *el poder del pueblo*, en este caso se podría interpretar como el poder del pueblo sobre los *comunes*.

### 3.1.2. Los conflictos socioecológicos en América Latina

Los procesos de *acumulación por desposesión* y de *traslado autoritario de costos* se traducen en conflictos socioecológicos. Estos conflictos involucran normalmente a personas y colectivos que tradicionalmente han sido marginados y excluidos por la sociedad, y abandonados por el Estado. De hecho, el Estado, la democracia instrumental, no solamente los ha abandonado, sino que ha puesto las instituciones estatales al servicio de la acumulación y reproducción del capital. Esto se hace evidente en el uso de los aparatos represivos del Estado en los distintos conflictos socioecológicos, casi siempre a favor de las empresas. La literatura que respalda esto es enorme. Pero, adicionalmente, también se ha expresado en la normativa y en los procesos administrativos relacionados con 'lo ambiental' (Boelens et al., 2015; Goldman, 2005; Ward, 2013).

En este contexto, la teoría de intercambio comercial desigual se vuelve fundamental. Dicha teoría propone que el crecimiento de las economías desarrolladas del Norte Global se ha sostenido en el traslado escondido del valor a través de la apropiación de los recursos y del trabajo del Sur Global (Dorninger et al., 2021; Hickel et al., 2022). En el estudio realizado por Hickel, Dorninger, Wieland, y Suwandi (2022) se muestra que, solamente en 2015, el Norte Global se apropió de 12 billones<sup>6</sup> de toneladas equivalentes<sup>7</sup> de materias primas incorporadas, de 822 millones de hectáreas de tierra incorporadas, 21 exajoules<sup>8</sup> de energía incorporada y 188 millones de años/persona de trabajo incorporado, por un valor de US\$ 10,8 trillones. Los mismos autores estiman que entre 1990 y 2015 el Norte Global extrajo del Sur Global US\$ 242 trillones (en dólares constantes de 2010): 254,4 billones de toneladas equivalentes de materias primas incorporadas, de 32.987,23 millones de hectáreas de tierra incorporadas, 650,34 exajoules de energía incorporada y 5.956,62 millones de años/persona de trabajo incorporado.

En Sudamérica, estimaciones muy conservadoras muestran que sus exportaciones en materiales y energía son tres veces superiores a su propio consumo (Martínez Alier, 2015). Por otro lado, al hablar de América Latina, esta región exporta todos los tipos de materias primas: biomasa (productos basados en la explotación del suelo), minerales metálicos y no metálicos (productos basados en la explotación del subsuelo), y contenedores de energía, como carbón, gas y petróleo (productos basados en la explotación del subsuelo). Entre 1900 y 2016 sus exportaciones anuales de materiales subieron de 4 millones de toneladas por año a 610 millones de toneladas por año. Sus destinos tradicionalmente fueron Estados Unidos y Europa, sin embargo, desde los inicios del siglo XXI, esto ha ido cambiando y hoy su destino principal es el Sudeste Asiático (Infante-Amate et al., 2022).

Esto se ha traducido en una importante cantidad de conflictos socioecológicos. Una buena muestra de ellos está recogida en el Atlas Global de la Justicia Ambiental (EJOLT, por sus siglas en inglés). Este atlas es una iniciativa que recoge y caracteriza conflictos socioecológicos registrados por personas, organizaciones sociales y ONG. No es un censo, por lo que no ha implicado un levantamiento sistemático de conflictos socioecológicos. La cantidad de conflictos identificados en un país o región dependerá, entre muchos otros factores, de la organización y fortaleza del tejido de organizaciones sociales, y también del financiamiento y apoyo que estas tengan. Teniendo en cuenta esto, la iniciativa del EJOLT es un aporte fundamental al estudio de los conflictos socioecológicos, que debe ser usada. Las dos tablas siguientes son un resumen de los conflictos socioecológicos de América Latina registrados en el EJOLT.

---

<sup>6</sup>El estudio citado utiliza billones estadounidenses ( $10^9$  o mil millones) y trillones estadounidenses ( $10^{12}$  o un millón de millones) y no los del sistema internacional, donde un billón equivale a un millón de millones ( $10^{12}$ ), y un trillón a un millón de billones ( $10^{18}$ ).

<sup>7</sup>Para poder dimensionar la apropiación en su real magnitud es esencial incluir a los distintos elementos que se consumen en el proceso productivo de un bien o de un servicio, tales como el agua, el territorio, la materia y la energía. Cuando estos elementos son incluidos, se añade a la unidad de medida el término *incorporada/o* (*embodied*, en inglés).

<sup>8</sup>El prefijo *exa* significa  $10^{18}$ , es decir, un quintillón en el sistema estadounidense, o un trillón en el sistema métrico decimal. En este caso sería  $10^{18}$  Joules. Los Joules son unidades del sistema internacional para expresar energía, trabajo o calor (una kilocaloría, la unidad más usada, equivale a 4.187 joules).

Tabla 1. Número de conflictos socioecológicos en América Latina de acuerdo con el estado de reacción social

| Estado del conflicto                              | Mesoamérica | Caribe | Sudamérica | Total | %     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|-------|
| <b>Activo</b>                                     | 132         | 11     | 289        | 432   | 38,78 |
| <b>Latente</b>                                    | 5           | 2      | 23         | 30    | 2,69  |
| <b>Movilizaciones para reparación de impactos</b> | 61          | 9      | 146        | 216   | 19,39 |
| <b>Preventivo</b>                                 | 124         | 11     | 273        | 408   | 36,62 |
| <b>Desconocida</b>                                | 11          | 0      | 17         | 28    | 2,51  |
| <b>TOTAL</b>                                      | 333         | 33     | 748        | 1.114 | 100   |
| <b>%</b>                                          | 29,89       | 2,96   | 67,15      | 100   |       |

Fuente: EJOLT (varios años). <https://ejatlas.org/>

Tabla 2. Número de conflictos socioecológicos en América Latina de acuerdo con su categoría

| Categoría del Conflicto                                     | Mesoamérica | Caribe | Sudamérica | Total | %     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------|-------|
| <b>Conservación de la biodiversidad</b>                     | 14          | 2      | 23         | 39    | 3,5   |
| <b>Biomasa y conflictos de tierras</b>                      | 45          | 1      | 138        | 184   | 16,52 |
| <b>Combustibles fósiles y justicia climática/energética</b> | 40          | 3      | 102        | 145   | 13,02 |
| <b>Industrias y servicios</b>                               | 9           | 3      | 25         | 37    | 3,32  |
| <b>Infraestructura y ambiente construido</b>                | 41          | 5      | 47         | 93    | 8,35  |
| <b>Minería de minerales</b>                                 | 67          | 6      | 258        | 331   | 29,71 |
| <b>Minería de materiales de construcción</b>                | 4           | 2      | 14         | 20    | 1,8   |
| <b>Agua</b>                                                 | 71          | 2      | 89         | 162   | 14,54 |
| <b>Gestión de desechos</b>                                  | 23          | 6      | 39         | 68    | 6,1   |
| <b>Turismo y recreación</b>                                 | 17          | 3      | 6          | 26    | 2,33  |
| <b>Energía Nuclear y gestión de desechos nucleares</b>      | 2           | 0      | 7          | 9     | 0,81  |
| <b>TOTAL</b>                                                | 333         | 33     | 748        | 1.114 |       |
| <b>%</b>                                                    | 29,89       | 2,96   | 67,15      | 100   |       |

Fuente: EJOLT (varios años). <https://ejatlas.org/>

Los datos son contundentes: los conflictos activos y los conflictos para prevenir actividades y proteger los territorios y los *comunes* agrupan casi el 80 % de los casos. Por otro lado, los conflictos sobre la extracción de minerales, los relacionados con la biomasa y las tierras y los relacionados con el agua agrupan casi el 61 % de los casos. Es claro que la conflictividad está directamente relacionada con la lucha contra el traslado autoritario de costos, y la defensa de los territorios y de los *comunes*.

### 3.1.3. Tierra concentrada, democracia sin demos

No se podrá hablar de verdaderas democracias en América Latina mientras sus Estados no tengan una verdadera soberanía sobre los *comunes*. Pero mucho más allá de esto, la democracia real debe radicar en que las y los latinoamericanos tengamos acceso justo, igualitario y equitativo a los *comunes*, tengamos poder real de decisión sobre el uso y la gestión de los *comunes*, y podamos ejercer un control social efectivo sobre su uso y gestión.

En América Latina el poder sobre los *comunes* lo han tenido las elites, y ha sido utilizado para garantizar sus propios privilegios e incrementar su poder económico. Los datos son devastadores (Guereña, 2016): hasta 2016, las 32 personas más ricas de América Latina tenían la misma riqueza que los 300 millones más pobres, y los activos no financieros (entre ellos la tierra) representaban el 64 % de la riqueza de América Latina. Es decir, que la propiedad sobre la tierra se ha constituido en una de las mayores expresiones de desigualdad. El acceso a los *comunes* depende en gran medida del acceso a la tierra, a que la relación de la tierra se materialice en un territorio. De acuerdo a Moreano et al. (2017), los territorios son espacios en disputa, objetivos políticos en sí mismos. Desde los territorios se construye la territorialidad, es decir, las racionalidades que confluyen en esos espacios llamados territorios, donde se materializan las tensiones de la modernidad y decolonialidad.

El reporte de OXFAM *Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina* (Guereña, 2016) muestra datos alarmantes: el coeficiente de Gini de la distribución de la tierra en América Latina era de 0,79; de 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. La tierra está peor repartida en Paraguay (0,93), Chile (0,91) y Venezuela (0,88), y mejor repartida en Costa Rica (0,69) (aunque este dato sigue siendo muy alto). En el mismo reporte, se encuentran otras visiones de análisis de la desigualdad en la distribución de la tierra: el 1 % de las explotaciones agrícolas más grandes concentra el 51 % de la tierra, con variantes importantes, en Perú representan el 77 % de la tierra, en Chile el 74,49 % y en Paraguay el 71,30 %. Los menos desiguales hasta 2016 eran Uruguay (18,69 %) y Ecuador (22,62 %). Colombia, desde esta lógica, es el país más desigual de América Latina, pues el 0,67 % de las explotaciones concentra el 67,6 % de la tierra. La proporción de tierra ocupada por las fincas más pequeñas es también un indicador de la desigualdad: estas ocupaban apenas el 12,3 % de la tierra en América Latina, el 12,3 % en América del Sur, y el 11,6 % en América Central. En Colombia las explotaciones de menor tamaño representan el 84 % de del total, y poseen apenas el 4% de la tierra, en Paraguay representan el 91 %, y poseen el 6 % de la tierra. De acuerdo con este mismo criterio, los países con mejor distribución son Uruguay (82,1 %/22,1 %), Brasil (86 %/21,4 %) y Guatemala (86,5 %/16,3 %).

Se trata de cifras que describen un contexto complejo en América Latina, en donde la concentración de la tierra, el extractivismo y el narcotráfico se entrelazan para restringir la autonomía estatal y perpetuar la desigualdad socioeconómica. Un análisis crítico de esta problemática debe considerar cómo la caída de la tasa de ganancia en el capitalismo global, combinada con la implementación de políticas neoliberales, ha incentivado la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación de capital. La concentración de la tierra se convierte en un eslabón clave, ya que permite a los grandes terratenientes no solo asegurar el control de recursos naturales estratégicos –como el litio y otras materias primas– sino también expandir actividades ilícitas como la producción para el narcotráfico, que funciona como un mecanismo paralelo de acumulación cuando la rentabilidad del sector formal se ve amenazada.

El neoliberalismo, al promover la desregulación y la apertura económica, no solo facilita la entrada de capitales y la privatización de recursos públicos, sino que también establece condiciones que favorecen la concentración de la riqueza y la precarización de los pequeños productores rurales. El resultado es un paisaje dominado por latifundios y economías extractivistas, donde la tierra no es simplemente un medio de producción agrícola, sino un activo estratégico en un sistema global de valorización. Esta lógica, a su vez, refuerza la dependencia de los Estados hacia grupos de poder ligados a la agroindustria y a otros sectores exportadores, reduciendo su capacidad para implementar políticas redistributivas y soberanas.

La expansión de la producción para el narcotráfico, por su parte, surge como una respuesta a la incapacidad de las economías locales para competir en el mercado global, agudizada por la caída de la tasa de ganancia en sectores tradicionales. Los actores vinculados al narcotráfico encuentran en los territorios rurales desregulados y en la concentración de la tierra un espacio ideal para articular sus operaciones, intensificando la violencia y la inseguridad en regiones ya debilitadas institucionalmente. La transición energética, en este contexto, se perfila como otro factor de tensión, ya que los recursos estratégicos (como el litio) atraen la intervención de grandes empresas transnacionales, generando una pugna por el control territorial que socava aún más las estructuras democráticas y fomenta dinámicas neocoloniales.

En síntesis, la articulación de la concentración de la tierra, el extractivismo, el neoliberalismo y el narcotráfico configuran un círculo vicioso de acumulación y violencia en América Latina. La solución propuesta de reordenar el territorio mediante reformas agrarias integrales se presenta como una estrategia necesaria para recuperar la soberanía y la equidad social, pero enfrenta resistencias estructurales profundas por parte de los grupos de poder locales e internacionales. La clave radica en dismantelar estos patrones de acumulación y dependencia, promoviendo modelos de desarrollo inclusivos que prioricen la seguridad y el bienestar de las comunidades, y no solo la rentabilidad a corto plazo de las élites.

### **3.2. Democracia y narcoacumulación<sup>9</sup>**

La concentración de la tierra, el extractivismo y el narcotráfico en América Latina no solo responden a dinámicas contemporáneas del capitalismo global, sino que tienen raíces históricas profundas vinculadas a un régimen de expropiación y violencia que se remonta a la colonización europea.

La subordinación de las economías locales y el control territorial, tanto en términos agrícolas como en la producción de drogas, no es un fenómeno reciente, sino una extensión moderna de la integración de estas regiones en un sistema capitalista mundial que, desde sus inicios, ha buscado explotar y mercantilizar tanto los recursos naturales como las prácticas culturales de los pueblos originarios.

En una perspectiva histórica de larga duración, el control de las drogas se ha entrelazado con las dinámicas del capitalismo global desde la época colonial hasta la actualidad. Con la invasión europea en América inicia un régimen de expropiación y violencia que criminaliza costumbres y prácticas autóctonas, y comienza a configurar un mercado global de sustancias psicoactivas, inicialmente ligado a alimentos como el café, el azúcar, el té y el tabaco.

Con el tiempo, la regulación médica y la expansión de la industria farmacéutica en el siglo XIX reforzaron este control, dando lugar a una distinción entre drogas legales e ilegales que favoreció a las corporaciones de fármacos y criminalizó a sectores marginalizados.

El siglo XX vio la consolidación de esta dinámica a través de la “guerra contra las drogas”, promovida por Estados Unidos, que utilizó la violencia estatal y la represión legal para proteger intereses geopolíticos y económicos en América Latina, a expensas del bienestar de las poblaciones locales; como sucedió con el Plan Colombia y el Plan México.

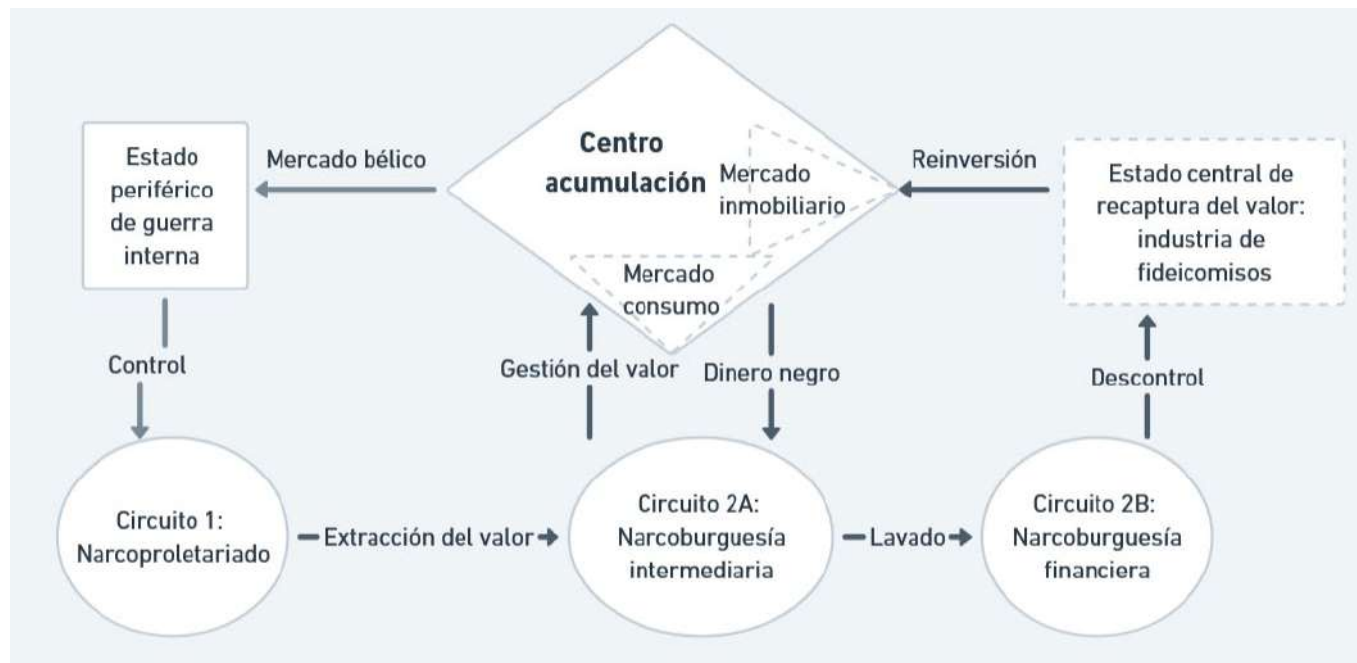
Esta dinámica se refleja en la emergencia de una estructura social de acumulación caracterizada por una naciente narcoburguesía que, a través de la industria de fideicomisos y la opacidad financiera en Estados Unidos, legitima su riqueza mientras perpetúa la violencia y la inseguridad en la región, criminalizando severamente al narcoproletariado, que sufre las consecuencias más severas de la guerra contra las drogas.

---

<sup>9</sup> Esta sección se basa en el artículo “Los alimentos terrestres. Narcolonialismo, guerra contra las drogas y democracias violentas en América Latina” de Juan Guijarro, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

Los principales beneficiarios del ciclo de acumulación del narcocapital no son, por tanto, los productores ni los intermediarios primarios, el narcoproletariado (circuito 1: de extracción del plusvalor), sino los intermediarios secundarios, en el tránsito periferia-centro, en alianza con agentes del centro (circuito 2: de transacción del excedente en dos momentos: tránsito periferia-centro de la mercancía y recaptura del valor en el lavado y la reinversión).

Diagrama 1. Ciclo de acumulación del narcocapital



Fuente: Elaboración propia.

En efecto, mientras el valor generado por la droga ha transitado históricamente desde la periferia hacia el centro del sistema capitalista, la violencia ha circulado en la dirección opuesta: como se confirma por la función que asumen los sistemas punitivos y los mercados bélicos, direccionados hacia el control violento de las poblaciones.

Bajo la dinámica de acumulación del narcocapital se ha implantado en la región latinoamericana el imperativo de militarizar la seguridad interna, transformando la función tradicional del Estado; que se vuelve, por una parte, flexible para el crimen narcofinanciero y, por otra, rígido para el control social violento, al incorporar a los ejércitos en tareas que tradicionalmente correspondían a las fuerzas de seguridad civil, con el efecto de convertir el espacio social en un campo de operaciones bélicas continuas.

Mapa 1. Militarización de la seguridad interna



Fuente: Elaboración propia.

Aunque no hay datos disponibles para todos los países –un indicio de deficiencias más profundas–, los siete casos que presentan series estadísticas más completas muestran evidencia suficiente para evaluar, de manera tentativa, algunas tendencias de la transformación hacia Estados de guerra interna en América Latina.

Tabla 3. Formaciones estatales de guerra interna

| Tipo de formación estatal                                      | Países                   | Tasa de homicidios intencionales | Tasa de casos de lavado de dinero | Tasa de presos por posesión de drogas | Tasa de presos por tráfico de drogas | Porcentaje del gasto militar | Percepción de control de la corrupción | Percepción de vigencia de la ley | Pobreza    | Gini       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Estados de violencia ilegítima y erosión social                | COL<br>ECU<br>SAL<br>MEX | Alta                             | Media-alta                        | Alta                                  | Media-baja                           | Medio-alto                   | Baja                                   | Baja                             | Media-alta | Alto       |
| Estados de violencia legítima en disputa y polarización social | BOL<br>HON               | Media-alta                       | Baja-media                        | Media                                 | Media                                | Bajo                         | Muy baja                               | Baja                             | Alta       | Medio-alto |
| Estado de violencia focalizada y control social                | CHI                      | Baja                             | Muy baja                          | Muy baja                              | Alta                                 | Alto                         | Alta                                   | Alta                             | Baja       | Medio      |

Fuente: Elaboración propia.

No obstante el imperativo belicista que asocia la seguridad con la militarización, al analizar los factores que marcan la formación estatal de guerra interna –a través de un modelo de estimación para datos de panel en

el período 2013-2022– se puede confirmar el peso negativo que han tenido algunas decisiones políticas en la violencia predominante.

Tabla 4. Método de estimación para datos de panel dinámico, variable dependiente tasa de homicidios, 2013-2022

| Chi-squared (Wald chi2): 93.74               |           |                 |       |       |                         |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------------------------|-----------|
| Probabilidad de chi2 (Prob > chi2): 0.000    |           |                 |       |       |                         |           |
| Número de observaciones: 56                  |           |                 |       |       |                         |           |
|                                              | Coef.     | Error est. rob. | Z     | P>z   | Intervalo de conf. 95 % |           |
| <b>Tasa de homicidios intencionales L1.</b>  | 0.5151271 | 0.0744234       | 6.92  | 0     | 0.36926                 | 0.6609942 |
| <b>Tasa de investigación de lavado</b>       | 14.03305  | 6.17452         | 2.27  | 0.023 | 1.931208                | 26.13488  |
| <b>Tasa de presos por posesión de drogas</b> | 0.3978518 | 0.1935241       | 2.06  | 0.04  | 0.0185514               | 0.7771521 |
| <b>Índice Gini</b>                           | 1.878907  | 0.7976602       | 2.36  | 0.018 | 0.3155214               | 3.442292  |
| <b>Constante</b>                             | -87.203   | 36.7079         | -2.38 | 0.018 | -159.1492               | -15.25684 |

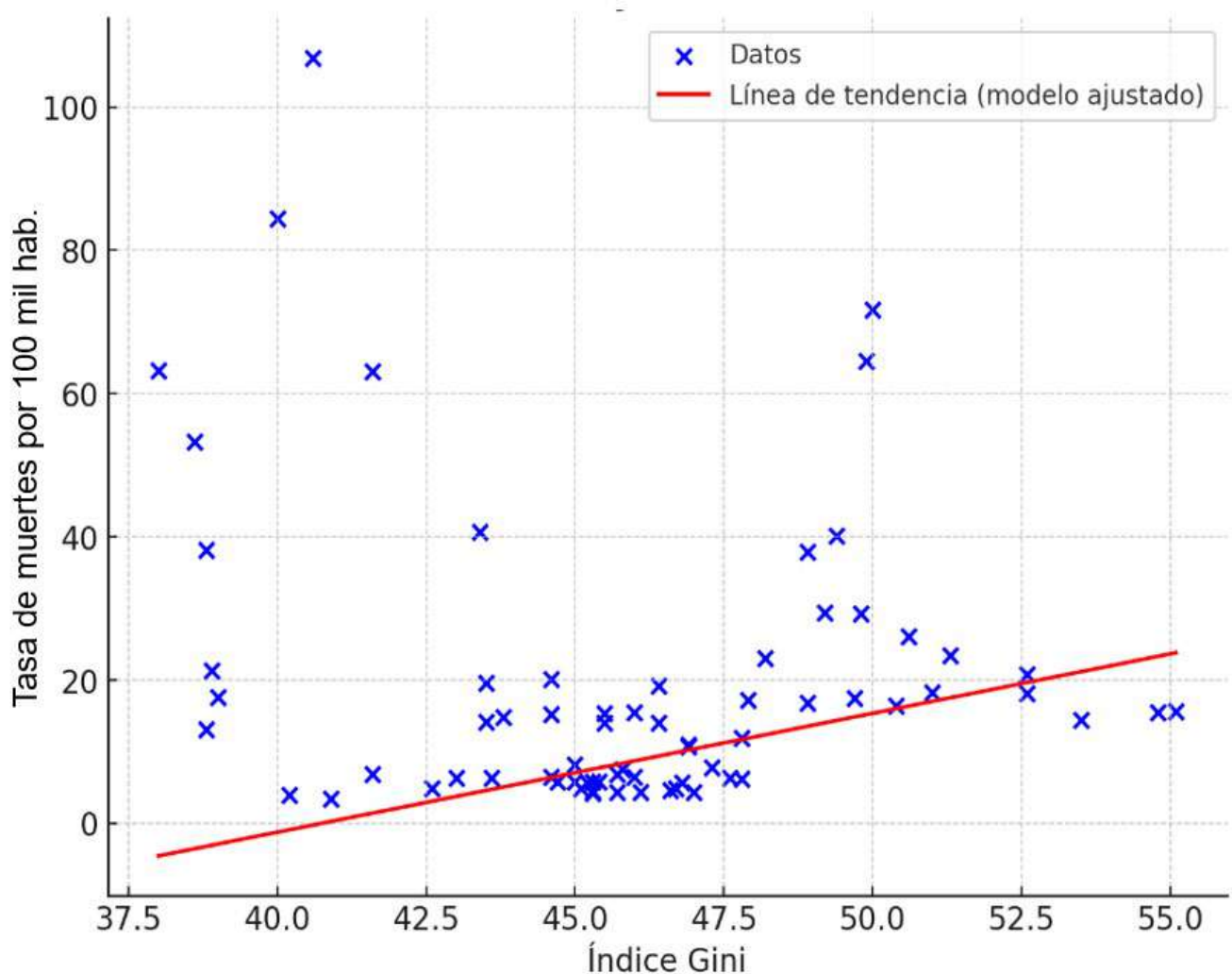
Fuente: WB (2013-2022), UNODC (2013-2022), UNDP (2013-2022).

1. La descriminalización de la narcoburguesía y el circuito de acumulación-violencia (coeficiente 14.03;  $p = 0.023$ ). Las operaciones de la narcoburguesía, implicada en el lavado de dinero y la violencia estructural, están directamente vinculadas al incremento de homicidios. El modelo revela una correlación significativa entre el aumento de los crímenes de lavado y el aumento de los asesinatos, lo que sugiere que estas redes criminales, lejos de ser fenómenos aislados, operan de manera violenta para asegurar su poder. Las políticas de seguridad deben, por tanto, concentrarse en dismantelar las estructuras que sostienen el narcocapital, cuyo núcleo radica en la burguesía narcofinanciera.

2. La criminalización del narcoproletariado y el fracaso del populismo punitivo (coeficiente 0.39;  $p = 0.04$ ). El narcoproletariado, constituido por los pequeños agentes del narcotráfico, ha sido criminalizado de forma desproporcionada, agravando la violencia en lugar de reducirla. El encarcelamiento masivo de estos actores menores, en lugar de debilitar las redes criminales, fortalece las condiciones que perpetúan la guerra interna, desviando recursos estatales que deberían dirigirse a los grandes actores de la narcoburguesía. La política punitiva hacia los más débiles ha fracasado, profundizando la exclusión social y la violencia.

3. La estructura social de acumulación: desigualdad y perpetuación de la violencia (coeficiente 1.88;  $p = 0.018$ ). La relación entre desigualdad y violencia en América Latina ha devenido estructural en el curso de la larga duración histórica. En el presente, la concentración de riqueza en la narcoburguesía, protegida por el poder político y económico, reproduce lógicas de exclusión que concentran la guerra interna hacia los sectores más pobres: a mayor desigualdad mayor es la tasa de asesinatos. Mientras el narcoproletariado es criminalizado, la narcoburguesía continúa operando con impunidad, perpetuando un sistema que utiliza la violencia y la desigualdad como mecanismos de control.

Gráfico 4. Violencia y desigualdad en América Latina



Fuente: WB (varios años), UNDP (varios años).

4. Posibilidades para la acción política: tiempo y violencia (coeficiente 0.515;  $p = 0.000$ ). En el modelo se incluyó la tasa de asesinatos rezagada, es decir en un tiempo  $t-1$ , para evaluar la continuidad de la violencia: el coeficiente decreciente sugiere una significativa oportunidad para la intervención estatal. La violencia se manifiesta aquí como moldeable y puede ser reducida mediante políticas que aborden sus causas estructurales, como la desigualdad y las redes de la narcoburguesía. Las políticas públicas deben, entonces, centrarse en dismantelar las condiciones que sostienen el ciclo de acumulación-violencia, controlando al crimen narcofinanciero y promoviendo la paz con igualdad y justicia social.

Son resultados que reafirman, en conjunto, el argumento de que una estrategia más eficaz para reducir la violencia en América Latina demanda que las prioridades de la agenda política se reorienten desde la punición del narcoproletariado hacia la investigación de la narcoburguesía, a la vez que es necesaria una gestión más inteligente y no necesariamente incremental del gasto militar, orientado por un Estado que recupere su legitimidad ampliando el panorama de la seguridad hacia políticas de justicia social para revertir la pobreza y desigualdad, con miras a reconstituir el tejido ciudadano

En el presente, el Estado con guerra interna no atiende estas necesidades ciudadanas, lo que introduce una tensión que cuestiona a la democracia vigente. Una saludable reorientación en este sentido proviene de los experimentos sociales que, en el presente, las nuevas izquierdas están planteando en América Latina como

alternativas prácticas a la guerra contra las drogas: en Colombia, la estrategia de “Paz Total” apuntalada en el proyecto de reforma agraria que amplía la noción de justicia distributiva para reconfigurar la economía política de la ciudadanía, socializando medios productivos y reduciendo la dependencia del narcotráfico; en Uruguay, la legalización del *cannabis*, que establece un modelo estatal para controlar el mercado farmacológico en contra del lucro y a favor de la salud ciudadana; en Bolivia, la defensa de la hoja de coca como un valor comunitario, desafiando el régimen farmacopolítico vigente.

De estos experimentos se pueden extraer lecciones estratégicas generales para superar la violencia, mediante: la transformación de las ciudadanías en agentes políticos activos, rompiendo el ciclo de pasividad de la violencia; la transformación al Estado, de represor a habilitador, promoviendo capacidades y justicia social; la transformación de los regímenes del valor, reemplazando el interés en el dinero ilícito por la afirmación de la vida en paz.

## 4. Democracia, Estado y movimientos sociales<sup>10</sup>

La democracia, el Estado y los movimientos sociales son figuras históricas e instancias de mediación que han sido afectadas por los cambios en la forma social contemporánea que las han puesto en crisis. Desde un punto de vista temporal se trata de una crisis doble, estructural y coyuntural, que genera desafíos para los cuales estas instancias –Estado, movimientos y democracia– encuentran sus limitaciones históricas y se vuelven poco eficaces tal como han sido históricamente concebidas. Por un lado, la situación global tensiona el modo dominante de producción de la vida y esto afecta la constitución de lo social y la propia condición humana a nivel planetario. En este sentido, se pueden interpretar las aceleradas transformaciones en las formas de producción de bienes y servicios (tanto materiales como inmateriales), la configuración de las formas heterogéneas de las relaciones humanas actuales, los cambios en los modos de distribución condicionados por el capitalismo global, así como las nuevas formas de subjetividad contemporánea. Por otro lado, estas profundas transformaciones también inciden en la crisis de los modos de producción de la comunidad política, sus formas de gestión, de gobierno y su lugar como espacios de reconocimiento.

El siglo XXI comenzó con la proliferación de formas de resistencia social y sujetos que descentran a los actores clásicos de la escena pública y otorgan protagonismo a los movimientos sociales. Se constata que no hay un único actor social que organice y dé sentido al conjunto de movimientos sociales particulares que median en el malestar social y configuran formas organizativas variadas. Tampoco hay un eje que estructure el campo de la movilización social, como lo hubo durante los años donde primaba un capitalismo desarrollista regulado que se nutría del principal conflicto, entre el capital y el trabajo. Aunque la cuestión social permanezca centrada en las disputas por el ingreso, la tierra y la vivienda, también se registra una tendiente ampliación hacia otro tipo de demandas identitarias, de género o ciudadanas en sentido más general.

Entrando en los primeros lustros del nuevo milenio, se reconstruye la relación entre movimientos sociales, conflicto y Estado a partir de la nueva matriz sociopolítica, caracterizada por la centralidad del Estado, el cuestionamiento al neoliberalismo, los procesos de incorporación de sujetos históricamente olvidados y marginados de la comunidad política y un cambio en ciertos aspectos del modelo de desarrollo y los patrones de redistribución. Este nuevo ciclo conocido como “giro a la izquierda”, por el protagonismo de gobiernos progresistas antineoliberales, enfrentó el desafío de traducir las demandas represadas de los movimientos sociales, a menudo disruptivas y de tono destituyente, para incorporarlas e institucionalizarlas dentro del sistema político. Asimismo, estos nuevos gobiernos tuvieron que conciliar la vocación contrahegemónica de muchos movimientos sociales con las agendas y reformas institucionales que requerían devolverle credibilidad a la política y al Estado, ambos tan

---

<sup>10</sup> Esta sección se basa en el artículo “Movimientos sociales, Estado y Democracia” de Soledad Stoessel y Martín Retamozo, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

vapuleados durante la hegemonía del modelo neoliberal, en un marco de gobernabilidad. Estos desafíos se sumaron a la herencia dejada por la matriz neoliberal: paupérrimas condiciones de vida para la mayoría de la población, servicios públicos arruinados o inexistentes, deudas exorbitantes con organismos internacionales de crédito, deterioro de las economías, Estados desmantelados, reducidos e ineficientes, y, en varias regiones, Estados que habían delegado funciones sociales al mercado o a la familia, o asumido funciones securitarias y militares, debilitando los Estados de derecho. Durante este ciclo el Estado vuelve a recobrar importancia, luego de casi tres décadas de desprestigio inducido por el *mainstream* neoliberal, como solución a los problemas del desarrollo en la región y como un agente de coordinación y reparación del daño perpetrado por la matriz neoliberal mercadocéntrica. La recuperación de las capacidades estatales aparece como un objetivo primordial en los proyectos políticos de los gobiernos progresistas. En efecto, en las nuevas Constituciones de los países andinos (Ecuador, Venezuela y Bolivia) el Estado figura como principio fundante y gestor del orden social. Esto se expresa en la constitucionalización de la nacionalización de sectores estratégicos, la conformación de empresas públicas, la responsabilidad del Estado en la garantía de todo tipo de derechos y como promotor de un modelo de desarrollo inclusivo y soberano. Esta centralidad del Estado en algún punto tensionará con la esfera de los movimientos sociales puesto que entre ellos se disputarán, en muchos casos, el ejercicio de la representación política. Así, buena parte de la conflictividad social del giro a la izquierda se explica por los desafíos mencionados, frente a los cuales el Estado no siempre pudo estar a la altura. Sin embargo, el Estado no es solo un agente que reviste ciertos rasgos distintivos (monopolio de la violencia legítima, capacidad jurídica y burocrática para implementar decisiones vinculantes) que aparentemente lo separa de la sociedad, sino que también opera como un terreno conflictivo que desdibuja la frontera Estado-sociedad, hacia el cual todas las fuerzas sociales se dirigen, ya sea para incidir sobre él, negociar con él, participar en él, disputarlo, o transformarlo.

Si bien durante este ciclo la implementación de medidas que se alejan de la ortodoxia neoliberal ha sido clave en la reducción de las desigualdades y la pobreza, beneficiando especialmente a los sectores ubicados entre el 50 y 90 % de la distribución del ingreso, se abrieron nuevos frentes de conflictividad social o se reactualizaron otros protagonizados por el campo popular. En este contexto, los procesos progresistas también fueron objeto de críticas por no ser lo suficiente radicales en la transformación de los regímenes sociales de acumulación y distribución.

Estos frentes de conflictividad mermaron la hegemonía de los gobiernos progresistas, que comenzó a verse lastimada hacia 2015 debido a varios factores. Por un lado, los liderazgos presidenciales suplantaron las falencias de las mediaciones clásicas como los partidos políticos, por medio del Estado. No obstante, en una sociedad cada vez más diversa, la capacidad del Estado nacional-popular para integrar todas las demandas subalternas mostró claros límites. Por otro, la hegemonía que obtuvieron durante el lapso 2003-2014 apoyada en el recentramiento del Estado cortocircuitó los vínculos entre bases sociales, organizaciones y Estado nacional que permitirían reconstruir un lazo social ampliamente lastimado durante la década neoliberal. Las transformaciones impulsadas “desde arriba” no siempre fomentaron una participación popular efectiva, lo que generó una escasa identificación con los proyectos políticos en curso. En los países andinos, dicho recentramiento estatal se apoyó en un proceso de modernización occidental que obliteró la dimensión plurinacional e intercultural que había sido una demanda de los movimientos indígenas y campesinos desde hace al menos tres décadas. Esto hizo que el Estado, sin poder llegar a todos por igual, ni hacerlo de forma tan eficiente y hasta en algunos casos mostrando burocratización (e incluso corrupción), dejara huérfanos ciertos espacios que paulatinamente fueron ocupados por otros actores, como organizaciones religiosas evangelistas, fuerzas del orden, grupos ligados al crimen organizado y nuevos espacios políticos de derecha.

Asimismo, el frente de conflictividad del campo popular se combinó con otro frente que cada vez más estructuró la dinámica política y disputó las formas sociales. Otros sectores impugnaron a estos gobiernos por entender que sus políticas de redistribución y de reconocimiento no eran legítimas, arremetían contra las libertades individuales y lastimaban sus posiciones conseguidas con mérito y esfuerzo, como los sectores que históricamente han ejercido una rebeldía tributaria para no contribuir al fisco. Los sectores dominantes y las elites económicas comenzaron a emplear estrategias electorales y no electorales para disputar el Estado o alcanzar niveles de competitividad electoral. El desarrollo de movimientos sociales y electorales-partidarios antiestablishment de derecha, la representación de intereses por medio de corporaciones, tanques de pensamientos, redes tecnocráticas, y el uso intensivo de las redes sociales y medios de comunicación abonaron a la pérdida de legitimidad de los progresismos. Además, las políticas públicas orientadas a transformar los sentidos culturales inscritos en la forma social –matriz patriarcal, configuración heteronormativa– abrieron un nuevo campo de conflictividad que desafía

el principio democrático anclado en la justicia y la dignidad social. La movilización reaccionaria se manifestó en las contiendas políticas, planteadas como “batallas culturales”, por parte de actores conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos (como la legalización del aborto), la educación sexual integral e inclusiva y el enfoque de género en las políticas públicas. Así, paradójicamente, el “consenso democrático” traducido en régimen político habilitó la expresión de movimientos y espacios políticos que hacían peligrar la democracia como proyecto de convivencia social, ampliación de derechos e igualdad. Quedó en evidencia la superposición de una matriz nacional-popular “por arriba”, con subjetividades neoliberales arraigadas en el sustrato social que se relanzaban con fuerza (emprendedurismo, libertades individuales, rechazo al Estado y defensa de una meritocracia selectiva). Es decir, la disputa por la producción de la vida no solamente no estaba saldada, sino que cada vez más se inclinaba a favor de tendencias que apostaban al individuo y no a la comunidad, a las libertades individuales y no a la igualdad social.

Empero, el ciclo político gira en 2015-2016, con la llegada al poder de gobiernos de derecha conservadora que, al mismo tiempo, encuentran su fuerza en movimientos y colectivos antiderechos, conservadores y antiigualitarios arraigados en el sustrato social. En el ciclo de la derecha lo social asume nuevas formas. Si bien asistimos a cambios de envergadura en el modo de pensarse la producción de la vida (sistemas de cuidados, despatriarcalización de ciertos ámbitos, violencia de género dentro de las agendas públicas y mediáticas, reducción de brechas económicas y de género, etc. –varios de los cuales fueron y son bandera del movimiento feminista), las sensibilidades conservadoras y reaccionarias en relación al género, la diversidad, lo plurinacional e intercultural y lo religioso persistían en el sustrato social e incluso se exacerbaban como reacción a los avances de los sujetos subalternizados. Estas sensibilidades fueron explotadas y capitalizadas por las propuestas de derecha en un contexto de torsión democrática. El proyecto hegemónico de las derechas asumió una tarea de restauración conservadora neoliberal. Por un lado, dismantelaron la estatalidad tendiente a la redistribución y la protección social para fortalecer la dimensión de control social. Por otro lado, articularon la oposición a las agendas proderechos y progresistas, que fueron catalogadas como “políticamente correctas”. Así, vemos que desde 2015 los otrora movimientos sociales contestatarios, para quienes el neoliberalismo consistía en el adversario a combatir, dan paso y conviven con otras formas sociales que se colocan en las antípodas. Movimientos que la propia forma democrática habilita y que en su dinámica impugnan los principios democráticos, en tanto ponen en cuestión qué derechos se producen y reconocen en una comunidad. Incluso el cuestionamiento al reconocimiento de derechos lo hacen impugnando el desconocimiento que esto habría implicado hacia otros derechos. Este gesto político de impugnar ciertos derechos “progresistas” con ciertos derechos “conservadores” no deja de ser un síntoma de la disputa por los fundamentos normativos de la sociedad y, en definitiva, un lugar de disputa de proyectos hegemónicos.

Las derechas políticas lograron conectar con los malestares de amplios sectores sociales y el agotamiento de las expectativas en los gobiernos progresistas. Estos gobiernos restauraron proyectos que articulan liberalismo económico con una agenda social conservadora. En efecto, no solo comparten la misma visión económica neoliberal ortodoxa, sino un rechazo a lo que consideran todo viso de populismo (o lo que llaman comunismo, castrochavismo, socialismo del siglo XXI), y un violento antiizquierdismo, apuestas punitivistas y agendas retrógradas en materia de derechos sexuales. Progresivamente se fueron radicalizando, asumiendo en muchos casos una deriva autoritaria. Además, comparten el uso represivo de las fuerzas de seguridad para acallar toda protesta social y el uso político del *lawfare* para eliminar a los adversarios políticos. Por último, una de las características de la reacción conservadora fue su eficacia en el uso de novedosas estrategias e intervención en los nuevos espacios de disputa por el sentido y la subjetividad que transformaron las formas del espacio público y del ejercicio de la acción en una sociedad civil virtualizada. El espacio de las redes sociales no solo implica cambios en las estrategias comunicacionales, sino que pone en evidencia un cambio morfológico en los campos de la política reconfigurando los contornos de lo público y sus dinámicas políticas. No solo el capitalismo cognitivo impacta en el modo de producción de las mercancías, sino también en las lógicas políticas. Nuevos actores (desde grandes empresas de telecomunicaciones hasta *influencers*), discursos de odio anonimizados, *fake news* y acontecimientos virales son parte del entorno en el que las derechas encontraron mejores recursos y capacidades de uso.

En ese marco, la erosión de la democracia como régimen político (se afecta el Estado de derecho y las libertades fundamentales) y reconocimiento de derechos está a la orden del día. Sin embargo, el intento de las elites de afianzar una cultura política desigual y modelos de desarrollo privatistas, extractivistas, antiecológicos e injustos socialmente fue resistido por distintos sujetos en distintos rincones de la región, aunque con desigual eficacia.

Mujeres, estudiantes, pueblos y nacionalidades, campesinos, movimientos ecologistas y trabajadores precarizados protagonizaron un ciclo de movilización iniciado en 2018 que derivó en los “estallidos sociales” de 2019 en países como Chile, Ecuador, Haití y Colombia. Estos movimientos de protesta han tenido dificultades en convertirse en movimientos sociales capaces de lograr estabilidad, procesos identitarios y proyectos políticos con la fuerza necesaria para disputar hegemonía.

Si bien el giro a la derecha se revirtió parcialmente con el triunfo de propuestas progresistas, como en México (La Cuarta Transformación), Colombia (Pacto Histórico) y Chile (frente liderado por Gabriel Boric), no ha neutralizado el avance y radicalización de las derechas políticas y sus expresiones sociales por medio de intensos movimientos de extrema derecha y conservadores, que han delineado tanto las condiciones de gobernabilidad de los nuevos gobiernos progresistas como los horizontes predictivos igualitarios de una vida en común. Este fenómeno, además de representar un desafío político para los gobiernos progresistas, puede ser considerado como un síntoma que invita a reflexionar sobre la eficacia de estas experiencias de representación política en los planos económico, social, cultural y geopolítico, así como en la construcción de subjetividades emancipadoras que se configuren e interpelen en clave nacional-popular. Los malestares irresueltos por los procesos políticos comenzaron a generar cierto desencanto con la democracia como régimen político capaz de ofrecer respuestas sociales, y esto abre la puerta a formas autoritarias de gestión.

Se podría vislumbrar que la crisis estructural que atravesamos no es una más en la dinámica crítica perpetua de América Latina, sino una crisis en un nivel ontológico de lo social. Esto implica la puesta en tensión y el desgarramiento de relaciones sociales que configuraron el ser social en el plano económico (la crisis del capitalismo), en lo político (la crisis de la democracia), en lo cultural (los patrones de producción identitaria) y, por supuesto, la articulación de estos, que conforman el ordenamiento social. Los cambios en la forma social, en los modos concretos de gestión política y en las figuras de representación han trastocado a estas tres instancias: movimientos sociales, Estado y democracia. Una política de la esperanza debe apostar por revitalizar estas tres figuras en una forma contemporánea, acorde a los tiempos históricos actuales y no como lamento nostálgico.

## 5. Democracia y autoritarismo

Para la Real Academia de la Lengua Española, un oxímoron es “la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como un silencio atronador” (RAE, 2020). El sentido literal del oxímoron suele resultar en absurdos semánticos, como “dictaduras democráticas”. Estas dos palabras *a priori* jamás deberían estar juntas. No obstante, parecen muy cercanas a describir, hoy en día, lo que sucede en muchos países de América Latina y en otros lugares del mundo.

La ciencia política como disciplina académica se ocupó deliberadamente de estudiar, a partir de las dictaduras vividas en los años sesenta, setenta e incluso ochenta del siglo pasado, las “transiciones a las democracias”. El oxímoron propone que es necesario empezar a estudiar las “transiciones hacia nuevas formas de dictaduras” o “regresiones a nuevas formas de autoritarismo”.

Desde la perspectiva democrática, este aparente absurdo simplemente se refiere a que la democracia actual, como régimen político, sería una farsa. No aludimos aquí ni siquiera a la democracia sustantiva sino a lo que Adam Przeworski (2010) llama “democracia mínima”.

Estas nuevas formas de autoritarismo difieren de las vividas en el siglo pasado. Son mucho más sutiles, aunque su sofisticación desaparece a medida que la crisis del capitalismo aumenta. Vamos por partes.

Adam Przeworski solía decir que lo mínimo que hay que garantizar en las democracias es la libre competencia electoral (2010). ¿Pero qué sucede cuando, existiendo procesos electorales institucionalizados, tal competencia es una mentira social? Tal parece ser la norma en muchos países de la región.

En efecto, tal vez el caso más conocido es Brasil: más allá del *impeachment* a Dilma Rousseff, lo cual también es parte de las “dictaduras democráticas”, las elecciones presidenciales muestran cómo no se respeta la libre competencia electoral. Aun así, persisten argumentos desde cierta izquierda que apuntan que la llegada de Bolsonaro en Brasil es consecuencia del gobierno “desarrollista o poco progresista” de Lula da Silva. La pregunta es simple: ¿habría ganado Bolsonaro si participaba en la contienda electoral Lula da Silva? ¡Claramente no! En las “dictaduras democráticas” se usan las instituciones liberales democráticas y sus mecanismos—concretamente los sistemas de justicia o los órganos electorales— para proscribir o anular la participación de los que atentan contra los intereses de acumulación de los grupos económicos principales de cada nación, quienes suelen buscar el poder del Estado para recomponer la velocidad de tasa de ganancia perdida en los gobiernos progresistas de la región. La táctica es evidente: Lula encarcelado cuando es un peligro electoral para esos intereses, Bolsonaro presidente.

El caso del Ecuador no es diferente. Más allá de la traición política más grotesca de la historia ecuatoriana y quizá de América Latina, a través de procesos de persecución mediática y judicial y —en este caso— usando otro poder del Estado (el Consejo Nacional Electoral, que en Ecuador es otra función estatal), no se permitió que se inscriba el movimiento político con mayor cantidad de militantes de Ecuador para competir en la última contienda electoral de 2019. Lo señalado no ha quedado en el pasado. No conformes con esto, en el año 2020 se avanzó

sin dilación en la proscripción del expresidente Rafael Correa a través de procesos penales sesgados donde se fraguan pruebas y testigos falsos. El objetivo era que Correa no esté en la papeleta de votación del 2021. Se consiguió el objetivo.

Otro ejemplo adicional es Bolivia. En el país altiplánico, luego de un proceso electoral que, de acuerdo con informes técnicos del Election Data and Science Lab del MIT, dio por ganador al candidato Evo Morales en una sola vuelta, se perpetró un golpe de Estado al viejo estilo de los modelos del siglo XX, con intervención directa de las fuerzas armadas. Tal situación dejó en evidencia el juego antidemocrático en que históricamente se han involucrado en la región la Organización de Estados Americanos [OEA] y Estados Unidos como sus principales actores; en el marco de la nueva geopolítica de los recursos naturales, incluso tuvo la complicidad (autoconfesada) del multimillonario Elon Musk (director general de Tesla y Space X) quien señaló refiriéndose al respecto: “¡daremos un golpe a quien nos dé la gana!”.<sup>11</sup> Al igual que los casos anteriormente señalados, proscribieron la participación del expresidente Evo Morales, y luego de continuas suspensiones, que el gobierno interino justificaba por la pandemia de la COVID-19 en medio de masivas movilizaciones populares de descontento, finalmente las elecciones se celebraron el 16 de octubre de 2020.

El caso de México es paradigmático pues las denuncias de fraudes electorales resultan moneda corriente hace más de veinte años, desde su particular transición democrática hacia el sistema de partido único. Estos fraudes no pudieron repetirse en el 2018 por la amplia resistencia popular hacia este tipo de prácticas y por la incuestionable diferencia que existía entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRI, José Antonio Meade. Tampoco pudo configurarse en el 2024 por la contundencia de la victoria de Claudia Sheinbaum, dando continuidad al proyecto de la denominada cuarta transformación [4T].

Ahora bien, no debemos olvidar que, si bien parecía cosa del pasado que las fuerzas armadas vuelvan a ser dirimientes explícitos en las democracias de la región, en los últimos años, luego de las movilizaciones populares de finales de 2019, vivimos claramente el retorno de su papel protagónico y develado.

En los países en donde existe connivencia entre gobiernos civiles y actores militares pudieron estos reprimir las movilizaciones sociales de fines de 2019 como son el caso, por ejemplo, de Ecuador y Chile. En Bolivia sucedió todo lo contrario, los militares dirimieron y apoyaron explícitamente el quiebre del orden democrático y el gobierno de Evo Morales no solo no pudo terminar su periodo democrático como correspondía, sino que tampoco pudo asumir el nuevo mandato que ganó en la lid electoral. Se perpetró así un golpe de Estado al viejo estilo del siglo XX.

Intentando sintetizar podríamos señalar que se trató de un abanico de asedios, que fueron configurando una suerte de tipologías: 1) países en los que en los albores del nuevo milenio se ensayaron intentos *fallidos* de golpes cívicomilitares al mejor estilo de los del siglo XX (Venezuela, 2002; Haití, 2004; Honduras, 2009; Ecuador, 2010; Bolivia, 2009); 2) países con “golpes blandos” realizados a través de instituciones y mecanismos parlamentarios (Paraguay, 2012; Brasil, 2016; Perú, 2020, 2022; Honduras, 2012); 3) países con “golpes preventivos” a través de instituciones y mecanismos judiciales y electorales articulados a mecanismos mediáticos (Ecuador, 2017-2018; Brasil, 2018; Argentina, 2016; El Salvador, 2021; Venezuela, 2002); 4) países que experimentaron golpes cívicomilitares *exitosos* en pleno siglo XXI (Bolivia, 2019); y, finalmente, 5) países en los que se produce la reversión total del programa de gobierno con el que se gana una elección, produciendo un nuevo tipo de vaciamiento de la democracia (Ecuador, 2017).<sup>12</sup> No hay que olvidar, en esta lógica, la toma del Capitolio como una forma de asedio antidemocrático, algo similar a lo que vivió Lula ni bien iniciado su gobierno.

Algunos autores no se han atrevido a hablar lisa y llanamente de dictaduras y denominan los fenómenos narrados como un interregno de “estados de excepción”. No obstante, cuando se observan los viejos y nuevos componentes dictatoriales puestos en juego y la extensión y normalidad con la que se desenvuelven quizá se deberían volver a revisar nuestros resguardos y pruritos a llamarlos “dictaduras institucionales”.

No obstante, en esta emergencia, mal llamada posdemocrática, también emergen gobiernos de derecha que ganan elecciones en procesos electorales transparentes y con amplio respaldo popular como fue el caso de Luis

---

<sup>11</sup> Ver <https://www.sinembargo.mx/25-07-2020/3830096>

<sup>12</sup> No solo eso, en 2018 Moreno creó una Comisión para destituir a las autoridades de control: un golpe en toda regla.

Lacalle Pou en el 2020 o Javier Milei en el 2023. A continuación, se problematiza con mayor profundidad sobre el fenómeno de apoyo a gobiernos antipopulares con una clara agenda neoliberal autoritaria.

## 5.1. Antidemocracia y extrema derecha

En los últimos casi 25 años podemos dividir la disputa ideológica en dos tiempos tanto para la derecha como para la izquierda. La derecha empieza el milenio con el impulso de lo que constituyó la agenda neoliberal. El desgaste social debido a las dos décadas pérdidas hizo surgir una tendencia progresista antineoliberal que duró hasta aproximadamente 2015-2016, donde se dio un segundo tiempo de lo que se denominó restauración conservadora. Tal restauración tiene características propias, diferentes a la derechización neoliberal del siglo XX. Tiene una fuerte raíz identitaria, conservadora y antidemocrática. No obstante, la izquierda no se quedó quieta y atacó para frenar dicha arremetida. Actualmente, la disputa está abierta. Como hemos señalado, la bifurcación es o la consolidación de un momento distópico en donde se confirmaría un tercer momento neoliberal desde 1980 o se abriría paso a la posibilidad de instaurar una segunda ola progresista. El segundo tiempo está en plena partida.

Ahora bien, en este segundo tiempo la derecha viene más violenta, más conservadora (incluso fascista), más antidemocrática y rapaz, en tanto sus formas de despojo de la materialidad de las grandes mayorías son más violentas y eficaces. Un tema fundamental en esta reconfiguración es la capacidad de los discursos extremistas para influir en la reinterpretación de los parámetros del debate público, disputando significados que antes parecían formar parte del consenso en la construcción de nuestras comunidades políticas (Schenck, 2024), siendo quizá una de las más significativas la señalada por Javier Milei:

*Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual ante la ley, pero además está precedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal [...].<sup>13</sup>*

Quizá la pregunta que debemos hacernos es qué condiciones permiten y permitieron que emerja una derecha con tales características. Siguiendo la línea planteada en este documento, podríamos articular una razón ligada al cambio en las condiciones materiales que viven la región y el mundo en el marco de la crisis hegemónica y del capitalismo.

Una explicación rápida, incluso de ciertos voceros de la propia izquierda, ha señalado a los medios de comunicación y a las redes sociales como los grandes culpables de la derechización de las sociedades. Sin duda, si se analizan los grandes medios de comunicación y los grandes grupos económicos de los países de la región se puede señalar la altísima correlación entre ambos. Televisa en México, O Globo en Brasil, Clarín en Argentina, Telem Amazonas en Ecuador, Fox News en EE. UU., entre otros son ejemplo de que detrás de un gran medio de comunicación hay un grupo económico importante en la economía de cada uno de estos países seleccionados. Los medios de comunicación son defensores de los intereses del gran capital. Ahora bien, este papel lo han jugado durante toda la vida democrática. Empezando por este tópico, quisiéramos sostener que la construcción ideológica de la subjetividad neoliberal autoritaria está asociada al cambio en las condiciones materiales y laborales que viven la región y el mundo. Tal subjetividad es antidemocrática, individualista, antiigualitaria, antiestatal, tradicionalista y violenta.

A continuación, propondremos algunas hipótesis para la investigación en esta línea:

- a. *La tecnología como constructora de subjetividad antisocial*

---

<sup>13</sup> Para una profundización de la emergencia de los extremismos ver “Doblar hasta quebrar: una mirada sobre los extremismos de derecha en América Latina” de Marcela Schenck, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco) neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

- No es solo el contenido, es la tecnología. La disputa política es una contienda de narrativas. La digitalidad sin duda expande la posibilidad de alcance de la comunicación. Si bien es una expansión generalizada no deja de ser también, a la par, individualizada. El aumento de la posesión de teléfonos inteligentes genera una potencia de intervención focalizada de mensajes. Se arman diarios o portales con noticias cuasipersonalizadas para el goce del lector con inteligencia artificial.<sup>14</sup> Probablemente la derecha sepa manejar mejor el mensaje para generar más condicionalidad comportamental. No obstante, la lectura señala que el contenido que se insta a través de las redes sociales en la subjetividad ciudadana no deja de ser un menosprecio de las capacidades de aprendizaje de la ciudadanía. Es claro que afecta a un grupo que generalmente está convencido, pero subestima la inteligencia ciudadana o la capacidad de aprendizaje del pueblo. El asunto principal no es solo el contenido sino el tipo de tecnología usada; la lógica intrínseca de las redes sociales. Las tecnologías de alcance mundial, como X, Facebook, TikTok, etc., son medios pensados para generar una ciudadanía individualizante y anticomunitaria. En una investigación realizada en México a través de modelos cuasiexperimentales, cuya pregunta a resolver era si Facebook era una red social, la respuesta fue clara y contundente: Facebook es una red antisocial y generadora de “soledades concurridas”. La probabilidad de una persona de tener actitudes y valores solidarios y de confianza interpersonal se reduce en la medida en que se dedica más tiempo a la red sociodigital Facebook. Esto sustenta la hipótesis planteada: la red (supuestamente) social es, en realidad, antisocial, porque las personas que pasan más horas en Facebook tienen mayor probabilidad de ser individualistas (autointeresadas y desconfiadas del otro) (Ramírez et al., 2020, p. 46). Siguiendo la hipótesis de Zygmunt Bauman, parece ser que tiene razón cuando afirmaba que “el éxito de Facebook es que está basado en el miedo a estar solo” en una sociedad de solitarios. En este sentido, mientras más usemos redes sociales así sea con contenido progresista, de izquierda, proderechos lo que estamos produciendo es individualidad antisocial, anticomunitaria.

- A esto hay que sumar la creencia de que el ciudadano digital promedio es el mismo que el ciudadano promedio analógico. Existen investigaciones que evidencian que hay un sesgo significativo entre esas dos ciudadanía. A tal fenómeno se le ha denominado “distorsión sociodigital”, que supone una brecha entre la opinión pública en las calles y la opinión pública manifiesta en internet (Ramírez y Guijarro, 2022).

- El asunto se agrava cuando nos percatamos que las redes sociales de alcance global juegan una suerte de diván masivo. Al igual que en el diván psicoanalítico, donde se busca que el paciente verbalice sus pensamientos y emociones más íntimos y reprimidos, las redes sociales permiten a los individuos descargar sus frustraciones, temores y resentimientos en un ambiente de aparente anonimato o distancia emocional. Esto facilita la expresión de pensamientos agresivos, xenófobos, racistas, y antidemocráticos que podrían estar latentes en el inconsciente colectivo. El anonimato o la distancia emocional que brindan las redes sociales facilitan la desinhibición de los discursos violentos, intolerantes o extremos. Esto es similar al modo en que en la terapia psicoanalítica el paciente se siente más libre para decir lo que normalmente no se atrevería en la vida cotidiana. Sin embargo, en el contexto de la producción de ideologías que tiende a una cultura fascista, esta desinhibición puede tener consecuencias peligrosas al crear un espacio donde la agresión y el odio se expresan sin filtro. Son herramientas que están programadas para que sus algoritmos generen adicción; es decir, son una suerte de tecnofármacos. Mientras más consumo redes sociales, más solo estoy; incluso cuando creo que estoy acompañado de las personas que están al otro lado de la virtualidad. A tal emoción se debe sumar la trascendencia de hablar anónimamente, pero sabiendo que en potencia puedo recibir los aplausos masivos de todos aquellos que comparten mi punto de vista.

- Si bien en el “mientras tanto” se deben generar movimientos de redes sociales sobre el contenido en disputa, debe quedar claro que mientras más se use la tecnología hegemónica más se está edificando una cultura individualista de todopoderosos y sabios: “es verdad porque yo lo digo”. Esta tecnología tiene tal lógica de individualizar y negar el diálogo social que, si no estoy de acuerdo con lo que dice el otro, simplemente lo bloqueo/silencio. Con esto se niega la posibilidad del diálogo. En este sentido, la tecnología en la que la izquierda intenta colonizar no es más que un medio de conformación de ciudadanos atómicos, violentos, que niegan la deliberación pública. Bajo el argumento señalado, no solo se debe dar la disputa del contenido sino que se deben construir tecnologías que promuevan la lógica de la producción

---

<sup>14</sup> Para una muestra de tal fenómeno, ver la siguiente entrevista: <https://www.youtube.com/watch?v=qNc5Zhaoumg>

de comunidad y de deliberación pública razonada. El capitalismo digital no solo encierra el rentismo de plataformas en donde se extrae tiempo e información, sino que también construye subjetividades reproductoras de ciudadanía antisocial. Dentro del mismo debate, también Habermas argumenta que la digitalización de la comunicación pública erosiona la separación entre las esferas pública y privada, llevando a una fragmentación del discurso que debilita la deliberación racional necesaria para la democracia.

b. *Competencia entre pauperizados: desindustrialización y autoexplotación en el tiempo Netflix del capitalismo de plataformas*

- Uno de los problemas más estructurales en América Latina es la desindustrialización de sus economías. Tal proceso productivo viene acompañado de la precarización laboral. De acuerdo con la OIT, el empleo independiente en la región oscila entre 26 y 65 % del empleo total, de los cuales, entre el 70 y el 80 % de los trabajadores independientes son cuentapropistas no profesionales (con nivel educativo inferior a terciario/universitario completo). La región ha sufrido una desindustrialización prematura y un estancamiento en la productividad, en contraste con el éxito de las economías del Sudeste Asiático. Se puede corroborar que, en la región, el autoempleo resulta más importante que el trabajo en relación de dependencia formal y viene creciendo a mayor velocidad (Castillo y Ominami, 2024).

- El proceso de desindustrialización convivió con la emergencia de la economía de plataformas, en donde se rompe con el tipo de relación laboral tradicional. Un informe del BID realizado en el 2021 señala que México tiene 250 mil socios conductores, Colombia 88 mil, Chile 70 mil, Perú 38 mil o que Rappi tiene 200 mil repartidores en los 9 países de América Latina donde opera. La mayoría de las personas que trabajan en estas plataformas son ciudadanos comprendidos entre 20 y 41 años de edad, siendo los jóvenes los que mayor participación tienen.

- Tal nueva forma de trabajo genera un tiempo Netflix, en donde el trabajador de plataforma es dueño de trabajar las horas que quiera, cuando quiera y donde quiera. No obstante, tal supuesta flexibilidad viene acompañada de autoexplotación laboral, en donde se trabaja más horas por día y más días por semana. El ser dueño de su tiempo genera una suerte de sensación de emprendedurismo individual, en donde la salida a la precariedad siempre es individual y nunca colectiva. En el marco del cambio en las estructuras laborales, la competencia se da entre precarizados de las economías: el uberista compite con el taxista, y el trabajador de Rappi con el que recibe una transferencia monetaria de miseria (aunque importante en términos relativos para satisfacer necesidades) por parte del Estado. La derechosización se configura en la matriz de negar o prescindir del otro o la otra.

- Así, la desindustrialización en América Latina ha llevado a la reducción de empleos calificados en sectores productivos tradicionales, como la manufactura, lo que ha generado un vacío en las economías locales. En paralelo, la economía de plataformas, ejemplificada por empresas como Uber, ha proliferado ofreciendo empleos flexibles, pero precarios y carentes de derechos laborales formales. Estas plataformas digitales permiten la subsistencia en un contexto de crisis industrial, pero configuran un nuevo orden económico donde prevalecen los valores del individualismo, la competitividad y la desregulación del trabajo. Este entorno, marcado por la informalidad laboral y la falta de protección social, puede fortalecer una ideología de derecha, que prioriza la reducción del papel del Estado, el mercado libre, y la minimización de los derechos laborales en favor de la eficiencia económica y la creación de empleo inmediato, aunque precarizado. Así, las plataformas no solo coadyuvan a la desindustrialización, sino que refuerzan un discurso político que favorece la desigualdad y promueve políticas conservadoras.

c. *Expansión de la industria del narcotráfico y la violencia como pedagogía antisocial en la resolución de conflictos*

- Como se señaló anteriormente, la otra industria que permite recuperar ganancias en el capitalismo es el narcotráfico, que está estrechamente vinculado con el mercado de armas y el espectáculo de la violencia. Luego del cambio en la demanda de consumo de droga en Estados Unidos, emerge con mayor fuerza la presencia de cárteles en el resto de América del Sur. Dicha presencia se configura en una industria que no solo genera divisas sino puestos de empleo. La forma de interacción en esta industria genera una subjetividad pedagógica que enseña la resolución del conflicto a través de la violencia. Una de las promesas más importantes y que es necesario recuperar siempre –más allá de las críticas que se

le pueda hacer al proyecto de la modernidad– hace alusión a que la democracia y la deliberación son el medio para resolver los conflictos pacíficamente. En la esfera de sociabilización de jóvenes que entran en un cártel u otro se construye una praxis en la que cualquier discrepancia se soluciona con las balas. Dificilmente una democracia prosperará en una economía en donde la presencia del narcotráfico se generaliza. La cultura del narcotráfico es la cultura de la violencia, que es –a su vez– la negación de la posibilidad de la deliberación democrática. A su vez, la lógica de los cárteles refuerza el sentido amigo-enemigo. No importa la razón pública para dirimir los debates democráticos, sino “estar conmigo o contra mí”: conducta que se ve realizada en las emergentes industrias culturales de la narcoépica –como en las narconovelas y los narcocorridos–, donde la violencia se valora como una forma de revancha social que permite tomar la justicia por mano propia. Así, el narco se presenta no solo como un poder fáctico, sino como un productor de subjetividades que erosiona la cultura democrática al glorificar la violencia como una herramienta legítima de socialización. En esta lógica, los jefes de los cárteles son a las clases populares pauperizadas, lo que Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Elon Musk son a las clases medias y medias-altas: “los super hombres”.

d. *La colonización de la esfera digital a través de la cultura fake*

- El capitalismo fue posible porque hubo colonialismo. Así como en el temprano capitalismo se requirieron grandes territorios para colonizar y extraer, en el tardocapitalismo se creó ficticiamente una nueva espacialidad: la digitalidad. De la misma forma, estos nuevos terrenos son colonizados por el capital transnacional. En este marco, la estrategia es doble. La extracción de valor se fundamenta en que más personas participen en la esfera digital. No obstante, no es suficiente. La segunda es de orden cualitativo. El contenido instauro mentiras deliberadas para vender noticias espurias. La estrategia de consumo de tiempo en redes sociales está vinculada a generación de polémicas, en donde si es necesario se menoscaba la verdad a través de información falsa. Hannah Arendt, en su análisis sobre la naturaleza del totalitarismo y la manipulación de la verdad, sostiene que la estrategia de inundar el espacio público con mentiras no solo busca reemplazar la verdad con falsedades, sino que tiene un objetivo más profundo: hacer que la gente no crea en nada. Al saturar el discurso con medias verdades y falsedades flagrantes, se destruye la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo que lleva a una parálisis crítica y a la desconfianza en cualquier fuente de información. Según Arendt, en este contexto, el objetivo último es que los individuos pierdan la capacidad de juicio y que acepten cualquier cosa que se les diga, independientemente de su veracidad, lo cual es esencial para el control totalitario. Esta situación facilita la manipulación y crea un terreno fértil para que los líderes autoritarios establezcan su narrativa sin cuestionamientos, minando así los fundamentos de la democracia. La acumulación material de información digital viene de la mano de la colonización del espacio digital. La historia se repite: la recuperación de la tasa de ganancia del capital solo es posible si el colonialismo prospera. Sus municiones: las *fake news*. Volveremos sobre este tema más adelante.

e. *El dogma como verdad democrática: asedio a la verdad científica y penetración de las religiones en la política*

- Asediar la verdad es un objetivo estratégico de los proyectos políticos de derecha porque, al erosionar la verdad, se debilita el debate crítico y plural necesario para sostener una sociedad democrática. Estos proyectos buscan reemplazar la verdad con narrativas simplificadas y absolutas que sostienen las agendas dogmáticas, donde la religión juega un papel central en la configuración del orden social. En este contexto, la religión se posiciona como fuente de autoridad incuestionable, reintroduciéndose en la esfera pública como un conjunto de valores inamovibles que estructuran la vida social y política. Este retorno de lo dogmático choca con el papel de las universidades, que históricamente han sido espacios dedicados al cuestionamiento crítico, la pluralidad de ideas y la búsqueda de la verdad a través de la razón. Por este motivo, el prestigio de la universidad es menoscabado intencionalmente, presentándola como una institución que amenaza las certezas morales y sociales promovidas por la agenda conservadora. Este ataque a la universidad tiene como fin deslegitimar su rol en la sociedad, promoviendo la duda sobre la ciencia y el conocimiento crítico, que son obstáculos para la consolidación de proyectos autoritarios basados en dogmas inalterables. Así, el retorno de la derecha es directamente proporcional al desprestigio de la universidad y de la ciencia. El negacionismo científico funge como instrumento para menoscabar la razón pública.

- Tal proceso se alimenta de la penetración de las religiones con mayor fuerza en el ámbito político. La influencia de las religiones en la política de América Latina ha sido un fenómeno persistente a lo largo de su historia, y se ha intensificado en las últimas décadas. La región, predominantemente católica, ha experimentado un creciente activismo político de grupos religiosos, especialmente evangelistas y pentecostales, que han ganado influencia en la arena política. Estos grupos han promovido agendas conservadoras en temas como el aborto, los derechos LGBTQIA+ y la educación sexual, buscando imponer principios religiosos en las políticas públicas. En varios países, los líderes religiosos han asumido cargos políticos o han apoyado candidaturas, configurando un panorama político donde la religión tiene un rol determinante en la formulación de políticas y la movilización electoral. En particular, en países como Brasil, el presidente Jair Bolsonaro contó con el respaldo decisivo de sectores evangélicos para su elección, un fenómeno que refleja el aumento de la influencia política de estas Iglesias. Esta simbiosis entre religión y política se observa también en otros países como Guatemala y México, donde partidos políticos o movimientos religiosos han jugado roles clave en procesos electorales y decisiones legislativas, consolidando un nexo entre moral religiosa y gobernanza que afecta profundamente las políticas sociales y los derechos civiles en la región.

f. *Pérdida de privilegios en la cultura patriarcal y defensa de la familia tradicional.*

- En América Latina, los cambios socioeconómicos recientes han llevado a una pérdida de los privilegios que históricamente han disfrutado los hombres. La reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres;<sup>15</sup> el aumento de la participación femenina en el ingreso total, que en la región creció a mayor velocidad que la del promedio mundial;<sup>16</sup> el incremento del porcentaje de mujeres que tiene mayor ingreso en el hogar;<sup>17</sup> el incremento de la matrícula universitaria en donde el porcentaje de las mujeres es mayor al de los hombres; y, la disminución del tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado (ver sección 8), parece que están generando una transformación no menor en la distribución de poder y los recursos en la sociedad. Estas dinámicas son, en parte, resultado de las interpelaciones de los movimientos feministas, que han cuestionado las estructuras patriarcales y promovido una mayor igualdad de género. Sin embargo, estas mismas transformaciones han generado una reacción en ciertos sectores masculinos que se sienten amenazados por la pérdida de su estatus privilegiado. Esta sensación de despojo impulsa a muchos hombres a apoyar proyectos políticos tradicionales y conservadores que promueven un *ethos* regresivo, defendiendo valores ligados al orden familiar tradicional y rechazando los avances feministas. De este modo, el conservadurismo masculino se refuerza como respuesta defensiva ante un entorno que, desde su perspectiva, desafía los privilegios que habían sido históricamente incuestionables. Se tratará este tema con mayor detalle más adelante.

g. *Sobre el antiestatismo: pandemia y derecha antisistema*

- La pandemia de COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria global, sino que también actuó como un catalizador para la construcción de una derecha antiestatal y antisistémica en varios países, especialmente en América Latina. Durante la crisis, las medidas de confinamiento, la intervención estatal y las restricciones impuestas para contener la propagación del virus fueron vistas por ciertos sectores como una invasión a las libertades individuales, alimentando una narrativa en la que el Estado es percibido como un ente opresor e ineficaz. Los movimientos de derecha aprovecharon este contexto para promover una retórica antiestatal, donde el gobierno central y las instituciones internacionales fueron deslegitimadas, presentándolas como parte de un sistema que conspira contra la libertad de los ciudadanos.

- A su vez, este discurso antisistémico se fortaleció con la difusión de teorías conspirativas y la creciente

---

<sup>15</sup> Resulta importante saber que la relación del ingreso medio entre mujeres y hombres se ha acortado, es decir, la brecha entre hombres y mujeres ha disminuido sistemática pero lentamente en las últimas décadas. No obstante, si examinamos por un corte de edad se puede observar que las mujeres jóvenes están acostumbradas a vivir con menos desigualdad si se compara con los otros grupos etarios. Así por ejemplo, la brecha se redujo en 14 puntos porcentuales en el grupo de edad comprendido entre 55 años y más. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/>

<sup>16</sup> Si bien creció, sigue por debajo de la equidistribución. Dicha participación se encuentra en 35 %. <https://wid.world/>

<sup>17</sup> Entre 2000 y 2023, este porcentaje pasó del 27 al 35 %. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/>

desconfianza hacia las elites científicas y políticas, lo que impulsó un apoyo popular hacia líderes autoritarios que prometen soluciones simplistas y radicales. Esta derecha emergente también cuestiona el papel del Estado en la economía, promoviendo la privatización de servicios y la reducción de su intervención en los asuntos sociales, lo que refuerza su agenda neoliberal. La pandemia, por lo tanto, se convirtió en un campo fértil para la derechización de sectores que ven en el Estado una amenaza a sus derechos y libertades, mientras rechazan el consenso científico y las instituciones democráticas tradicionales.

- Es importante señalar que en este caso la pandemia es vista como uno de los fenómenos que evidencian el cambio estructural que vive el mundo. La evidencia científica señala que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se originó en animales y se transmitió a los humanos. Este tipo de enfermedades son cada vez más comunes debido al mayor contacto entre humanos y fauna silvestre, impulsada por la deforestación, la expansión agrícola y la urbanización, que destruyen hábitats naturales y fuerzan a las especies animales a interactuar más estrechamente con las personas (Johnson et al., 2020). El modelo industrializado de la agricultura ha contribuido a la proliferación de virus zoonóticos. La intensificación de la producción de alimentos, que incluye prácticas como la cría intensiva de animales, ha aumentado el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y humanos debido al hacinamiento, el uso excesivo de antibióticos y la degradación ambiental (Wallace et al., 2020). A lo mencionado hay que sumar el calentamiento global como un agravante del problema. Este afecta los patrones de migración y comportamiento de las especies animales, creando nuevas oportunidades para la propagación de enfermedades. Además, el calentamiento global exacerba las condiciones para la supervivencia y transmisión de virus (Carlson et al., 2020). Finalmente, la alta conectividad producto de los circuitos comerciales hizo que el virus pueda transmitirse con facilidad a lo largo del mundo. La proximidad a la muerte de amigos, familiares, conocidos y vecinos ha generado un sentido del tiempo que no ha sido lo suficientemente estudiado, pero parecería que no es menor en la subjetividad de los ciudadanos del continente. La muerte masiva o su amenaza parece que resultó un terreno fértil para estar con “bronca” frente al sistema. Los gobiernos neoliberales o de derecha supieron aprovechar muy bien una posición antisistémica como sinónimo de anti-Estado. Mientras que a principios del 2000 surgió un grupo de gobiernos antineoliberales que fue antisistema, casi dos décadas después estar en contra del sistema es ser antiestatal.

Más allá de los argumentos como el desgaste de los gobiernos progresistas por el paso del tiempo al frente del Estado; o la casuística de corrupción (intolerable en cualquier gobierno) que jamás iguala a aquella realizada por gobiernos neoliberales que sistemáticamente se apropian de lo público privadamente;<sup>18</sup> o la tibieza redistributiva de los gobiernos de izquierda en el segundo tiempo de este milenio (como se verá más adelante), lo que se ha pretendido argumentar en esta sección es que la subjetividad de derecha responde a un cambio mucho más estructural que tiene que ver con las mutaciones en el modo de acumulación capitalista y su impacto en el mundo del trabajo. Una desderechización debería empezar por articular una agenda de cambios estructurales ligados al cambio en la matriz productiva, con una lógica alternativa a la planteada por el sistema económico imperante ligado a salidas que giran alrededor del capitalismo de plataforma, el narconeoliberalismo y la disputa por los nuevos recursos naturales necesarios para generar la transición energética que reproducen una acumulación similar a la realizada a partir de los combustibles fósiles.

Las “benditas redes sociales” y los medios masivos comunicacionales son simplemente la epidermis de una metástasis que crece al interior del cuerpo social, económico y ecológico de los países de América Latina y el Caribe.

---

<sup>18</sup> No es casual que en los *Pandora papers* aparezcan presidentes o políticos con ideología neoliberal asociados a empresas *offshore* en paraísos fiscales, siendo los principales: Sebastián Piñera, Guillermo Lasso, Luis Abinader, César Gaviria, Andrés Pastrana, Pedro Pablo Kuczynski, Porfirio Lobo, Alfredo Cristiani y Horacio Cartes.

## 6. Democracia e igualdad

Los golpes institucionales que conviven con y son posibles gracias a la democracia formal son un subproducto de la crisis de la acumulación capitalista, que no encuentra una mejor salida institucional para resolver el problema de la reducción de la tasa decreciente de ganancia del capital que atraviesa la economía mundial que los regímenes neoliberales autoritarios, que develan el respectivo incremento de la concentración de la riqueza en pocas manos (y, con ello, del poder político) y la incapacidad de construcción de valor genuino (porque genera ganancias rentistas por transferencias) en el capitalismo naciente de tipo cognitivo-financiero.

Frente a la crisis de acumulación mundial, la actual ganancia por transferencias parece no compatible con sistemas democráticos; peor aún en economías como las latinoamericanas, caracterizadas por ser históricamente rentistas. En este marco, los regímenes neoliberales buscan formas ficticias de democracia institucionalizada para legitimar ganancias de capital sin creación de valor económico. En momentos de expansión y crecimiento económico tal situación puede pasar desapercibida. No es lo que sucede actualmente en la región.

No obstante, el componente autoritario del neoliberalismo tiene nuevas características. Vivimos regímenes políticos mediados principalmente por la intervención de los sistemas de justicia y los medios de comunicación. La alternativa dialéctica está en romper con esta situación mediante gobiernos progresistas o nacional-populares que basen su poder en procesos de incorporación política, social y económica de grandes mayorías históricamente excluidas. Es decir, en romper la pauta de incorporación conservadora que signó los destinos de buena parte de los países de la región (Filgueira, 2013).

Una estrategia clave de los más recientes gobiernos progresistas o nacional-populares en América Latina fue generar patrones redistributivos que afectaron la acumulación excesiva del percentil y decil más alto de la riqueza. Esta mejora del bienestar de la población interpeló sustantivamente a la democracia: la radicalidad de las derechas en cada caso puede tomarse como un indicio de las disputas y conflictos redistributivos, en donde –en términos relativos– las grandes mayorías (clases medias y populares) resultan beneficiadas en detrimento de los grandes grupos económicos.

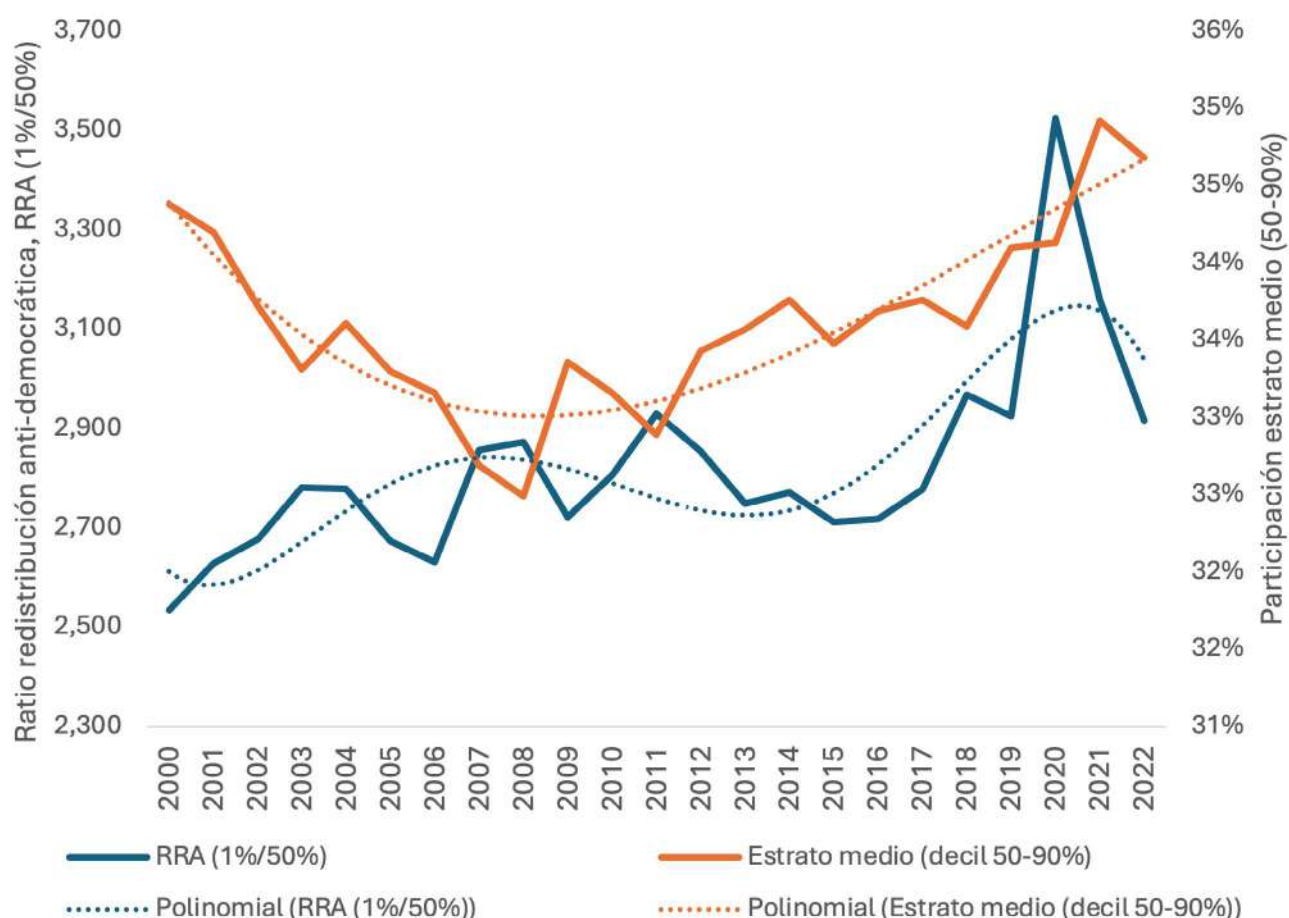
Un análisis de los últimos 22 años en la región visto a través de la Ratio Redistributiva Antidemocrática [RRA]<sup>19</sup> permite visualizar tres momentos importantes: 2008, 2015-2016, y 2020. En efecto, entre el 2000 y 2008, la curva muestra una evidencia al crecimiento, dejando translucir con esto que la región experimentaba momentos de redistribución regresiva; proelite económica perteneciente al 1 % más alto de la población en comparación

---

<sup>19</sup> La Ratio Redistributiva Antidemocrática [RRA] evalúa la participación del 1 % más alto de la distribución de ingreso/riqueza frente a lo que tiene el 50 % más bajo de la misma. Es una propuesta analítica que permite visualizar y evaluar si los gobiernos han tenido o no inclinaciones más populares o dirigidas hacia las oligarquías de nuestros países, dando a entender cierto grado de pérdida de autonomía relativa. Para un análisis detallado, ver Ramírez (2019, 2024).

con el 50 % más bajo de la distribución. Así, nos podemos percatar que en el primer período del nuevo milenio la participación del 1 % crece 3 %, en tanto que la del 50 % más pobre, 1 %.

Gráfico 5. Ratio Redistributiva Antidemocrática [RRA] y participación del estrato medio (50-90 %) en Latinoamérica y el Caribe, 2000-2022



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Tasas de crecimiento en América Latina y el Caribe, 2000-2022

| Tasas de crecimiento          | 2000-2008 | 2008-2016 | 2016-2022 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Top 1 % (promedio)</b>     | 3 %       | 0,1 %     | -0,5 %    |
| <b>Bottom 50 % (promedio)</b> | 1 %       | 0,9 %     | -1,3 %    |

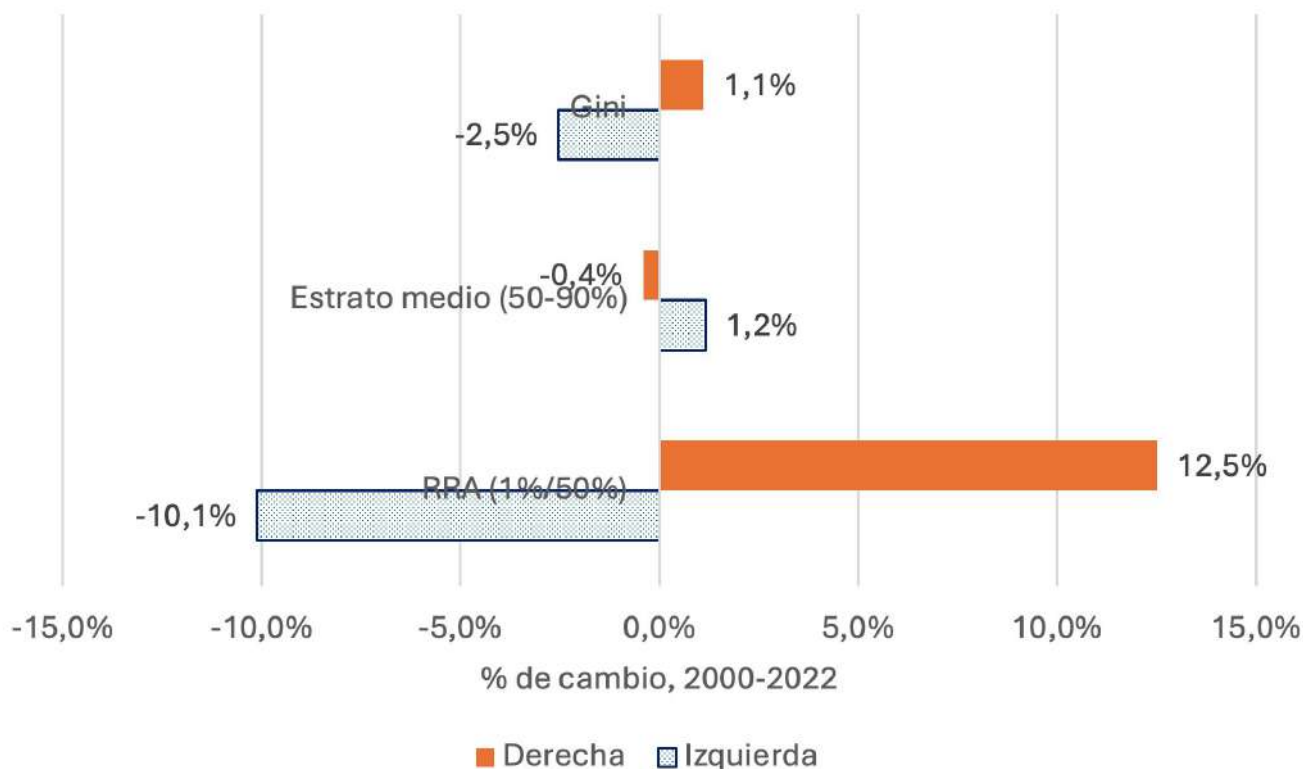
Nota: *top* = más alto; *bottom* = más bajo.

Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).

El 2008 marca un hito a nivel mundial, con la crisis financiera. Si bien la crisis afectó principalmente al centro, en el momento de la crisis económica, la región experimenta un momento redistributivo progresivo, principalmente como consecuencia del mayor crecimiento de la participación en el ingreso de las clases populares frente a lo que creció el 1 % más rico. En efecto, entre el 2008-2016 la participación del 50 % más pobre creció casi 1 % (0,9 %), en tanto que la del 1 % el crecimiento de su participación es casi nulo (0,1 %). Entre el 2022 y el 2016, se puede observar otra vez una relación regresiva en términos del proceso redistributivo del ingreso. En este período, si bien ambos grupos pierden participación del pastel, la velocidad de decrecimiento del 50 % más bajo de la población es casi tres veces más rápido que la del 1 %: mientras en el 1 % de mayor ingreso decrece 0,5 %,

en la mitad más baja se decrece 1,3 %. <sup>20</sup> Ahora bien, esta tendencia que sucede a nivel regional no fue igual para los gobiernos progresistas que para los neoliberales.

Gráfico 6. Resumen redistributivo según ideología de gobierno en América Latina y el Caribe, 2000-2022

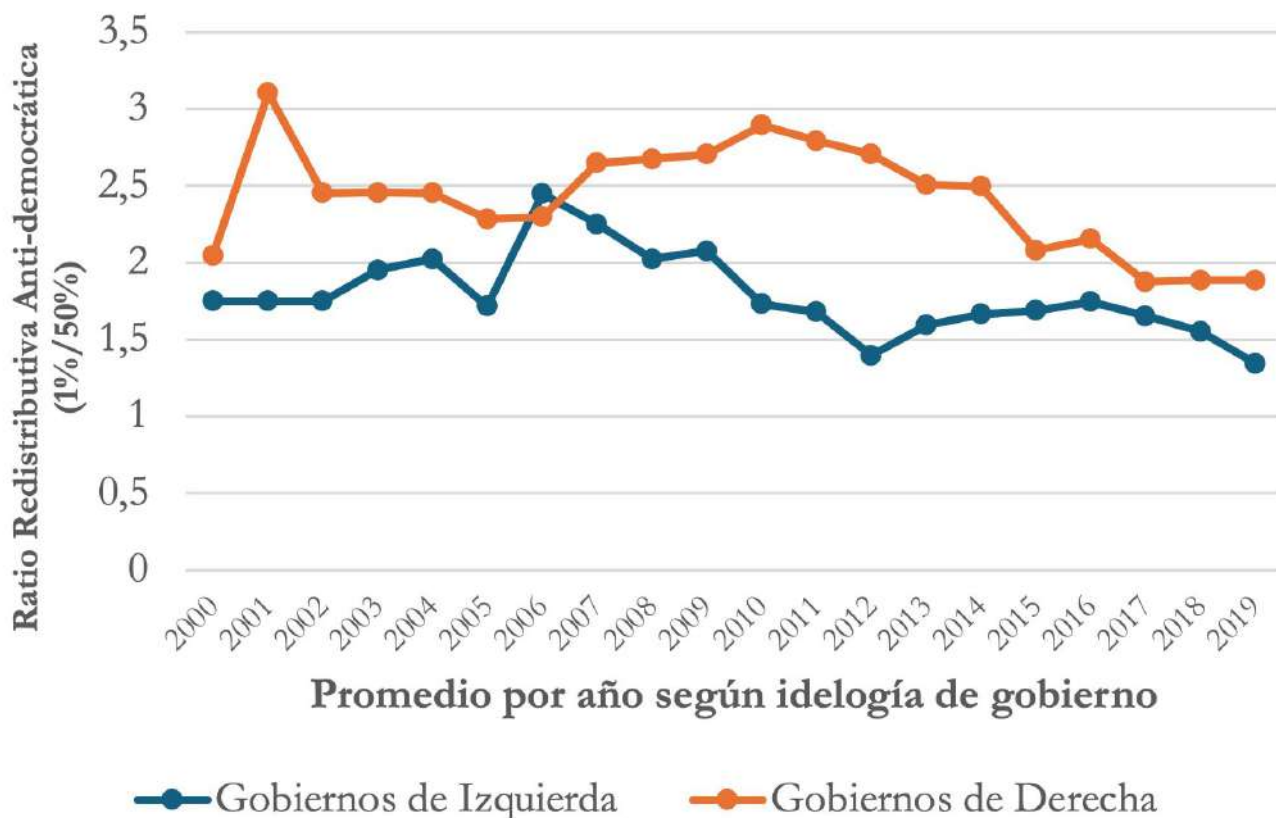


Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).

Si comparamos el cambio sucedido entre el 2000 y el 2022 según ideología de gobierno se puede concluir que esta importa al momento de dividir el pastel. En efecto, se puede señalar que en estas más de dos décadas el sentido redistributivo es el opuesto si comparamos gobiernos oligárquicos versus populares. En efecto, los gobiernos de derecha vieron aumentar la desigualdad (coeficiente de Gini), disminuyeron la participación de los estratos medios y tuvieron un comportamiento prooligarquías pertenecientes al 1 % más alto en detrimento de los sectores populares (ver RRA). En su defecto, los períodos en los que gobernó el progresismo –en promedio de las dos décadas– disminuyó la desigualdad, incrementó la participación de los estratos medios y la orientación redistributiva fue promayorías populares y antielite económica. En otras palabras, la derecha tiene una propuesta redistributiva antidemocrática, en tanto que la de la izquierda es prodemocrática.

<sup>20</sup> Si se analiza la totalidad del período, más allá de los cambios señalados, se puede observar que el 50 % más bajo de la distribución ha mantenido en promedio una participación alrededor del 7 %. Comprende a la mayoría de la población, y es la que menor participación tiene.

Gráfico 7. Ratio Redistributiva Antidemocrática del Ingreso Nacional Neto según ideología de gobierno (Top 1 % / Bottom 50 %, promedio simple), 2000-2019



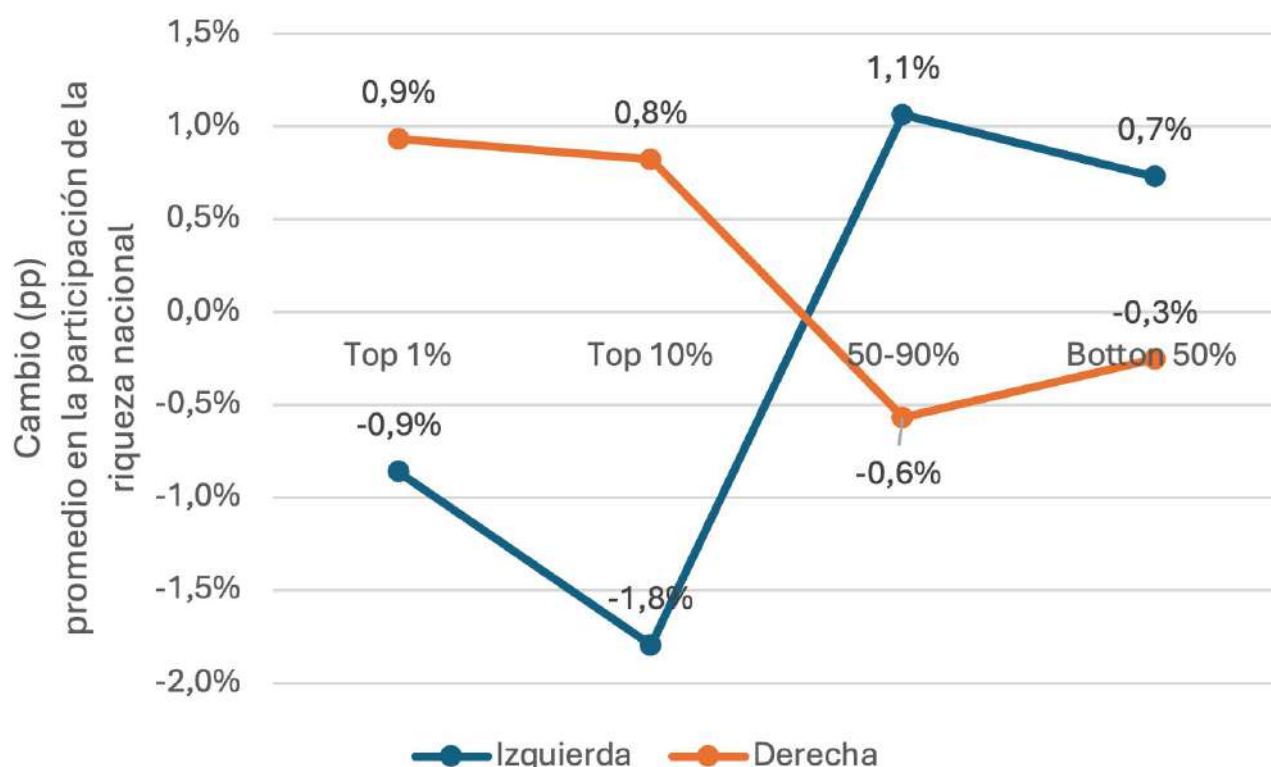
Nota: RRA = Top 1 % / Bottom 50 %.

Fuente: Elaboración propia con base en WID (2000-2020).

Cómo se puede comparar en la gráfica, sistemáticamente los gobiernos de izquierda tienen un mucho menor RRA que los de derecha, es decir, buscan favorecer más a las grandes mayorías: las clases medias y clases populares.

A su vez, si nos referimos a lo sucedido con el patrimonio, el patrón redistributivo se repite. La izquierda evidencia patrones redistributivos económicos anticíclicos, en tanto que las derechas acentúan los procesos recesivos a través de los procesos de concentración de la riqueza. Algo que es importante señalar es que la izquierda en el período analizado, si bien favorece más a las grandes mayorías (90 % de la población), más porción reciben los estratos medios que los populares, tanto cuando nos referimos a ingreso como a riqueza.

Gráfico 8. Cambio en la participación de la riqueza nacional según ideología de gobierno, 2000-2022



Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).

A pesar de lo señalado, es claro que tales niveles de reducción de la riqueza no son suficientes para contrarrestar las distancias indignas y generar procesos democráticos más igualitarios. El problema en la región no es la pobreza, sino la hiperconcentración de la riqueza. En ese marco, podemos señalar que el problema no es la desigualdad sino las distancias indignas.

Según el World Inequality Database, podemos señalar que resulta pantagruélico que el 1 % más rico del mundo tiene más que el 50 % más pobre del mundo. Pero peor aún es señalar que este 1 % con mayor patrimonio tiene 63,5 veces más que la mitad más pobre del continente.<sup>21</sup> Si comparamos lo acontecido en la última década, podemos afirmar que la ratio redistributiva antidemocrática [RRA] es de 2,8 veces más alta en la región que el promedio mundial; es decir, la distancia entre el 1 % más rico de la población y la mitad más pobre en América Latina es casi 3 veces más que lo que sucede en el promedio mundial. Lo inmoral no solo es la cantidad desmedida que tiene el 1 % más alto de la distribución sino lo poco que tiene el 50 % más pobre. En el caso del promedio del mundo, en la última década, el 50 % más pobre del planeta acumuló 1,6 % del total de la riqueza. En la región, este porcentaje fue de 0,7 %.

### 6.1. El segundo tiempo de la puja distributiva

La evidencia es clara acerca de que en los gobiernos de izquierda las oligarquías en términos relativos vieron perder parte de su pastel, tanto si se evalúa el ingreso como la riqueza. Esta dinámica redistributiva tuvo sus efectos en la legitimidad electoral. Al no estar asegurada la victoria de las elites económicas y de las oligarquías tradicionales en procesos transparentes electorales, se recurrió a dos instituciones que pueden fácil y naturalmente aislarse de la presión popular: los sistemas de justicia y los medios de comunicación masiva. Son instancias donde

<sup>21</sup> Ratio promedio sucedida en la región durante el siglo XXI.

usualmente se dirime gran parte de los conflictos sociales tanto formales (sistema de justicia) como subjetivos (medios de comunicación).

En efecto, el famoso principio del equilibrio de poderes liberal resultó mortalmente cuestionado. Hoy por hoy, el poder estatal que tiene mayor jerarquía es el que tiene la función judicial; pero es el poder oligopólico de los medios de comunicación el que lo legitima (incluido el ejecutado a través de las redes sociales), que frecuentemente está relacionado con el poder financiero. El “poder constituyente” del desequilibrio de poderes –hoy en día– son los medios de comunicación y los sistemas de justicia.

No podemos leer tampoco, en este escenario, que el neoliberalismo que retorna en la región es igual al de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Aquel sucedía en la disputa por la transición y la consolidación de las democracias. El que estamos viviendo a fines del segundo decenio del nuevo milenio sucede en la transición hacia nuevas formas de autoritarismo; o, siendo optimistas, hacia nuevas modalidades de regímenes políticos que aún no han sido estudiadas a cabalidad y menos aún identificadas, y formalizadas en todos sus componentes. En este sentido, lo que caracteriza principalmente a la época que vivimos es la idea de un autoritarismo de nuevo cuño o, al menos, *aggiornato*.

Otra gran diferencia de esta recomposición neoliberal es que, luego de los gobiernos neodesarrollistas de los tres primeros lustros del siglo XXI, que buscaron edificar una arquitectura de instituciones de interés común amplia (extensa inversión pública en energía, universidades, telecomunicaciones, carreteras, salud, educación, seguridad social, etc.), la apropiación privada de la acumulación social resultó mucho más amplia y a mayor velocidad que cuando no existían o estaban desmanteladas las instituciones.

En otras palabras, los niveles de expropiación social de las corporaciones privadas nacionales o transnacionales son mucho más extensos, debido a las inversiones públicas realizadas con los gobiernos desarrollistas.

No obstante, quizá uno de los problemas más significativos del neoliberalismo resulta de dónde proviene la defensa de los autoritarismos. Las dictaduras militares del siglo pasado no tenían legitimidad social y cualquier tipo de silencio provenía principalmente del miedo a la represión. Seguidamente, la “liberalización política” (democracia) vino acompañada de la “liberalización económica” (neoliberalismo), en un ejercicio *top-down*.

El autoritarismo neoliberal que viven ahora nuestros países tiene una base de sustento en la propia ciudadanía que reivindica el racismo, la xenofobia, la violencia, el odio, la discriminación, el patriarcalismo, la distinción; prácticas antidemocráticas que violan los derechos humanos. Las dictaduras democráticas, y su correlato en el plano económico de autoritarismos neoliberales, son respaldadas por fascismos sociales.

Los golpes militares de antaño se ejecutaban a través de la función ejecutiva de los Estados; los “golpes democráticos” actuales se ejecutan a través de la función judicial y se apoyan y legitiman en los medios de comunicación (aunque, como hemos señalado, cada vez con mayor protagonismo reaparecen las fuerzas armadas y policiales) y en el sentido común que estos alimentan en gran parte de la población.

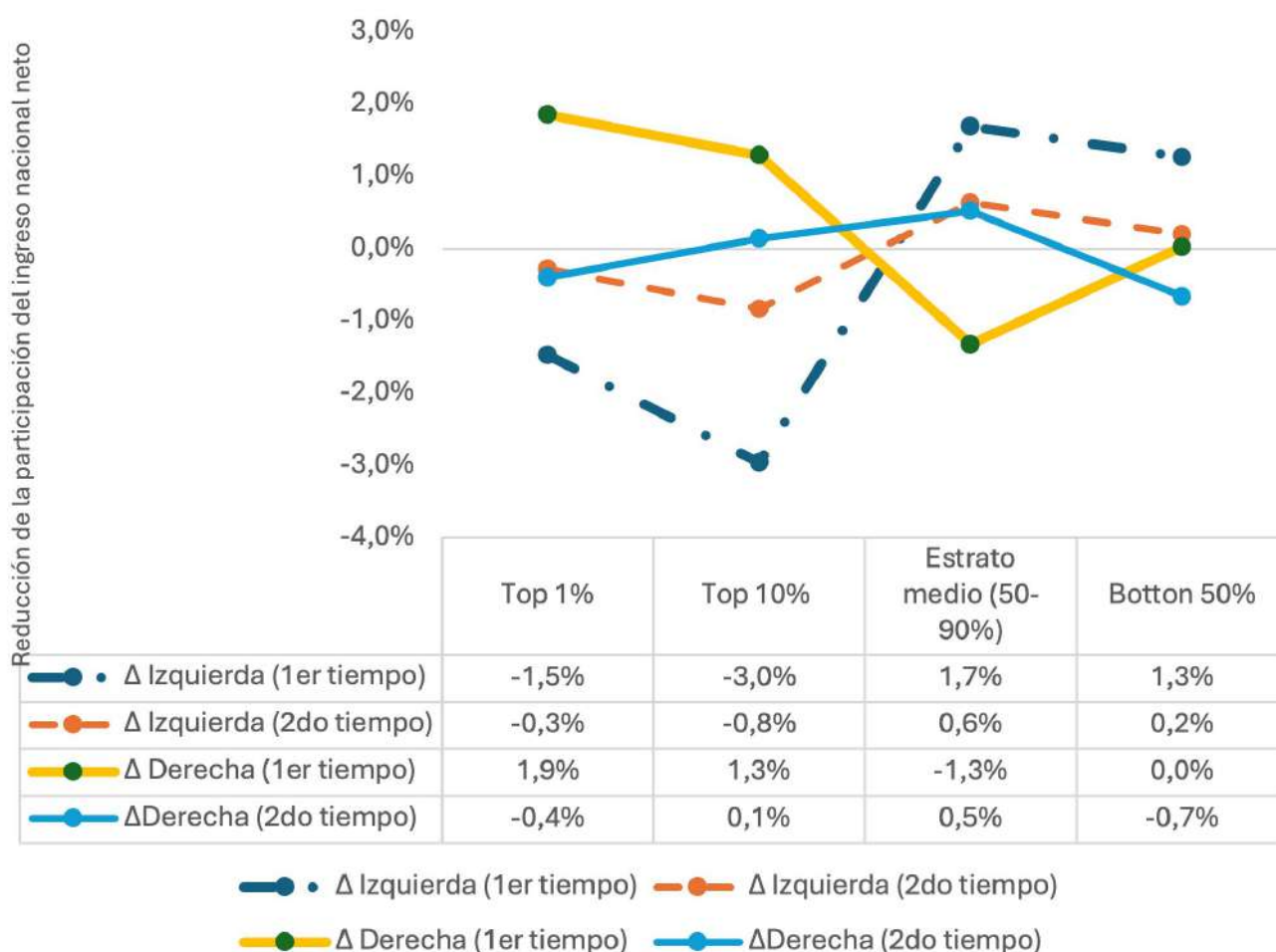
Si bien se han señalado algunas características que diferencian el nuevo del viejo neoliberalismo, algo que no se puede dejar de apuntar, por el impacto que tiene en las democracias, es el papel de la deuda externa. El retorno a la democracia de la región vino acompañado de la crisis de la deuda. Tal circunstancia ha sido una camisa de fuerza para la legitimidad de la democracia. Los gobiernos posdictaduras del siglo XX entraron con las manos atadas para cumplir objetivos redistributivos y avanzar en la construcción de los Estados de bienestar.

No es coincidencia que, en este segundo momento del neoliberalismo, que convive con lo que hemos denominado dictaduras democráticas, los gobiernos de tendencia neoliberal que sucedieron a gobiernos progresistas adopten de nuevo altos niveles de endeudamiento (como es el caso de Argentina y Ecuador), volviendo a atar de manos a los gobiernos sucesores para impedir procesos de democratización de derechos que intenten recuperar la democracia. La deuda es una de las zonas estratégicas en la disputa, por un lado, democracia/autoritarismo; y, por el otro, concentración/distribución de la riqueza.

Empero, este retorno de la derecha se enfrentó a un contrataque de los gobiernos nacional-populares. La llegada de Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras) y recientemente Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) da cuenta de que el partido

sobre los sentidos democráticos y de justicia sigue jugándose. ¿Qué sucedió en este “segundo tiempo” en la distribución del pastel entre los gobiernos de izquierda y derecha frente a aquellos que jugaron el “primer tiempo”?

**Gráfico 9. Dos tiempos redistributivos según ideología: resumen redistributivo (reducción de la participación) según ideología de gobierno en América Latina y el Caribe, 2000-2022**



Nota: Los datos presentados son los promedios de cambio en la participación en cada ciclo ideológico.

Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).

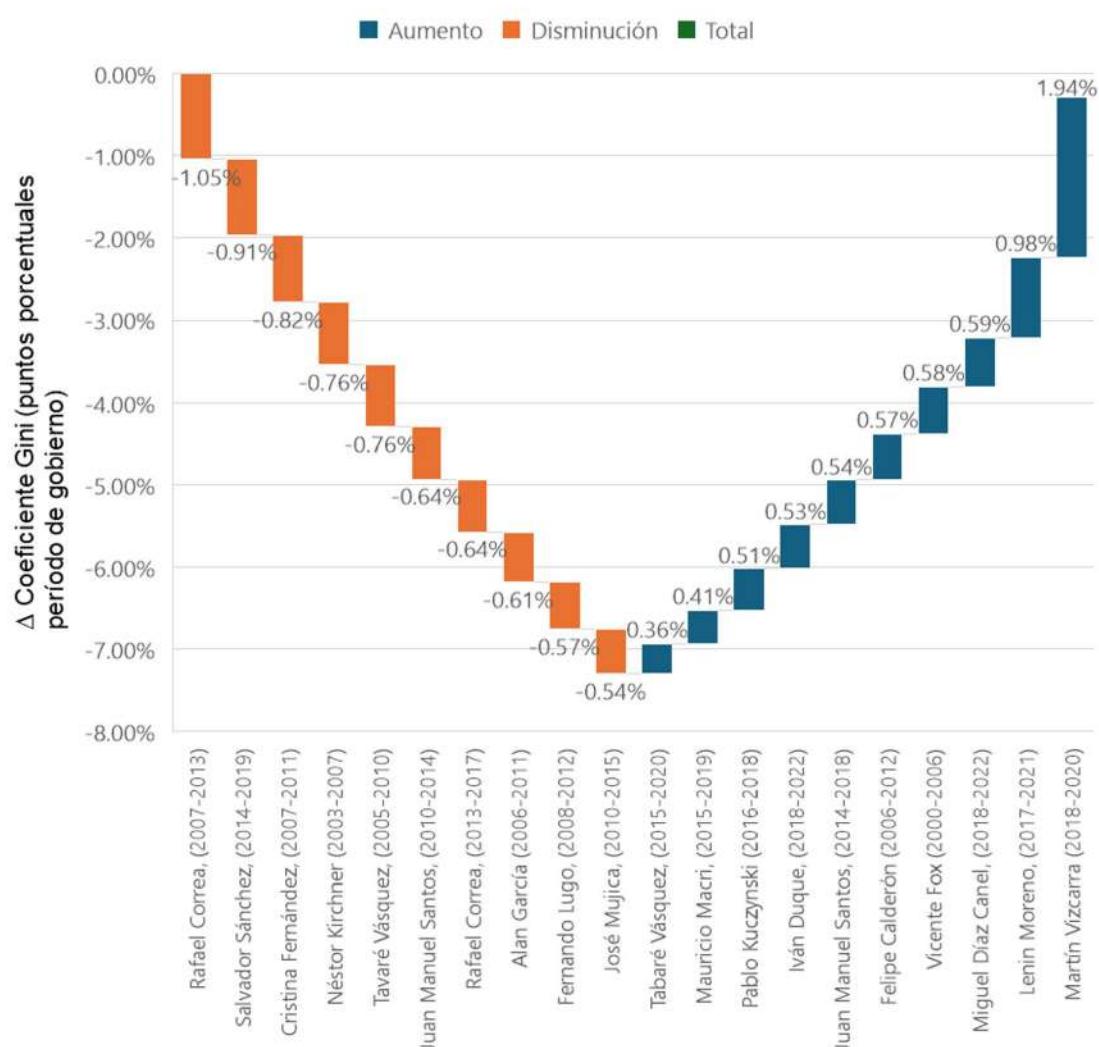
Cuando desagregamos aún más para ver las tendencias de acumulación del ingreso nacional neto según estrato económico podemos evidenciar que la derecha del primer tiempo se caracteriza por ser más oligárquica (proelite 1 %), y por golpear a las clases medias, que las derechas que son parte del segundo tiempo. La derecha del segundo tiempo se caracteriza sobre todo por ser más antipopular, si se compara con la del primer tiempo. A su vez, la izquierda del primer tiempo se caracteriza por ser sobre todo más antioligárquica que la izquierda del segundo tiempo. Asimismo, la izquierda de la primera ola es más proestratos medios y populares que los gobiernos progresistas del segundo tiempo. Es importante señalar que la izquierda tanto del primer tiempo como del segundo favorece más a las clases medias que a los sectores populares (50 % más bajo de la distribución) en términos de velocidad de acumulación del ingreso nacional neto en el período estudiado.

La comparación entre los dos tiempos ideológicos en las más de dos décadas analizadas da cuenta de que los comportamientos ideológicos no son azarosos. Coherentemente, la izquierda busca una redistribución progresiva proigualdad y, la derecha, una regresiva desigualadora. La izquierda es antioligárquica y a favor de las grandes mayorías; la derecha es proelite y antisectores mayoritarios. No obstante, existen diferencias particulares cuando comparamos las dos derechas. La derecha de la primera década fue mucho más oligárquica que la de la segunda. A su vez, se puede señalar que la derecha del primer tiempo fue más antiestratos medios que la del segundo momento; mientras que los gobiernos neoliberales del segundo tiempo fueron más antipopulares (50 %

más pobre) que los del primero. A los gobiernos progresistas o nacional-populares les diferencia la radicalidad redistributiva. Los del primer tiempo fueron más antioligarcas y más propueblo que los gobiernos de izquierda del segundo tiempo. En palabras simples: en el marco de los ciclos estructurales, la izquierda del segundo tiempo es más tibia que la de la primera ola.

La diferencia en los patrones redistributivos se evidencia también si analizamos los cambios sucedidos en cada período de gobierno. En efecto, de los diez gobiernos que más disminuyeron la desigualdad en el lapso del período presidencial, ocho son gobiernos considerados de izquierda, nacional-populares o progresistas; los otros dos, de derecha neoliberal. Los gobiernos que más disminuyeron desigualdad son (en orden de reducción anual promedio): Rafael Correa (2007-2013), Salvador Sánchez (2014-2019), Cristina Fernández (2007-2011), Néstor Kirchner (2003-2007), Tabaré Vázquez (2005-2010), Juan Manuel Santos (2010-2014), Rafael Correa (2013-2017), Alan García (2006-2011), Fernando Lugo (2008-2012) y José Mujica (2010-2015).

Gráfico 10. Ranking de los diez gobiernos con mayor y menor cambio (aumento o disminución) en el coeficiente de Gini, 2000-2022 (datos anualizados) <sup>22</sup>



Fuente: WID, Elaboración: Propia.

<sup>22</sup> No se incluyen gobiernos que no han terminado su período presidencial o cuya información no dé cuenta de la totalidad del período para el que fueron electos. Así por ejemplo, no está incluido en el ranking el gobierno de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández o Nayib Bukele. Los dos primeros porque no han concluido su período y los dos últimos porque se tiene información solo hasta el 2022 y sus períodos de gobierno terminaron en el 2023.

En el otro extremo, es decir los gobiernos que más aumentaron la desigualdad ocho son de derecha y dos de izquierda. Los gobiernos que más incrementaron la desigualdad (según orden de incremento anual promedio): Martín Vizcarra (2018-2020), Lenín Moreno, (2017-2021), Miguel Díaz Canel (2018-2022), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Juan Manuel Santos, (2014-2018), Iván Duque, (2018-2022), Pablo Kuczynski (2016-2018), Mauricio Macri (2015-2019) y Tabaré Vázquez (2015-2020).

¿El patrón analizado se repite cuando nos referimos a la distribución del patrimonio?

Tabla 6. Distribución de la riqueza según ideología (primer y segundo tiempo, 2000-2022)

|                                       | Izquierda,<br>2000-2022<br>(promedio) | Derecha,<br>2000-2022<br>(promedio) | Δ Izquierda (1er<br>tiempo) | Δ Izquierda<br>(2do tiempo) | Δ<br>Derecha<br>(1er<br>tiempo) | Δ Derecha<br>(2do tiempo) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Top 1 %<br/>(promedio)</b>         | 32,8 %                                | 36 %                                | -6,7 %                      | -5,1 %                      | -0,4 %                          | -1,9 %                    |
| <b>Bottom<br/>50 %<br/>(promedio)</b> | 2,3 %                                 | 2,3 %                               | 0,8 %                       | -0,4 %                      | 0,2 %                           | 0,3 %                     |
| <b>Top 10 %<br/>(promedio)</b>        | 63,3 %                                | 68,6 %                              | -8,7 %                      | -9,7 %                      | -0,7 %                          | -1,7 %                    |
| <b>50-90 %<br/>(promedio)</b>         | 27,7 %                                | 29,1 %                              | 1,3 %                       | -4,1 %                      | 0,5 %                           | 1,3 %                     |
| <b>RRA (1<br/>%/50 %)*</b>            | 14,21                                 | 15,61                               | -33 %                       | -9 %                        | 36 %                            | -17 %                     |

*Nota:* Los cambios son puntos porcentuales promedio del incremento o reducción en la participación del total del patrimonio nacional. (\*) En el caso del RRA, son cambios porcentuales en la ratio 1 %/50 % del promedio de los gobiernos según su respectiva ideología.

*Fuente:* Elaboración propia con base en WID (varios años).

Si analizamos el RRA como señal de cuán democrática fue la redistribución, parece ser que la historia se repite para los gobiernos de izquierda. La izquierda del primer tiempo fue mucho más radical que la del segundo tiempo para favorecer a las grandes mayorías, cuando nos referimos a la redistribución de la riqueza. En este grupo ideológico, se repite el patrón de buscar que la participación de la elite económica disminuya, tanto la ubicada en el percentil como en el decil más alto de la población. En términos agregados también se repite la tendencia de que la participación de los estratos medios (decil 50 al 90) crece a mayor velocidad que la de los estratos populares (50 % inferior). Para los gobiernos de derecha, se invierte la tendencia; es decir, la derecha previa el primer tiempo de gobiernos progresistas fue mucho más concentradora que los gobiernos neoliberales que han sido parte de la restauración conservadora a finales de la segunda década del nuevo milenio. En efecto, mientras el RRA durante el primer tiempo de los gobiernos nacional-populares disminuyó 33 %, durante el segundo tiempo este se redujo en 9 %. En el otro extremo ideológico, los gobiernos de derecha de principios del nuevo milenio vieron incrementar en 36 % el RRA, en tanto que los de finales de la segunda década y principios de la tercera vieron disminuir la ratio entre el 1 % más rico y el 50 % más pobre [RRA]. Durante el primer tiempo de las derechas este incremento se debe sobre todo a lo sucedido en México, Uruguay, Colombia, Nicaragua y Argentina. Ahora bien, al hacer un *zoom* en la partida del segundo tiempo se pueden observar tres temas importantes. El primero es que el proceso redistributivo se da en el marco de una caída de la riqueza nacional neta. El segundo es que, durante el segundo tiempo, la derecha redujo el RRA a mayor velocidad que la izquierda. ¿Por qué? Si bien la izquierda redujo casi 2,7 veces más rápido la participación del 1 % más rico que la derecha, la diferencia radica en que la derecha incrementó marginalmente la participación del 50 % inferior en tanto que la izquierda disminuyó ligeramente la participación de la mitad inferior de la población.

Ahora bien, incluso más importante que esta diferencia es observar que la derecha del segundo tiempo incrementó la participación de los estratos medios, en tanto que la izquierda del segundo tiempo los disminuyó. Si bien la

reducción de los estratos medios es inferior que los del 1 % (-5,1 %) en los gobiernos de izquierda del segundo tiempo, la caída de la porción del pastel es significativa en términos relativos (-4,1 %). Quizá el país emblemático del mencionado patrón es Argentina, que evidencia que mientras en el gobierno de Mauricio Macri se puede constatar que hubo un crecimiento de la participación de las clases medias en la riqueza nacional, en el gobierno de Alberto Fernández este estrato vio disminuir su porción del pastel. Parece ser que, en algunos países de la región, el retorno de las derechas no solo fue porque hubo gobiernos de izquierda más tibios en términos redistributivos frente a los del primer tiempo, sino que incluso en ciertos grupos poblacionales, la derecha redistribuyó mejor al no reducir el patrimonio de los más pobres e incluso aumentar el de las clases medias. Bajo esta lógica, no sorprendería que en Chile o en Bolivia ganen gobiernos neoliberales si analizamos los pobres desempeños económicos y redistributivos de los gobiernos que señalan ser de corte nacional-popular en estos países.

La síntesis de lo sucedido en la región se puede simplificar en la tabla que estudia el promedio del coeficiente de Gini y el cambio que vivió durante los últimos 22 años.

Tabla 7. Coeficiente de Gini y cambio en el Gini (promedio anual) según ideología de gobierno, 2000-2022

| Gobiernos                                               | Gini (promedio) | Δ Gini (promedio anual) |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Gobiernos de izquierda/progresistas/ nacional-populares | 0.778           | -0.014                  |
| Gobiernos de derecha/conservadores/ neoliberales        | 0.830           | 0.031                   |

*Nota. El cálculo se realiza por país. Se calcula el promedio en cada período de gobierno, tanto del Gini como el cambio sucedido en este. Los resultados presentados constituyen el promedio de todos los gobiernos de izquierda frente a todos los gobiernos de derecha, desde inicios del nuevo milenio a la actualidad. El cambio del coeficiente de Gini es el promedio del cambio anual de cada período de gobierno.*

*Fuente: Elaboración propia con base en WID (varios años).*

Es claro que el promedio del coeficiente de Gini de la riqueza muestra una altísima concentración tanto para los gobiernos de izquierda como de derecha. Partiendo de tal evidencia, se aprecia claramente que la distribución ha sido menos concentrada en los gobiernos de izquierda en comparación con los de derecha. No solo aquello, al analizar el cambio anual promedio se evidencia la clara tendencia: el ser de izquierda o de derecha no solo es ideología, sino que se concreta en una distribución que fomenta el crecimiento de la concentración, como es el caso de los gobiernos de neoliberales de derecha, mientras que los gobiernos progresistas disminuyen la concentración.

Como grandes tendencias en la región, se puede señalar que cuando hubo reducción de la desigualdad esto sucedió principalmente por reformas institucionales como el incremento en el salario mínimo, la formalización de trabajadores (afiliación a la seguridad social) o el fortalecimiento de la organización sindical. Asimismo, se puede constatar que hubo incremento relativo de la participación laboral de las mujeres en el ingreso nacional antes de impuestos. No obstante, es importante afirmar que hay evidencia también que pudo haber habido reducción de la desigualdad de ingresos o riqueza pero sin alterar la distribución primaria del ingreso. Esto significa que se puede generar mayor igualdad sin cambiar las relaciones de poder (Ramírez, 2024), lo cual es importante pero no cambia la estructura social.

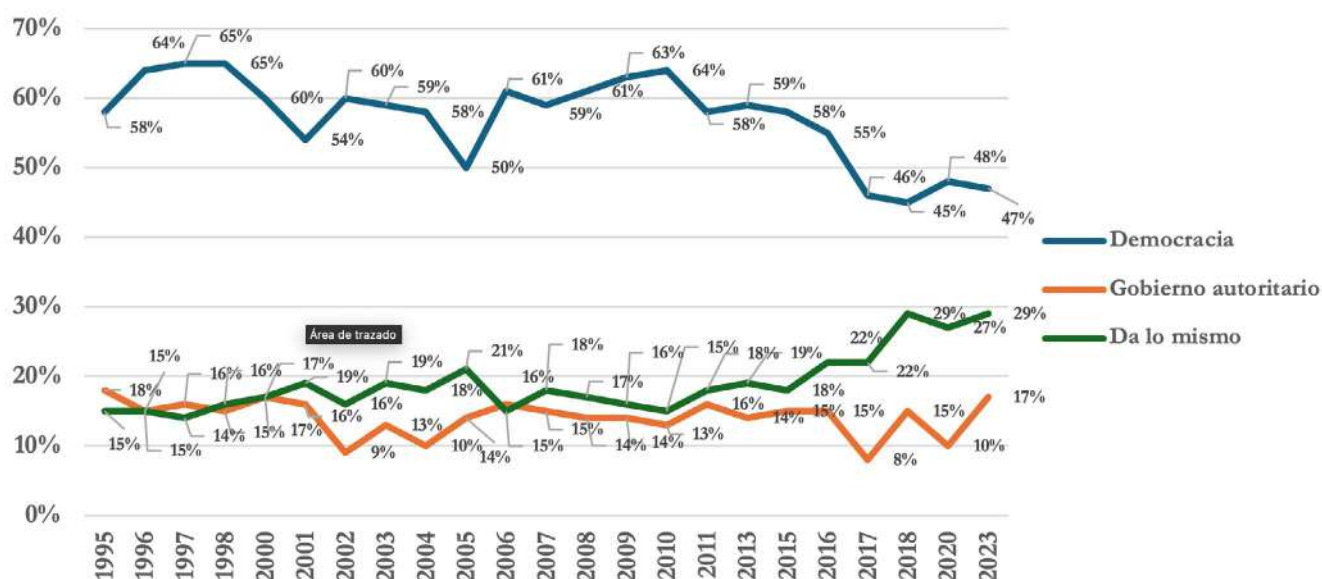
A su vez, la democratización en el derecho a la educación es otra de las razones que explican la reducción de la desigualdad. Decreció el rendimiento de la educación terciaria (PNUD, 2021) y creció el nivel educativo de los trabajadores con menor calificación, lo cual hizo que se cierren brechas entre los trabajadores calificados y no calificados. Esto también fue consecuencia de que la democratización de derechos no estuvo acompañada de un cambio en la matriz productiva y sobre todo fue consecuencia de un proceso de desindustrialización del aparato productivo (Palma, 2020). Asimismo, la protección social a través de las transferencias monetarias creció, protegiendo al trabajador no asalariado o al desempleado.

## 7. Democracia fake: negacionismo científico y religión

La curva del ciclo político representado en la sección 1 no solo tiene que ver con la relación entre democracia y dictadura, o con la emergencia de partidos progresistas frente a la restauración conservadora, sino también con el sentido común (ideológico) de la población y las condiciones que estructuran el debate democrático: el ciclo ideológico.

Las salidas de las dictaduras solo fueron posibles porque hubo un sentido común de ilegitimidad de las dictaduras que llevó a cuestionar los regímenes políticos autoritarios. En la mayoría de los países, el objetivo de instaurar los cimientos materiales del neoliberalismo se había implementado. El neoliberalismo era hegemónico pero las dictaduras no. En los ochenta y noventa hubo apoyo a la democracia liberal, y esta tuvo cierta estabilidad. Incluso con el arribo de gobiernos progresistas se buscó avanzar en un sentido radical de la democracia, pero siempre a partir de defender la democracia representativa. No obstante, al observar el soporte a la democracia de la ciudadanía latinoamericana podemos percatarnos que desde el 2010 empieza un descenso importante de apoyo a la misma, aumentando la velocidad de caída a partir del 2015. Paralelamente, desde el 2015 se trasluce un incremento en la indiferencia hacia la democracia (al ciudadano le da lo mismo si vive en democracia o en otro sistema no democrático). Empero, a partir del 2017 se puede constatar un crecimiento pronunciado de aquellos ciudadanos que apoyan bajo ciertas circunstancias que existan gobiernos autoritarios. Si sumamos aquellos ciudadanos indiferentes hacia el tipo de régimen político (28,8 %) y aquellos que defenderían gobiernos autoritarios (16,9 %), este grupo de ciudadanos son la misma proporción de aquellos que siguen apoyando la democracia (46,8 %). La sociedad está polarizada en su posicionamiento frente a la democracia. Tal situación viene acompañada de un desencanto con los partidos políticos. Según Latinobarómetro, del 2015 (39,4 %) al 2023 (31,9 %) cayó 7 % el porcentaje de ciudadanos que se identifican con un partido político. Es importante señalar que en el 2010 el 42,6 % de la población se sentía cercano a algún partido político. Dicha situación también evidencia la crisis de representatividad de los partidos.

Gráfico 11. Apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe, 1995-2023

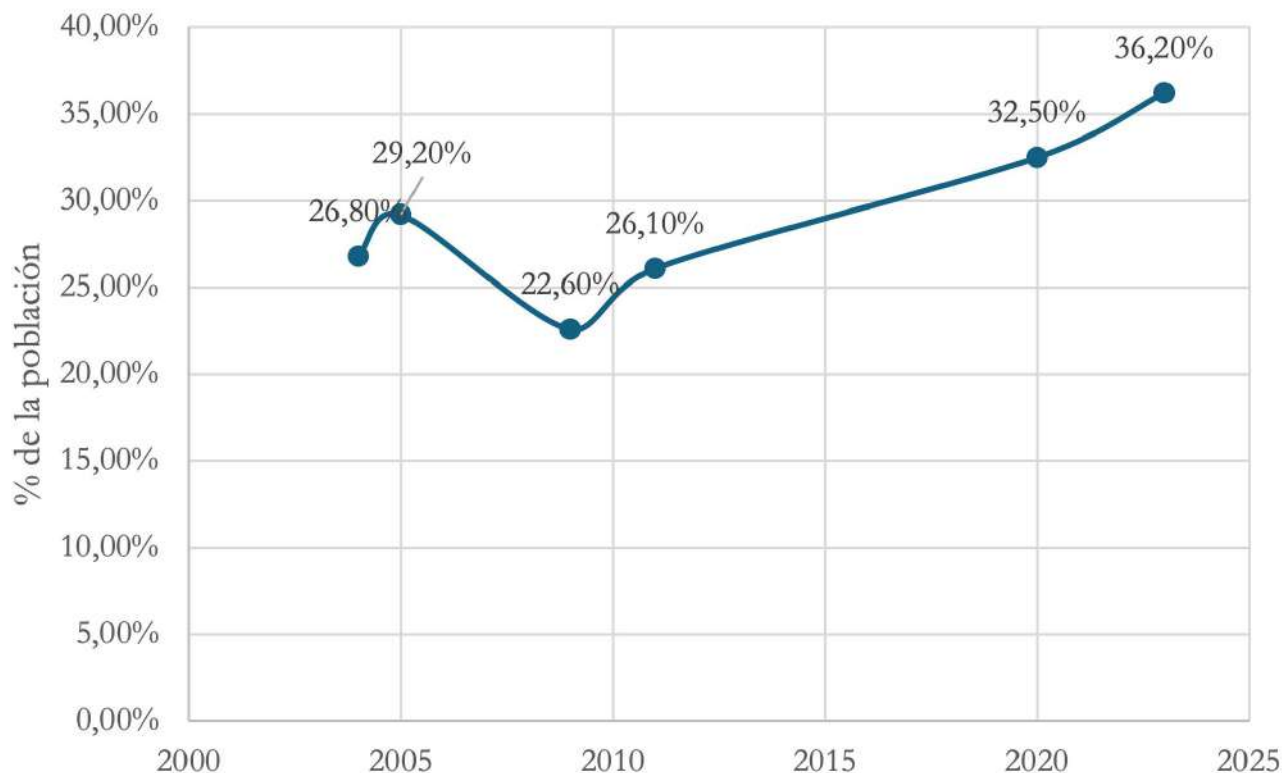


Nota: Para una mayor claridad del gráfico, no se incluye la respuesta "otra".

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (varios años).

La situación resulta alarmante cuando nos percatamos que mientras durante la primera década del nuevo milenio hay una tendencia a reducir el apoyo a gobiernos militares como sustituto de gobiernos democráticos en caso de que la situación social se ponga difícil, en la segunda década la tendencia es incremental. De hecho, se puede observar que entre 2011 (26 %) y 2023 (36 %) existe un 10 % más de población latinoamericana que apoyaría que los militares sustituyan un gobierno democrático; es decir, uno de cada tres ciudadanos apoyaría un gobierno militar.

Gráfico 12. Apoyaría un gobierno militar si las cosas se ponen muy difíciles



Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (varios años).

Ahora bien, pongamos sobre la mesa de debate un tema que corresponde a la esfera del sistema universitario y que debe ser central en el proceso de la producción del conocimiento en su relación con la democracia. La condición de posibilidad de la democracia es que pueda prosperar la deliberación en el espacio público. En este marco, más allá del rol que deben jugar los académicos, los investigadores y las investigaciones en el debate democrático, la condición previa es que la ciudadanía crea en la importancia de dilucidar el debate público en el marco de la producción de verdades científicas o sustentadas frente a creencias casuísticas previamente elaboradas o, peor aún, dogmáticas. En otras palabras, difícilmente prosperará la democracia en países altamente dogmáticos. Las noticias no son alentadoras en este marco. En primer lugar y más allá de los problemas estructurales que podrían explicar la fe en una religión, América Latina es una región en donde si entra en conflicto un argumento científico frente a uno religioso, prácticamente la mitad de la población apoya a la religión. Así, por ejemplo, el 52 % de los latinoamericanos están en desacuerdo que la religión siempre tiene la razón cuando entra en conflicto con el argumento científico. Es importante señalar que este porcentaje es del 64 % en Estados Unidos, 77 % en Corea del Sur, 85 % en Alemania o 94 % en China.

Tabla 8. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación?: “Siempre que la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene la razón”

|                      | Desacuerdo y completamente en desacuerdo (2017-2022) | Cambio (2010-2014, 2017-2022) |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ALC</b>           | 51,9 %                                               | -37 %*                        |
| <b>USA</b>           | 64 %                                                 | 25 %                          |
| <b>China</b>         | 94 %                                                 | 75 %                          |
| <b>Alemania</b>      | 85 %                                                 | 12 %                          |
| <b>Corea del Sur</b> | 77,1 %                                               | 55 %                          |

Nota: (\*) Los valores están presentados en cifras promedio. Países que disminuyen el porcentaje de personas que están en desacuerdo o completamente en desacuerdo con la aseveración señalada: Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua.

Fuente: Elaboración propia.

En la misma dirección de lo anteriormente señalado, el 41 % de los latinoamericanos y caribeños señalan estar completamente de acuerdo con la afirmación “*nosotros dependemos demasiado en la ciencia y poco en la fe*”. Estos porcentajes son del 28% en China, 15,5 % en Alemania, 22 % en Estados Unidos y 17 % en Corea del Sur. Tabla 9. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación?: “Nosotros dependemos demasiado en la ciencia y poco en la fe”

|                                   | Completamente de acuerdo (2017-2022) | Cambio (2010-2014, 2017-2022) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>América Latina y el Caribe</b> | 40,6 %                               | 6 %                           |
| <b>China</b>                      | 27,9 %                               | 51 %                          |
| <b>Alemania</b>                   | 15,5 %                               | 1 %                           |
| <b>Estados Unidos</b>             | 21,6 %                               | -24 %                         |
| <b>Corea del Sur</b>              | 17 %                                 | -23 %                         |

Fuente: Elaboración propia con base en datos de World Values Survey (varios años).

El problema es más profundo si se analiza en términos históricos. En ambos casos, América Latina y el Caribe parecen profundizar su sentimiento dogmático en contra de la verdad científica. Así, por ejemplo, en los últimos 6-8 años aumentaron un 37 % los ciudadanos que piensan que la religión siempre tiene la razón cuando entra en conflicto con la verdad científica. En China, Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur la tendencia fue lo contrario (disminuyó). De la misma forma, en el mismo período analizado hay un incremento en la proporción de los ciudadanos que piensan que “el mundo depende demasiado en la ciencia y poco en la fe”.

En este contexto, en un momento de la historia que el mundo vivió una pandemia, no es de sorprenderse que hayan surgido movimientos antivacunas o terraplanistas. Si el dogma reina en el debate público, difícilmente puede haber una democracia plena porque es imposible que prospere la deliberación, el mejor argumento. Las democracias están sitiadas por “las noticias falsas” (*fake news*), así como existe un proceso de ebullición de religiones y sectas que eliminan la posibilidad del debate informado y argumentado. El triunfo de la sociedad de la mentira sería (¿es?) la derrota más contundente que vive la universidad en tanto institución social encargada de buscar la verdad. Parece que la educación superior ha generado un debate de pares que escasamente ha sido democratizado socialmente con el pueblo. Sin duda, uno de los desafíos prioritarios de los sistemas de educación

superior es generar una pedagogía que concientice del rol que juega el conocimiento científico en el debate y la toma de decisiones que atañen a los problemas de las grandes mayorías. No defender el rol de la ciencia en el debate público es también parte del asedio a la democracia. La difusión o la popularización de la ciencia debe ir más allá de la publicación en revistas indexadas que cada vez leen menos personas y trasladarla al debate social y público. Esto implica no solo difundir la investigación, sino que debe ser una misión de la universidad y los procesos de investigación difundir la importancia del rol de la ciencia (en tanto proceso e incluso más allá de los resultados/descubrimientos) en el debate público y la deliberación democrática, y concientizar que las creencias identitarias o religiosas dogmáticas (respetando siempre cualquier culto individual) como argumento público conducen a la imposibilidad de que prospere una democracia dialógica. Pero esto también implica que la investigación científica y el desarrollo tecnológico intervengan en los problemas comunes de todos y todas; es decir, estos deben acompañar activamente las discusiones públicas. En este marco, el reto consiste en hacer secular el contenido del debate en la democracia. Este quizá es uno de los mejores antídotos para que no prosperen los proyectos fascistas.

Más allá de que siempre hay que tener una postura crítica del proceso epistémico científico/tecnológico (dado que este es un medio, no un fin, y su impacto está en función de la economía política de sus objetivos), es claro que en el debate por la verdad en la ciencia existe siempre la posibilidad de deliberar; en el lado opuesto, la fe religiosa es indiscutible porque es un dogma. La ciencia debe buscar una transformación epistémica para consolidarse como una ciencia democrática, lo cual implica -entre otras aristas- trascender procesos epistemicidas. Si bien esto no está en discusión, tampoco está en discusión que la democracia no puede prosperar si el debate público es dogmático.

Lo mencionado nos convoca a un punto fundamental sobre el rol que juega el proceso de investigación científico-tecnológica y la universidad en los procesos de crisis y transición capitalista, que serán analizados en la siguiente sección.

## 7.1. Universidad e ideología

Algo que parece fundamental recordar en el debate sobre el rol de la ciencia y el papel pedagógico que juegan las universidades en el proceso educativo es que la ciencia busca ser objetiva, pero jamás es neutral. Y se dice “busca” como pretensión, dado que la verdad está en disputa, más aún cuando los avances de la física cuántica sugieren que la observación interviene en el objeto observado. No obstante, el proceso científico toma nota incluso de tal evidencia para incorporarla en el proceso de descripción y análisis al momento de indagar la verdad.

La búsqueda de generar procesos sistemáticos y repetibles de búsqueda de la verdad no implica que el proceso científico sea neutro. La no neutralidad del proceso investigativo parte desde la pregunta de investigación. En la pregunta de investigación ya hay un posicionamiento político, siempre. No es lo mismo preguntarnos “*si la tierra es plana*” a que indagemos *el impacto de las petroleras en los ecosistemas amazónicos*.

Ahora bien, en este marco también es indispensable la discusión sobre el fin mismo del proceso educativo de las instituciones de educación superior.

Quizá aquí es necesario hacer la diferenciación que usualmente no se realiza entre lo que es la universidad periférica respecto de las universidades instaladas en los países centrales. La universidad en la región tiene su origen en el proceso de colonización ligado a la Iglesia y a la realeza. La colonización fue la base que permitió la estructuración del capitalismo. Sin colonia no habría sucedido la acumulación originaria. Se podría señalar que tal génesis marca la trayectoria de nuestras universidades, incluso hasta el presente. La universidad nace colonial, patriarcal, y es parte fundamental del proceso de engranaje de la acumulación del capital en el sistema global.

Esto ha marcado incluso los momentos de transformaciones dentro del sistema universitario. En el primer momento, la universidad sirvió para legitimar el proceso de colonización. La formación de la elite social era indispensable para configurar y legitimar la elite política. Una universidad para aprender a mandar, generadora de estatus social. En un segundo momento, la reforma de Córdoba es un hito porque es parte del proceso de búsqueda de la separación de la Iglesia del Estado, aunque también es parte de la disputa por la configuración

de otra elite en Argentina.<sup>23</sup> En el tercer momento, la universidad busca su democratización y masificación a través de la gratuidad. Es un momento clave porque marca el sentido de la universidad en tanto formadora de profesionales en el marco de un periodo de interpelación intelectual regional que ve al desarrollo como productor del subdesarrollo (Frank, 1967). Bajo estas nuevas lecturas surgió el paradigma de la sustitución de importaciones a través de procesos de industrialización que debían implementar los modelos productivos de los países de la región. La misión de la universidad era clara en estas circunstancias: formar la fuerza de trabajo (profesional) para el proceso de industrialización buscado. La hipótesis era que la industrialización generaría distribución y por lo tanto democratización de la sociedad. No obstante, los teóricos de la dependencia marxista demostraron la falacia de tal hipótesis, al analizar las economías periféricas de la región en el marco del intercambio desigual mundial (Marini, 1977).

Con la llegada del neoliberalismo, el fin de la universidad ya no estaba en la formación estudiantil principalmente, sino que las instituciones de educación superior pasan a ser un fin en sí mismas al buscar constituirse como negocio (por cierto, muy rentable), y dar nacimiento a lo que se ha denominado la universidad-empresa. No es casualidad que en la región se impuso un proceso de explosión exponencial de universidades privadas y los sistemas de educación superior públicos hayan pasado a ser arancelados. Se podría decir que las instituciones de interés común en este momento son parte de la recuperación de la tasa de ganancia; en donde la universidad es una de estas. En este marco, la universidad no cumplía un rol de transformación, como se esperaba incluso en el momento de industrialización, sino que estaba articulada a las necesidades de mercado. La llegada del neoliberalismo a América Latina implicó la muerte de la autonomía universitaria y el nacimiento de la heteronomía de mercado.

En los últimos dos momentos, el rol de la universidad estaba ligado a la estrategia de acumulación (desarrollo capitalista): ya sea en el modelo de industrialización (sustitución de importaciones) o en el de liberalización de la economía del comercio y de los mercados de capitales (neoliberalismo).

Se puede sostener que el objetivo de la universidad y de las instituciones de educación superior, incluso si se tiene por objetivo su articulación con un proyecto de desarrollo alternativo al neoliberal (lo cual escasamente se escucha en el debate democrático ni tampoco en el universitario), debe poner el centro de atención también en la formación de ciudadanos demócratas y de seres humanos plenos (preocupados por el otro, la otra y la naturaleza).

En este marco, es fundamental discutir el rol político de la universidad. Los proyectos neoliberales de la tercera ola vienen con tintes fascistas. Esto implica, por una parte, que reproducen la agenda neoliberal (es decir, no son proyectos autónomos a los intereses endógenos soberanos de las realidades nacionales de nuestros países), empero en el marco de la crisis de acumulación, no pueden convivir con la democracia, por lo cual son proyectos autoritarios de corte fascista, en algunos casos, como fue el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil o el actual gobierno de Javier Milei en Argentina. El proyecto neoliberal –en la región– es anticientífico no por un tema moral sino porque en su núcleo defiende un modelo dogmático de ventajas comparativas en donde la región solo debe estar orientada a tener una estrategia de desarrollo primario-exportadora (ya sea de alimentos o recursos naturales) y porque por principio el Estado no debe intervenir en la economía. Como hemos dicho, el asedio a la democracia viene de la mano del asedio a la ciencia y a la universidad.

Que lleguen los proyectos de derecha a los gobiernos implica imponer un rol subsidiario a la universidad. Bajo los proyectos políticos autoritarios neoliberales, la universidad no tiene un rol ni para el desarrollo de la fuerza productiva altamente profesionalizada ni para desarrollar una economía con valor agregado, ni para la democracia. Todo lo contrario, las universidades, las agencias de ciencia y los investigadores son una amenaza que hay que deslegitimar. En este sentido, la condición de posibilidad de un cambio en el patrón de especialización pasa por el sentido que se otorgue a la democracia en los procesos electorales y políticos en una perspectiva más amplia.

Bajo este debate, valdría preguntarse cuál es el rol que está jugando la universidad en la formación ideológica. En términos objetivos, podríamos preguntarnos por quién vota la comunidad universitaria a nivel regional.

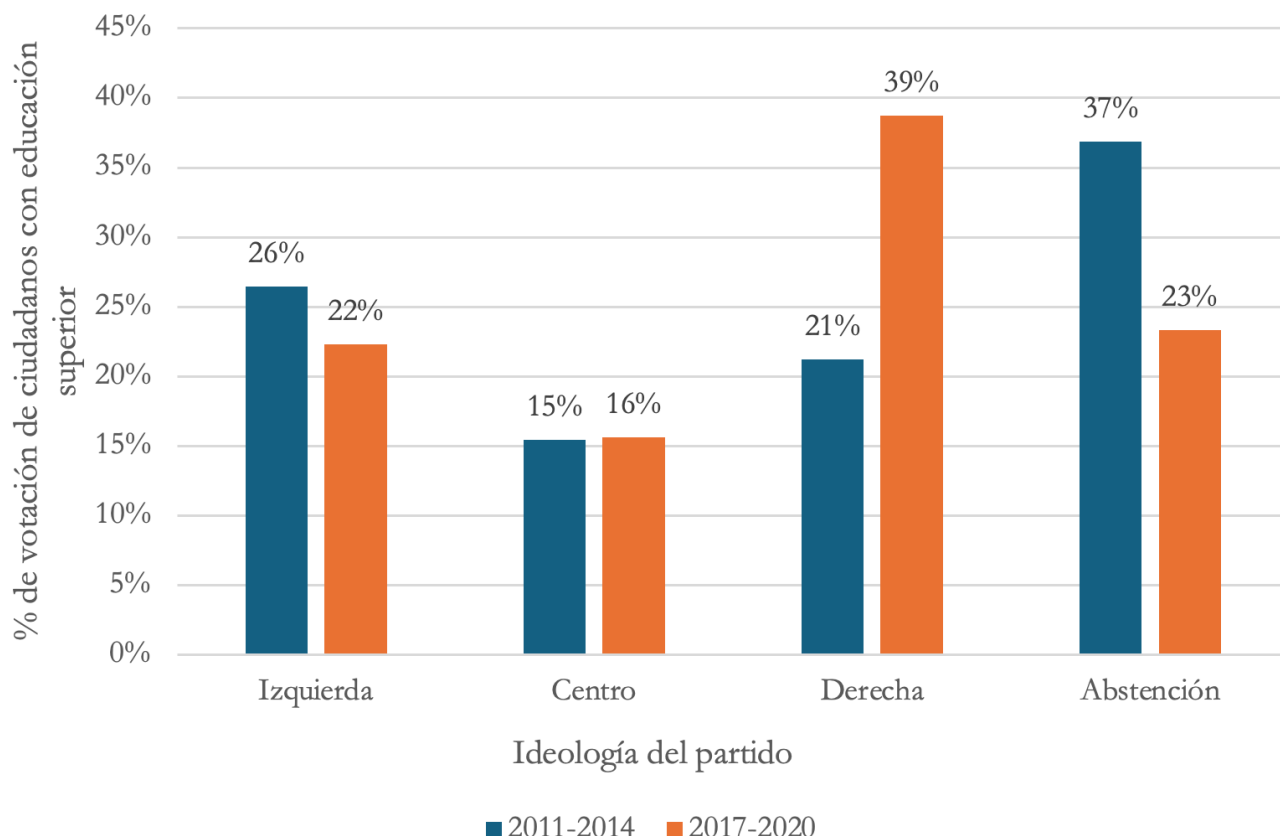
Utilizando la encuesta de valores del World Values Survey [WVS], se confirma una tendencia que debe llamar la

---

<sup>23</sup> Regresaré sobre el tema de la autonomía universitaria más adelante.

atención. Como se puede observar, al iniciar la segunda década del nuevo milenio los ciudadanos que pasaron por la universidad se inclinaban más por gobiernos de ideología de izquierda. Al finalizar la segunda década de los 2000, la tendencia se revirtió. Los ciudadanos con instrucción universitaria votan más por los partidos con ideología de derecha que a partidos de izquierda. En efecto, mientras entre el 2011-2014, de los ciudadanos universitarios el 26 % votaba por partidos de izquierda y 21 % por la derecha; entre el 2017-2020 el 22 % votaba por los partidos nacional-populares progresistas y el 39 % por partidos de ideología conservadora neoliberal. Es decir, en menos de una década, los universitarios de la región dejaron de apoyar en un 5 % a la izquierda, pero incrementaron su apoyo en un 17 % a la derecha. Formar, (anti)ciudadanos de derecha que no creen en la democracia ni en la igualdad es educar para la propia muerte de la ciencia y la universidad, en el caso de América Latina y el Caribe.

Gráfico 13. Voto de estudiantes con educación superior en América Latina, 2011-2020



*Nota: La agrupación ideológica no es autodeclarada, sino que se registra en función del partido político por el cual votó.*

*Fuente: Elaboración propia con base en World Values Survey (2011-2014, 2017-2020).*

Es importante señalar que parece que hay un posicionamiento más político de los universitarios durante la década, dado que caen significativamente los que a principios del 2010 se abstuvieron por votar un partido político de izquierda, centro o derecha. Al finalizar la segunda década, la abstención cayó 14 puntos porcentuales, aunque todo da a entender que eligieron candidatos de la derecha.

A su vez, se desprende que si se toman en cuenta todos los niveles educativos la tendencia evidencia un incremento de 9 puntos porcentuales de apoyo a los partidos de la derecha, en tanto que el apoyo a los partidos con ideología de izquierda se mantiene prácticamente constante durante la última década.

Resulta interesante ver que la tendencia encontrada en el agregado de lo que sucede en América Latina y el Caribe es opuesta a la que señalan Piketty y Cagé (2023) en su última obra monumental: *Une histoire du conflit politique: Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022*. La pareja francesa encuentra que los ciudadanos con educación superior, con servicios básicos satisfechos y con ingresos modestos tienden a inclinarse hacia la

izquierda, reemplazando en cierta medida el histórico voto obrero de izquierda. Por otro lado, la extrema derecha ha ganado respaldo entre los trabajadores obreros en zonas rurales. En la lógica de clase geosocial, los autores demuestran que la izquierda congrega votos de sectores populares metropolitanos, mientras que la extrema derecha capta significativamente el voto rural precarizado.

Lo señalado debe estar en el centro de la discusión sobre el rol de la universidad; más si se toma en cuenta el rol de la universidad en América Latina y el Caribe. Si se analiza la relación de la universidad con los procesos de desarrollo capitalista se podría decir que la universidad en la región ha jugado un rol estratégico en la reproducción del capitalismo mundial. Históricamente jugó un papel para la legitimación del colonialismo y del capitalismo; fue instrumento de la formación de la elite criolla para legitimar el proceso de independencia; incluso sirvió como medio para la formación de profesionales para un proceso de industrialización que nunca fue pensado por fuera del sistema capitalista (en el lado más crítico, era pensar la acumulación desde el Sur Global, pero para ser parte del centro del capitalismo global y dejar de ser periferia).

Actualmente, más allá de países específicos, la mayoría del sistema de educación superior en la región se ha privatizado y mercantilizado (objetiva y subjetivamente). En este sentido, las universidades son parte de una industria ligada al sistema capitalista. En los países periféricos, las universidades periféricas siguen jugando un rol de *headhunter* (cazador de cerebros) que permite el subsidio del pago del proceso de formación a nivel de licenciatura para luego ser cooptados por las universidades del centro global. Es demandante de las industrias editoriales de difusión, siendo parte de una cadena global extractiva de conocimiento y de capital. Incluso es parte de un sistema que financia la investigación de grandes transnacionales a través de investigaciones que son realizadas en universidad públicas y que después son apropiadas por capitales internacionales.<sup>24</sup> En otras palabras, desde el punto de vista del desarrollo la universidad periférica ha jugado un rol prosistémico en el marco de la acumulación capitalista global. Solo marginalmente se constituyó en un agente que agregó valor al aparato productivo, buscando modos de acumulación alternativos.

Ahora bien, la universidad en América Latina ha jugado un rol fundamental en la democracia de nuestros países y en los procesos de resistencia. Haciendo una separación ficticia entre lo político y económico, poniendo en blanco y negro, la universidad ha sido socialmente más importante en los procesos democráticos que en el desarrollo económico transformador del modo de producción. En el proceso formativo se buscó generar estudiantes críticos, que luego buscaron la transformación de la misma universidad para que juegue otro rol en la sociedad. No es fortuito que los gobiernos de derecha o los militares en las dictaduras lo primero que buscan silenciar sean las universidades. Así, por ejemplo, la reforma de Córdoba abogó por la autonomía universitaria, lo que significaba que las universidades debían ser independientes del control gubernamental y de intereses externos, como la Iglesia o grupos políticos. Esta reforma promovió la libertad académica, asegurando que profesores y estudiantes pudieran expresar sus opiniones y realizar investigaciones sin temor a la censura o represión por parte de las autoridades. Implantó la transparencia de la selección de profesores a través de concursos de oposición y planteó la denominada extensión universitaria, demandando una universidad cuyo fin sea también social. Tampoco podemos olvidar a los movimientos estudiantiles de los sesenta y setenta, siendo el más relevante el movimiento estudiantil de 1968, que culminó en la masacre de Tlatelolco y que generó un aumento en la conciencia sobre los derechos humanos y la necesidad de reformas democráticas. Es fundamental recordar en el mismo sentido, el rol que jugaron académicos y estudiantes en la defensa contra las dictaduras de la región. Durante las décadas de dictaduras militares que afectaron a varios países de América Latina en los años setenta y ochenta, muchos académicos y científicos se convirtieron en defensores de los derechos humanos y la democracia. Participaron en la denuncia de violaciones de derechos humanos y en la resistencia intelectual contra regímenes represivos. Imposible no traer, a la mesa de debate, el 16 y 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, Argentina, “La noche de los lápices”, día en el cual estudiantes de colegios secundarios fueron secuestrados y desaparecidos por protestar en contra de la dictadura que vivía el país y reclamar por el boleto estudiantil. En Chile, por ejemplo,

---

<sup>24</sup> Un buen ejemplo de esto es lo señalado por la directora del CONAHCYT de México quien declaró: “detectamos transferencias millonarias al sector privado vía Conacyt. Por ejemplo, a través de fideicomisos se transfirieron +15 mil millones de pesos, y a través del programa PEI se transfirieron +26 mil millones de pesos, dando un total de +41 mil millones. 44 % de todos los recursos de Conacyt fueron transferidos al sector privado. Algunas de las empresas nacionales y transnacionales beneficiadas son: IBM, Monsanto, Kimberly Clark, Femsa, Bayer, Volkswagen y Mabe. Este hecho resulta difícil de justificar en términos científicos”. <https://twitter.com/ElenaBuylla/status/1319128302183960576>

los estudiantes universitarios jugaron un papel crucial en la oposición al régimen de Augusto Pinochet y en la lucha por la restauración de la democracia. El movimiento estudiantil chileno también ha estado involucrado en la defensa de la educación pública y la equidad social, hasta tal punto que el actual presidente de Chile nació de tales luchas sociales.

La universidad en América Latina no debe ser evaluada únicamente por su rol en el desarrollo económico de los países. Debe ser evaluada por el rol que ha jugado en la democracia de nuestros pueblos. Sin duda, en este marco resulta preocupante que en el estudiante universitario o académico se esté instaurando una ideología de derecha, conservadora, antiigualitaria y antidemocrática. La universidad ha sido el sostén de un posicionamiento público crítico sobre las condiciones sociales, políticas y ambientales de nuestros pueblos. El avance de la agenda de privatización de las universidades, inclusive a través del arancelamiento o de las currículas de las carreras en las universidades públicas, está restando valor –que no se mide en dólares– al rol histórico que ha jugado la universidad latinoamericana en la región.

Ahora, si bien parece que la ideología de los ciudadanos que están o han pasado por la educación superior se direcciona hacia la derecha, es necesario marcar la diferencia según la disciplina. En una investigación realizada en México se detectan patrones específicos cuando se analiza ideología según disciplina académica. Así se tiene que las ciencias fundamentales y las ingenierías tienden a ser una comunidad más de derecha, en tanto que las facultades del área de salud, de izquierda (Ramírez, Irigoyen y Guijarro, 2023). Ahora bien, cuando se estudia lo que sucede en las ciencias sociales y las humanidades, los resultados llaman la atención. La investigación demuestra que –en el 2022– si el académico o estudiante pasó por las aulas de ciencias sociales la probabilidad de tener ideología (valores) de derecha crece. Sucede todo lo contrario con las humanidades, en donde si el ciudadano estudió alguna carrera ligada a las artes, la filosofía, historia y afines su ideología tiende a ser de izquierda, con valores correspondientes a estar a favor de la igualdad, de la democracia, del Estado de derecho, etc.

Lo que sucede en las ciencias sociales es una alerta que debe ser problematizada. La cooptación ideológica en las ciencias sociales se podría estudiar a partir de indagar las currículas de las carreras. En la investigación mencionada sobre México se hace un *zoom* de las 81 facultades de economía, y los hallazgos dejan claro uno de los argumentos potenciales de por qué la educación universitaria podría estar formando con mayor probabilidad a ciudadanos con valores de derecha. Basándose en los registros del Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], que incluyen tanto instituciones públicas como privadas se estudiaron las mallas curriculares de los departamentos de economía. Los resultados muestran una marcada tendencia hacia la enseñanza neoclásica la cual está presente en el 69 % de las escuelas de economía, en contraste con el 17 % que sigue un enfoque schumpeteriano-keynesiano. Solo un 11 % y un reducido 2 % optan por enfoques de Economía crítica y heterodoxa, respectivamente. Al enfocarnos en las universidades públicas, encontramos que un 39 % mantiene la enseñanza neoclásica como doctrina dominante, mientras que el 34 %, 22 % y 5 % corresponden, respectivamente, a enfoques schumpeterianos-keynesianos, de Economía crítica y de Economía heterodoxa (Ramírez, Irigoyen y Guijarro, 2023).

*Tabla 10. Clasificación de Escuelas y Facultades de Economía (públicas y privadas) en México por doctrina económica*

| Doctrina económica                                                    | Número de Escuelas y facultades | Porcentaje |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Economía neoclásica</b>                                            | 56                              | 69         |
| <b>Economía schumpeteriana-keynesiana</b>                             | 14                              | 17         |
| <b>Economía crítica</b>                                               | 9                               | 11         |
| <b>Economía heterodoxa</b>                                            | 2                               | 2          |
| <b>Total de Universidades y Carreras de Economía a nivel nacional</b> | 81                              | 100        |

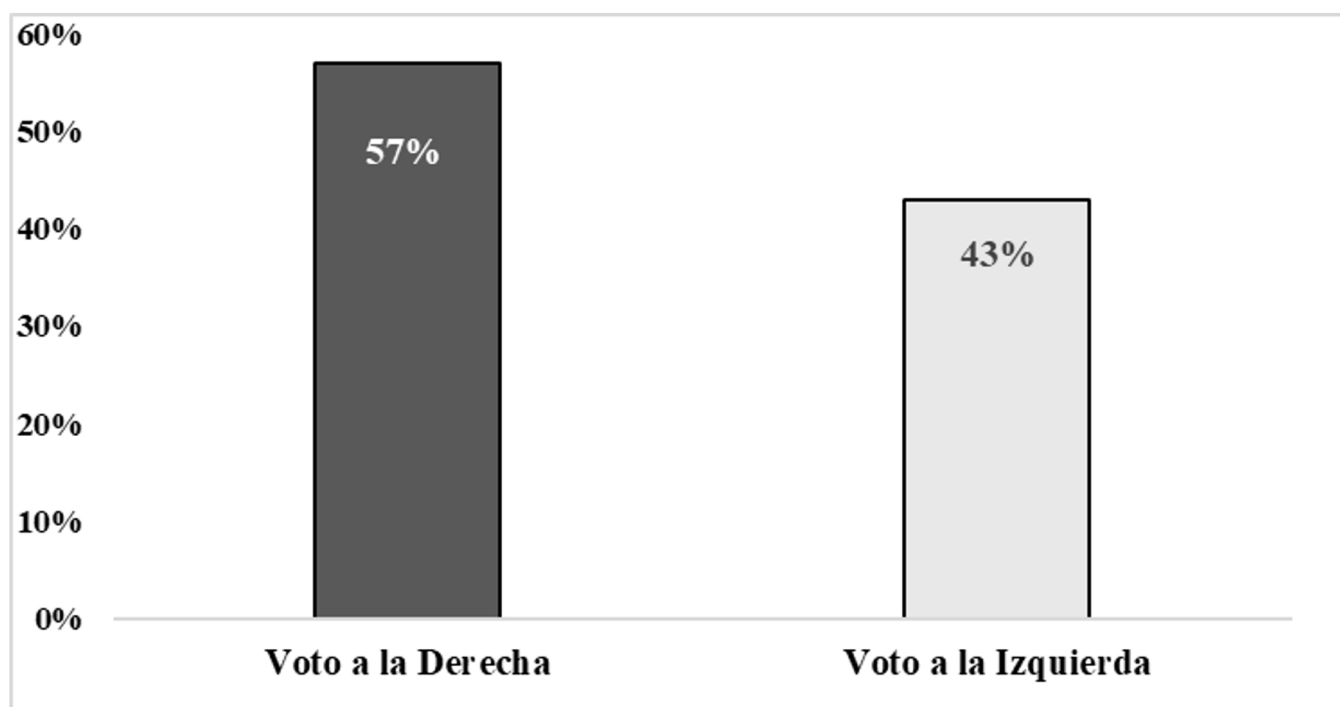
Fuente: Ramírez, Irigoyen y Guijarro (2023). Clasificación propia tomando en cuenta el listado de las Facultades, Escuelas y Carreras de Economía en México registradas en el Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO].

Si bien no se puede extrapolar lo que sucede en México al resto de países de la región, por lo cual resultaría importante investigar si esta tendencia es similar o difiere, los resultados obtenidos sobre las humanidades nos permiten retomar una reflexión desde una perspectiva epistemológica del rol de estas en el quehacer científico y democrático.

## 7.2. Democracia y movimientos estudiantiles universitarios<sup>25</sup>

A lo largo de este documento se ha podido constatar que existe un cambio ideológico en los ciudadanos que votan por los proyectos de izquierda. Hoy en día, la evidencia parece corroborar que haber pasado por las aulas tiende a respaldar con mayor probabilidad votar hacia la derecha. Si bien es más rigurosa la conclusión que se desprende del modelo econométrico anteriormente presentado, en términos descriptivos se puede observar que, de los egresados universitarios de la región, un 57 % apoyó en las últimas elecciones de sus respectivos países a la derecha, mientras que un 43 % a los partidos políticos de izquierda.

Gráfico 14. Egresados con título universitario y orientación ideológica

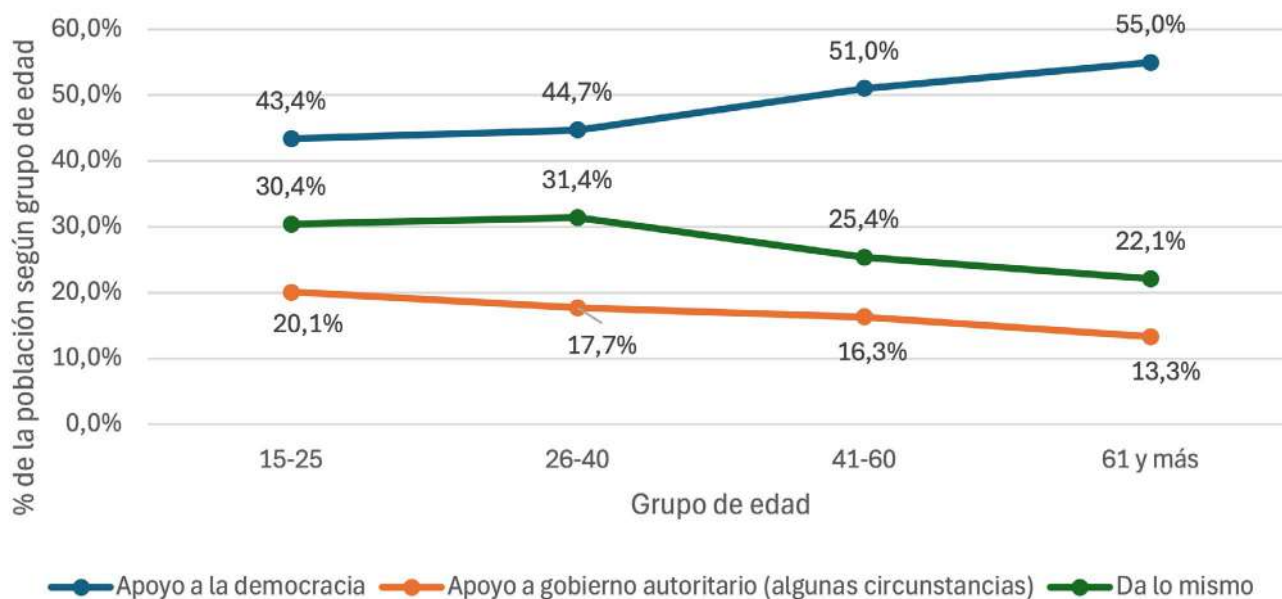


Fuente: Latinobarómetro (2023). Elaboración: propia.

Esta tendencia viene de la mano de un problema aún mayor, que afecta a la juventud en general y que incluye a los adultos menores de 40 años. En efecto, se puede apreciar que, a menor edad, menor apoyo a la democracia. Pero no solo eso, los jóvenes son el grupo etario que más apoya a un gobierno autoritario en caso de que sea necesario. Siguiendo la misma línea, también es el grupo de edad al que más le es indiferente la democracia. Si sumamos el número de jóvenes a los que les da lo mismo si se vive en democracia o en autoritarismo y aquellos que apoyarían a dictaduras nos percatamos que estos exceden a los que defienden la democracia. Igual situación sucede con los ciudadanos de la región que tienen entre 26 y 40 años.

<sup>25</sup> Esta sección fue trabajada por R. Ramírez, J. Zaruma y S. Irigoyen, para este informe.

Gráfico 15. Apoyo a la democracia por grupo de edad



Fuente: Latinobarómetro, 2023; Elaboración: Propia

Si analizamos en términos temporales, podemos percatarnos que los que más dejaron de apoyar a la democracia son los jóvenes y los adultos menores de 40 años. En diez años, aproximadamente una de cada cinco personas que son jóvenes o menores de 40 años dejó de apoyar a la democracia.

Ahora bien, retomando el debate sobre la relación entre universidad e ideología, debe quedar claro que esta tendencia no es la misma en todos los países. Así, por ejemplo, si hacemos un análisis de las últimas votaciones en Argentina y Colombia en donde salieron elegidos Javier Milei y Gustavo Petro, respectivamente, podemos encontrar que hay claras diferencias de los patrones de comportamiento. En lo que respecta al debate universitario, se puede corroborar que el ser universitario implicó que se apoye electoralmente a Gustavo Petro. Todo lo contrario sucedió en Argentina. Una persona con nivel de formación universitaria en Argentina votó con mayor probabilidad a Javier Milei. Esta tendencia se corrobora si se amplía hacia la juventud. Mientras a Gustavo Petro la juventud le apoyó, no sucedió lo mismo con Sergio Massa, el candidato del peronismo, dado que los más jóvenes apoyaron a Javier Milei.

No obstante a lo señalado, si bien parecen soplar vientos hacia la derecha en el apoyo de los ciudadanos que han pasado por las aulas, existe un grupo no menor de estudiantes y académicos que se moviliza constantemente en la región y que juegan un rol de resistencia a los procesos neoliberales y autoritarios. Realicemos un “zoom” sobre el rol que han jugado los movimientos universitarios en la democracia de nuestra región.

### 7.2.1. Movimientos universitarios en el último sexenio de la región

La universidad en América Latina ha jugado un rol fundamental no solo en las estrategias de desarrollo de cada país sino en los mismos procesos democráticos. Para ser específicos podríamos decir que aunque su papel en el sistema de acumulación contemporáneo es, al mismo tiempo, económico y político, es posible distinguir idealmente entre su tarea económica y su tarea política. En este sentido, las aulas universitarias cumplen un rol crucial como generadoras de resistencias vitales para el mantenimiento de las democracias y la defensa de derechos. Este rasgo característico de la universidad periférica la posiciona como una institución de vanguardia en la defensa de las democracias latinoamericanas. De hecho, la impronta de estas universidades reside en su carácter político-democrático, que emergió con la Reforma de Córdoba de 1918. Este movimiento promovió un mejoramiento cualitativo y una ampliación cuantitativa de la democracia y sus instituciones, impulsando una reforma estructural del Estado y la sociedad al demandar la secularización, el cogobierno, la autonomía y la

libertad de cátedra (Donoso, 2023). La fuerza del movimiento reformista dio lugar a levantamientos estudiantiles que resultaron constitutivos para la región (Hermo y Pittelli, 2011; Tünnermann, 2018).

La historia no ha cambiado. Los movimientos universitarios siguen jugando un rol significativo en el debate público. De una investigación realizada para este documento, hemos identificado 178 movilizaciones estudiantiles de alcance nacional que han tenido lugar en 18 países de América Latina entre 2018 y principios de 2024. Recopilamos la información de, al menos, las diez movilizaciones más grandes por país en términos de duración e impacto. Estas movilizaciones se agrupan en siete categorías: 1) democracia y derechos humanos; 2) defensa de la autonomía; 3) financiamiento; 4) acceso a la educación; 5) infraestructura y condiciones universitarias; 6) crisis económica, política y social; y, 7) género y diversidad.

*Tabla 11. Movilizaciones estudiantiles por categoría, 2018-2024*

| <b>Categoría</b>                                           | <b>Porcentaje</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Democracia y derechos humanos</b>                       | 37,38             |
| <b>Crisis económica, política, social y socioambiental</b> | 17,51             |
| <b>Financiamiento de la educación superior</b>             | 12,99             |
| <b>Infraestructura y condiciones de las Universidades</b>  | 11,86             |
| <b>Defensa de la autonomía universitaria</b>               | 9,6               |
| <b>Género y diversidad</b>                                 | 7,34              |
| <b>Acceso a la educación superior</b>                      | 3,38              |

Fuente: Elaboración propia a partir del levantamiento en medios de prensa de cada país.

Resultan evidentes al menos tres cuestiones. Primero, a sabiendas de que los movimientos estudiantiles son una fuerza organizada que se establece para romper o mantener dinámicas de poder desde la universidad, según Gil y DeFronzo (2006) los movimientos estudiantiles latinoamericanos se caracterizan por cuestionar más las estructuras de poder. En ese sentido, las organizaciones estudiantiles –no todas– suelen exigir reformas para la democratización de los sistemas universitarios y políticos, más allá de luchar por las demandas que, en teoría, contemplan sus funciones básicas: docencia, investigación y extensión. En ese sentido, identificamos que las universidades periféricas no protestan únicamente por la educación, sus reclamos tienden a vincularse a demandas más amplias siempre relacionadas con la democracia y derechos sociales.

De hecho, se puede afirmar que la mayoría de las movilizaciones que inician enmarcadas en reivindicaciones sectoriales terminan en demandas sociales cuyos ejes transversales, estos últimos cinco años, han sido democracia y género. Es el caso de Paraguay (2021) y Guatemala (2022), donde el cuerpo estudiantil exigió transparencia en los procesos democráticos de las universidades; o en Nicaragua (2018), donde estudiantes exigieron explícitamente la democratización del país. En Chile (2019-2020), el estallido social demandó la realización de un nuevo pacto social de convivencia. O también, la movilización por la Educación No Sexista en Chile (2018) que exigió una educación no sexista y protocolos para combatir la violencia de género dentro de instituciones de educación superior cuestionando las estructuras de poder al interior de estas. Sucedió también con la movilización por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina en 2020. La exigencia democrática fue clara: que se garanticen los derechos reproductivos y autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos (López y Loza, 2021). Algo similar sucedió en México, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Uruguay.

Lo particular de las universidades como espacio de organización y pronunciamiento de los intereses colectivos es que abren siempre los marcos de disputa en los que fueron constituidos para sumarse a la defensa de la democracia. Esto conlleva al segundo punto: se debe considerar el momento social en que estas se (re)organizan y constituyen. Las movilizaciones estudiantiles tienden a intensificarse frente a escenarios de crisis políticas y económicas. Es el caso de Argentina (2018) cuando estudiantes se movilaron en contra del acuerdo con el FMI que habría causado, entonces, un recorte al presupuesto de las universidades. Sucedió lo mismo en octubre 2019 en Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno, los movimientos estudiantiles se sumaron a las protestas que fueron lideradas por el movimiento indígena. En Perú, durante el gobierno de Manuel Merino (2020), las

organizaciones estudiantiles se movilizaron en defensa de la democracia. Por otro lado, pero sobre el mismo eje, en Colombia (2021) protestaron por la reforma tributaria, así como en Chile durante el estallido social (2019) que inició en contra del alza del transporte público. También en República Dominicana (2019) las y los estudiantes se sumaron a las protestas en contra de la privatización del agua, en un contexto de crisis económica, política y social. En resumen, los momentos de crisis tienden a activar los movimientos estudiantiles que se suman a protestas más vastas, incluyendo aquellos derechos que afectan directamente a los estudiantes.

Un tercer punto que resulta ineludible mencionar es que los movimientos estudiantiles fungen como espacios en los que se articulan demandas y se activan o intensifican protestas sociales. Las universidades en tanto agentes políticos habilitan los espacios de discusión e identidad crítica frente al contexto político, económico y social. Es importante precisar en aquello considerando que la égida neoliberal ha logrado configurar subjetividades que constituyen nuestras formas de percepción de la existencia. A decir de Jorge Alemán (2014), el neoliberalismo es una forma de pensar; una racionalidad que opera en nuestras relaciones sociales y, por tanto, se reproduce socialmente. Como se pudo evidenciar anteriormente, la formación universitaria puede estar tendiendo hacia el espectro neoliberal (derecha). En otros términos, las universidades están reproduciendo *habitus* y *ethos* individualizantes bajo el paradigma de la educación basada en la competencia, pero, además, en la influencia (control) epistemológica establecida en las currículas académicas.

No obstante, vemos que los movimientos estudiantiles tienden a formar parte de movilizaciones cuya exigencia es la democracia. Es importante inferir bajo esta lógica que las universidades logran la conjunción de demandas y la activación de protestas; empero, existe una importante proporción de la población estudiantil que se encuentra despolitizada o que incluso se opone a las demandas sociales de los sectores históricamente marginados. Independientemente de ello, la evidencia indica que las universidades logran establecerse en momentos de crisis como bien común donde se articulan demandas para el ejercicio de las resistencias que sostienen, incluso, los mínimos vitales de la democracia, como sucedió en Ecuador, Chile y Colombia (2019). En la voz de Guzmán Concha, son “un campo de conexión entre la política subterránea y la dominante” (2017, p. 2). Sin embargo, el acompañamiento objetivo y subjetivo del neoliberalismo está reconfigurando las formas en que operan los movimientos estudiantiles, pues cambió también la universidad.

Lo anterior puede verse en la tabla 11, donde la mayor proporción de movilizaciones durante el periodo señalado, caracterizado por la contrarreforma neoliberal en la mayoría de los países, corresponde a la defensa de la democracia y los derechos humanos (37 %). Estos datos permiten afirmar que la función de la universidad latinoamericana trasciende el proceso educativo formal y se expresa también como generadora de identidades y resistencias vitales. Para las y los estudiantes, ha sido urgente protestar contra el autoritarismo, las violaciones a los derechos civiles, la represión y la falta de garantías democráticas. Ejemplos claros son Chile, Colombia y Ecuador, donde los movimientos estudiantiles se centraron en la justicia social y la defensa frente al retroceso democrático.

Seguido de ello, los levantamientos vinculados a la crisis económica, política, social y ambiental que atraviesa la región (17 %) reflejan un clima de frustración ante la reducción de oportunidades laborales, la corrupción, el incumplimiento de los mandatos populares y las políticas de austeridad, las cuales han condicionado el desarrollo efectivo del proceso educativo. Por otra parte, las demandas relacionadas con el financiamiento y la autonomía universitaria (12,99 % y 9,6 %, respectivamente) siguen vigentes en la región debido a las tensiones entre los gobiernos y las universidades en torno a la gestión autónoma de los recursos y la reducción presupuestaria impuesta. La relación entre ambas categorías es clara: no existe una autonomía real sin recursos suficientes, y los recortes presupuestarios limitan la capacidad de las universidades para ejercer dicha autonomía. Ejemplos de esto fueron los recortes durante las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno (2019) y Guillermo Lasso (2021) en Ecuador, los cuales se mantienen bajo el mandato de Daniel Noboa (2024), y en Argentina con Javier Milei (2024), donde los recortes presupuestarios provocaron incluso un pronunciamiento por parte de 68 ganadores de Premios Nobel a favor de la ciencia y en contra de las políticas de ajuste.

Asimismo, las movilizaciones relacionadas con las condiciones materiales de la educación persisten, junto con las demandas sobre cuestiones de género y diversidad, lo que refleja una creciente preocupación por la equidad, la inclusión y la lucha contra la violencia de género. Es relevante insistir en que estas demandas no adoptan un enfoque sectorial, sino que se estructuran desde una perspectiva más amplia y social, que pone de relieve los problemas estructurales que enfrentan las instituciones educativas y la sociedad en general. Estas movilizaciones reivindican ejes transversales de las luchas sociales.

En términos generales, las universidades latinoamericanas dependen en gran medida del conocimiento producido en el Norte Global, lo que refleja patrones de subordinación económica y política. Esta dependencia estructural se manifiesta en los *rankings* globales, las limitaciones de financiamiento y el control externo sobre las políticas de investigación y educación. Sin embargo, las universidades también funcionan, ante todo, como espacios vitales de resistencia política y defensa de la democracia. Más allá de su función educativa, que es intrínsecamente política, las universidades están socialmente habilitadas para organizar y defender la democracia, el bien común y los derechos humanos, especialmente en contextos de crisis estructural como el neoliberalismo, cuyo ataque a la universidad se ha materializado mediante el debilitamiento de la autonomía a través del financiamiento, en muchos casos con tintes clientelares.

De hecho, la mayoría de las movilizaciones estudiantiles entre 2018 y 2024 (57 %) se centraron en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el rechazo a la crisis económica. Esto confirma que el rol emancipador de la universidad, a través de sus organizaciones estudiantiles, reside en la gestación de una conciencia social, es decir, en la creación de una identidad democrática que se coloca a la vanguardia de los derechos sociales.

Finalmente, los datos demuestran que las movilizaciones universitarias no son eventos aislados de los procesos democráticos ni de las contradicciones inherentes al actual modo de acumulación. Por el contrario, desafían las desigualdades en la distribución del poder en la sociedad y luchan por la democracia incluso cuando se ven debilitados los mínimos requeridos para su ejercicio. En otros términos, los movimientos estudiantiles latinoamericanos han actuado como *resistencias vitales* frente a la reestructuración neoliberal de la educación y a las tendencias autoritarias más amplias en la región. La defensa de los valores democráticos y de la autonomía educativa han sido temas centrales que movilizan al cuerpo universitario, posicionando a los estudiantes como agentes críticos en la lucha por la democracia.

### 7.3. Las “benditas redes sociales” y la democracia<sup>26</sup>

Construir una democracia radical implica desconcentrar: desconcentrar el poder, la economía, la palabra. Con el capitalismo cognitivo, parece que se refuerza la tendencia a monopolizar u oligopolizar la palabra.

La concentración de medios en el contexto del capitalismo digital ha reforzado estructuras de poder en detrimento de la pluralidad informativa y la calidad democrática. Esta concentración no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido nuevas dimensiones con la irrupción de conglomerados digitales globales como Meta, YouTube, TikTok y X, que controlan el mercado publicitario y las infraestructuras de información. Esta situación permite a estos actores ejercer un control casi absoluto sobre qué noticias son visibles y cómo se distribuyen, consolidando aún más su influencia sobre los procesos políticos y sociales.

En México, este fenómeno se refleja en el histórico duopolio de Televisa y TV Azteca, que han mantenido el control de la televisión abierta desde hace décadas, bloqueando la competencia y favoreciendo a las elites políticas. Ambas empresas se han expandido al ámbito digital, fortaleciendo su control sobre los flujos de información. Además, en dicho país, 11 familias controlan más de la mitad de los medios influyentes, lo que demuestra un mercado mediático altamente concentrado y politizado. Este patrón se repite en Argentina, donde el Grupo Clarín ha mantenido su hegemonía desde la década de los noventa, resistiendo activamente iniciativas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009. En Brasil, el Grupo Globo ha sido un actor clave en la manipulación política, como en el *impeachment* de Dilma Rousseff. Otros países como Colombia, Perú y Ecuador también sufren de altos niveles de concentración mediática. En Perú, la dictadura de Fujimori cooptó los principales medios, consolidando la concentración mediática en manos de unas pocas familias. En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 intentó democratizar el espacio mediático, pero fue resistida por los grandes conglomerados.

---

<sup>26</sup> Esta sección se basa en el artículo “Democracia fake: Capitalismo digital, comunicación y esfera pública” de J. Atilano, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

El capitalismo digital ha permitido que estos conglomerados tradicionales se expandan hacia plataformas digitales y servicios de internet, profundizando su control sobre la información y limitando aún más la diversidad de voces. Este sistema de concentración mediática está sostenido por la precariedad laboral de los periodistas y la censura impuesta por las elites políticas y económicas, lo que perpetúa un sistema mediático excluyente y dominado por las elites.

El capitalismo digital facilita la manipulación de la opinión pública y la desinformación, afectando particularmente a los gobiernos democráticos y los movimientos sociales de izquierda. Las corporaciones tecnológicas transnacionales, al monopolizar el flujo de información, perfilan usuarios a través de la recopilación masiva de datos personales, diseñando campañas de propaganda y desinformación dirigida. Un ejemplo es la campaña masiva en WhatsApp contra Fernando Haddad y Dilma Rousseff durante las elecciones brasileñas de 2018, que incluyó acusaciones falsas de corrupción.

El uso de *bots* y *trolls* amplifica estos mensajes, creando tendencias artificiales y manipulando el debate público. Ejércitos de *bots* se han empleado en elecciones mexicanas, como en 2012 y 2018, para atacar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el *microtargeting* permite la segmentación de mensajes políticos personalizados, explotando miedos y emociones para influir en votantes, como hizo Cambridge Analytica.

Los algoritmos de las plataformas digitales priorizan contenido sensacionalista que genera más interacciones, amplificando discursos de odio o polarizantes, que fragmentan el debate público. Además, se señala el uso de vigilancia masiva mediante tecnologías como el *software* Pegasus en México, empleado para espiar a periodistas y activistas. La explotación de datos sin consentimiento refuerza las estructuras autoritarias y debilita los derechos fundamentales. Las plataformas también ejercen censura arbitraria, afectando a voces críticas y movimientos sociales, como ocurre en Venezuela con los bloqueos a los sitios *web*.

Las brechas digitales existentes en la región perpetúan la exclusión de sectores vulnerables, como comunidades indígenas y rurales, haciéndolos más susceptibles a la desinformación. Además, el acoso en línea dirigido a mujeres y activistas refuerza las dinámicas de opresión y violencia digital. La cooperación entre gobiernos autoritarios y corporaciones tecnológicas para implementar vigilancia y censura también amenaza los derechos humanos en la región.

En el marco de lo señalado, surgen las guerras sucias por la desinformación. Las campañas de desinformación han sido utilizadas de manera sistemática para deslegitimar a los gobiernos progresistas en Latinoamérica, especialmente aquellos que han implementado políticas de justicia social y soberanía económica. Estas campañas, que mezclan tácticas digitales, mediáticas y legales forman parte de un esfuerzo mayor para restaurar el *statu quo* neoliberal en la región. En lugar de golpes de Estado tradicionales, hoy se emplean formas más sutiles y sofisticadas de intervención, adaptadas al contexto del capitalismo digital, donde las plataformas sociodigitales y los medios corporativos juegan un rol crucial en la manipulación de la opinión pública.

Un ejemplo clave de estas estrategias es el caso de Bolivia bajo el mandato de Evo Morales. Como líder cocalero defendió los usos tradicionales de la hoja de coca y se opuso a las políticas antidrogas impuestas por Estados Unidos. Esta postura lo convirtió en un blanco de acusaciones infundadas, principalmente vinculadas con el narcotráfico. La narrativa de que Morales tenía lazos con el crimen organizado fue cuidadosamente construida y amplificada por actores políticos y mediáticos, tanto nacionales como internacionales. A través de la manipulación de imágenes y la difusión de desinformación se buscó afectar la legitimidad de su gobierno. Un ejemplo fue la viralización de una imagen falsa que mostraba a Evo Morales junto a narcotraficantes como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, que rápidamente se difundió en redes sociodigitales y medios de comunicación, a pesar de ser desmentida. Esta campaña de desinformación fue una pieza central para crear un clima de inestabilidad y justificar acciones más agresivas contra su gobierno.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha sido objeto de una intensa campaña de desinformación que lo vincula falsamente con el narcotráfico. Desde 2020, sus opositores políticos han intentado presentar mediáticamente a López Obrador como un “narco presidente”, sugiriendo que su gobierno y su partido, Morena, han recibido apoyo financiero del crimen organizado. Esta narrativa alcanzó su punto álgido durante el proceso electoral de 2024, cuando la etiqueta #NarcoPresidenteAMLO acumuló más de 4 mil millones de vistas en redes sociodigitales, amplificada por medios internacionales como *The New York Times*. Además, en la conferencia matutina del presidente, se denunció que 92 páginas de Facebook pagaron miles de dólares

en anuncios dirigidos a desprestigiar su administración. Esta campaña busca erosionar la confianza pública en López Obrador y justificar posibles intervenciones políticas más drásticas.

El caso de Brasil es otro ejemplo de cómo la desinformación y el *lawfare* se han utilizado de manera coordinada para atacar a los gobiernos progresistas. La “Operación Lava Jato”, que inicialmente era una investigación anticorrupción, se transformó en una campaña judicial y mediática contra el Partido de los Trabajadores [PT] y sus líderes, incluidos los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Los medios de comunicación brasileños, a través de una cobertura sesgada, ayudaron a amplificar las acusaciones de corrupción, generando un clima de opinión desfavorable hacia el PT. Aunque las pruebas eran débiles o inexistentes, la desinformación difundida por los medios creó las condiciones para la destitución de Rousseff y el encarcelamiento de Lula, demostrando cómo la judicialización de la política puede ser utilizada como una herramienta para desestabilizar a gobiernos progresistas.

Estas campañas de desinformación operan en el ámbito mediático y digital, y además están alineadas con los intereses económicos de las elites locales y extranjeras, que buscan mantener el control sobre los recursos y las políticas públicas de la región. Las plataformas sociodigitales, junto con los medios de comunicación corporativos, desempeñan un papel central en la perpetuación de estas narrativas, al capitalizar la atención y los datos de los usuarios. En este contexto, la desinformación se convierte en un arma ideológica que permite moldear la opinión pública y justificar la intervención política y económica en los países latinoamericanos.

En el marco de lo señalado, quizá el riesgo más complicado para la democracia es que atraviesa la privatización de la esfera digital. El capitalismo digital ha transformado la esfera pública, convirtiéndola en un espacio privatizado donde las dinámicas de mercado dictan quién tiene voz y qué temas se visibilizan. La mercantilización de la esfera pública digital implica que la comunicación y la participación ahora son bienes comerciales, accesibles principalmente por quienes pueden pagar o entender mejor cómo manipular los algoritmos para su beneficio.

Un ejemplo de estas dinámicas se dio en Colombia durante las protestas de 2021 contra la reforma tributaria, cuando varias denuncias señalaron la censura de contenido en Facebook e Instagram que documentaba la represión gubernamental. De manera similar, en Argentina, la página feminista “Locas del Coño” fue cerrada, en 2016, por Facebook tras una campaña de denuncias masivas por parte de grupos machistas. Estos casos demuestran cómo las plataformas tienen un poder desmedido para moldear la narrativa pública y silenciar voces disidentes o movimientos sociales, actuando como árbitros del discurso.

El modelo de negocio de estas plataformas también ha contribuido a la polarización y fragmentación del debate público. Al priorizar contenido emocionalmente cargado o sensacionalista, los algoritmos crean burbujas informativas que refuerzan los puntos de vista preexistentes y dificultan el diálogo entre diferentes grupos sociales. En YouTube, por ejemplo, el contenido noticioso más atractivo suele ser el más polarizante, mientras que en X se ha documentado una tendencia hacia la homofilia, donde los usuarios interactúan mayormente con personas que comparten sus opiniones, lo que agrava las divisiones sociales y políticas.

El capitalismo digital ha transformado la experiencia humana en un producto dentro de la economía de la atención, monetizando cada interacción en estas plataformas. Las implicaciones de esta privatización de la esfera pública son profundas, ya que erosionan la autonomía y la privacidad de los usuarios, además de consolidar el poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. La privatización de la esfera pública digital bajo el capitalismo digital ha generado asimetrías de poder que atentan en contra de los principios de una democracia inclusiva. El perfilamiento de usuarios, la mercantilización de la participación y la manipulación algorítmica del debate público han transformado la esfera pública en un espacio que privilegia la rentabilidad sobre la calidad del diálogo democrático.

En este marco, las transformaciones analizadas evidencian cómo el capitalismo digital ha reconfigurado profundamente la esfera pública y los procesos comunicativos en Latinoamérica, consolidando estructuras de poder que amenazan la democracia. La concentración mediática, potenciada por conglomerados tecnológicos globales, ha permitido un control sin precedentes sobre los flujos de información, marginando voces críticas y favoreciendo narrativas alineadas con los intereses neoliberales y las elites económicas nacionales y extranjeras. Este dominio se extiende más allá de los medios tradicionales, infiltrándose en las plataformas digitales que monopolizan la atención y manipulan la opinión pública mediante algoritmos y prácticas de control y vigilancia.

En este contexto, resulta imperativo abordar los desafíos futuros desde una perspectiva crítica que cuestione las lógicas subyacentes del capitalismo digital. Es necesario desarrollar marcos regulatorios que limiten el poder desproporcionado de las corporaciones tecnológicas y promuevan la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas. Además, es fundamental fomentar la soberanía digital, proteger los datos personales y democratizar los medios de comunicación para impulsar la pluralidad informativa y contrarrestar la desinformación. Es crucial promover la educación mediática y digital para capacitar a la población en la resistencia y contrarresto de las tácticas de manipulación y desinformación. Pero sobre todo es necesario disputar la misma lógica de las plataformas tecnológicas para no generar subjetividades antisociales. Solo a través de un esfuerzo colectivo que desafíe las estructuras de poder existentes se podrá construir una esfera pública más inclusiva y equitativa que garantice la participación democrática y promueva la justicia social en la región.

## 8. Democracia e ideología

Cómo se pudo ver en la sección 6, la ideología importa al momento de distribuir el pastel. También se pudo observar el impacto que parece que están teniendo los sistemas universitarios en los procesos electorales. No obstante, para ratificar tal hipótesis y profundizar en los determinantes ideológicos de los ciudadanos, se realizaron modelos probabilísticos que esclarecen cuáles son las variables sociales, económicas, demográficas y valóricas que determinan la ideología y las votaciones en los procesos electorales.

La ideología se midió de dos formas. La primera como autodefinición (es decir, si el ciudadano se considera de izquierda o derecha). La segunda se analiza según la ideología del candidato de cada país. El modelo se realizó uniendo las bases de datos de todos los países que estudia el Latinobarómetro. Los resultados se presentan a continuación.

*Tabla 12. Determinantes ideológicos: análisis de la ideología autodeclarada y el comportamiento electoral en América Latina*

| América Latina                |                               |                               |                               |                        |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variables                     | Columna 1                     | Columna 2                     | Columna 3                     | Columna 4              | Columna 5              | Columna 6              |
|                               | Izquierda<br>(auto declarada) | Izquierda<br>(auto declarada) | Izquierda<br>(auto declarada) | Voto a la<br>izquierda | Voto a la<br>izquierda | Voto a la<br>izquierda |
| Nivel educativo universitario | ✓<br>_ ***                    | ✓<br>_ ***                    | ✓<br>_ ***                    | ✓<br>_ ***             | ✓<br>_ ***             | ✓<br>_ ***             |
| Mujer                         | ✓                             | ✓                             | ✓                             | X                      | X                      | X                      |
|                               | + **                          | + **                          | + **                          | +                      | +                      | +                      |
| Edad                          | ✓                             | X                             | X                             | X                      | X                      | X                      |
|                               | + **                          |                               |                               |                        |                        |                        |
| Edad al cuadrado              | ✓                             | X                             | X                             | X                      | X                      | X                      |
|                               | _ *                           |                               |                               |                        |                        |                        |
| Trabajador independiente      | X                             | ✓                             | --                            | --                     | --                     | --                     |
|                               |                               | + *                           |                               |                        |                        |                        |
| Desempleado                   | X                             | X                             | --                            | --                     | --                     | --                     |
|                               |                               |                               |                               |                        |                        |                        |
| Asalariados                   | --                            | --                            | --                            | X                      | --                     | --                     |
|                               |                               |                               |                               |                        |                        |                        |
| Ayudas de gobierno            | --                            | --                            | --                            | X                      | ✓                      | ✓                      |

| América Latina                                         |                               |                               |                               |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variables                                              | Columna 1                     | Columna 2                     | Columna 3                     | Columna 4              | Columna 5              | Columna 6              |
|                                                        | Izquierda<br>(auto declarada) | Izquierda<br>(auto declarada) | Izquierda<br>(auto declarada) | Voto a la<br>izquierda | Voto a la<br>izquierda | Voto a la<br>izquierda |
|                                                        |                               |                               |                               |                        | ***                    | ***                    |
| Ideología valorativa                                   | --                            | --                            | ✓                             | -                      | -                      | ✓                      |
|                                                        |                               |                               | ***                           |                        |                        | ***                    |
| Estatus social                                         | X                             | X                             | X                             | ✓                      | X                      | ✓                      |
|                                                        |                               |                               |                               | ***                    |                        | **                     |
| En contra de un gobierno militar                       | --                            | ✓                             | --                            | X                      | ✓                      | --                     |
|                                                        |                               | +                             |                               |                        | ***                    |                        |
| A favor de la migración                                | --                            | X                             | --                            | X                      | X                      | --                     |
|                                                        |                               |                               |                               |                        |                        |                        |
| Inaceptable el nivel de desigualdad                    | --                            | ✓                             | --                            | ✓                      | ✓                      | --                     |
|                                                        |                               | ***                           |                               | ***                    | ***                    |                        |
| A favor de la igualdad de género                       | --                            | ✓                             | --                            | ✓                      | ✓                      | --                     |
|                                                        |                               | ***                           |                               | ***                    | ***                    |                        |
| A favor del ecologismo                                 | --                            | ✓                             | --                            | X                      | X                      | --                     |
|                                                        |                               | +                             |                               |                        |                        |                        |
| Control por la heterogeneidad estadística entre países | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Observaciones                                          | 11.151                        | 9.713                         | 9.666                         | 4.915                  | 4.351                  | 4.351                  |

*Nota:* Los asteriscos indican el nivel de significancia estadística de las estimaciones: un asterisco (\*) denota significancia al 90 %, dos asteriscos (\*\*) denotan significancia al 95 %, y tres asteriscos (\*\*\*) denotan significancia al 99 %.

*Fuente:* Ramírez e Irigoyen (2024) con base en Latinobarómetro (2023).

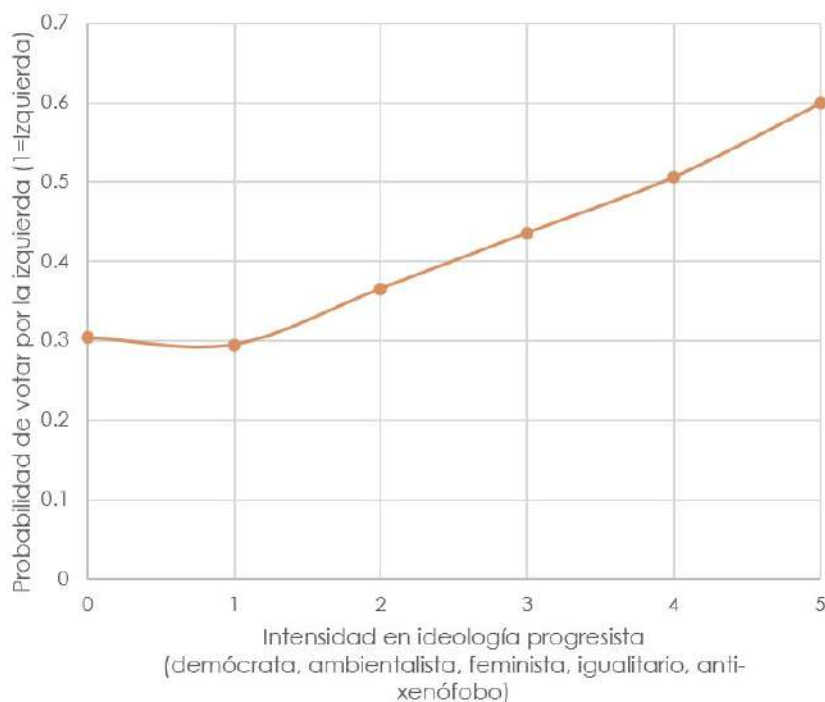
Confirmando la tendencia que se presentaba a inicios de la tercera década del siglo XXI, los resultados muestran que en el 2023 el nivel educativo universitario presenta una influencia significativa y negativa sobre la probabilidad de autopercebirse como de izquierda y, a su vez, de votar por partidos progresistas en la región. Específicamente, se observa que aquellos con estudios universitarios tienen una menor tendencia a identificarse con la izquierda o a apoyar políticas progresistas. Este hallazgo refuerza la necesidad de repensar el rol de la universidad como espacio de reproducción hegemónica.

Al mismo tiempo, el análisis revela una mayor autoidentificación hacia la izquierda entre las mujeres y los jóvenes. No obstante, si bien se consideran con una tendencia más progresista no se puede decir que apoyan a partidos políticos de izquierda, nacional-populares o progresistas. Parece que los partidos progresistas, tanto para las mujeres como para los jóvenes, no representan a cabalidad la ideología de izquierda que dicen tener.

Un tema estructural y que dice mucho sobre la prioridad de entender los cambios materiales, es que los gobiernos de izquierda parecen no estar entendiendo las mutaciones en el mercado laboral: no existe una sinergia virtuosa que se traduzca en apoyo electoral de los trabajadores. No es fortuito que ser trabajador independiente o asalariado no explique si se tenderá a ser de izquierda o votar por la izquierda. No obstante, se puede apreciar que lo que sí explica el apoyo electoral a la izquierda es si el ciudadano se beneficia de políticas sociales del gobierno (transferencia monetaria). Uno de los grandes impactos del neoliberalismo fue cambiar la cuestión social del trabajo y la producción hacia la transferencia monetaria focalizada a través de la asistencia social. La izquierda parece haber dejado de poner en el centro del debate la política productiva y trasladado su accionar a jugar el papel de bombero de lo social.

Ahora bien, resulta interesante evaluar qué valores se asocian a ser y votar por la izquierda. Para ello se construyó un índice conformado por valores que demuestran si el ciudadano es democrata, feminista, se preocupa por el medio ambiente, busca la igualdad socioeconómica y defiende las políticas migratorias. Como lo evidencia el modelo probabilístico, se puede señalar que mientras más valores de los señalados se tenga es más probable que vote y se autodeclare de izquierda (ver gráficos 16 y 17, y tabla 12 columna 3 y 6).

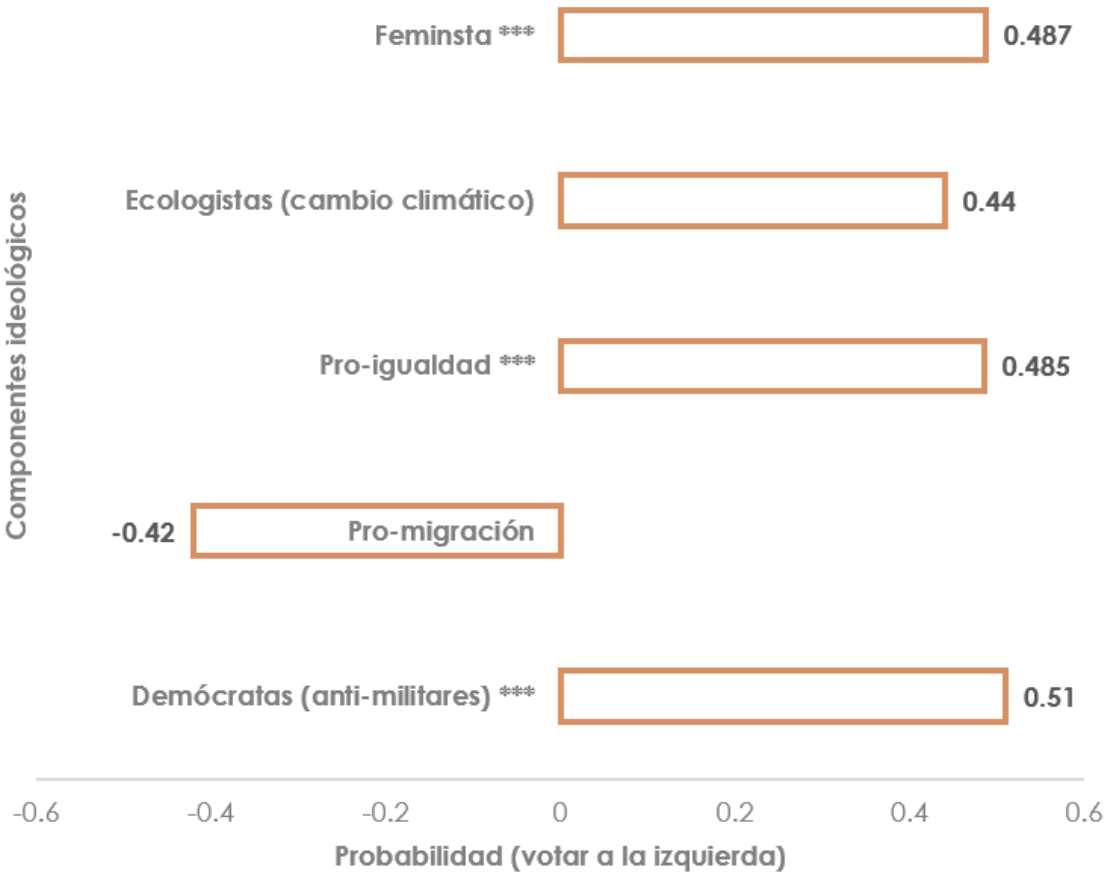
Gráfico 16. Probabilidad de votar por la izquierda según ideología valórica en Latinoamérica, 2023



Fuente: Elaboración propia basada en Latinobarómetro (2023).

Ahora bien, para poder desagregar el análisis valórico de las variables analizadas y estudiar si estas configuran o no la ideología del ciudadano se descompuso el índice anteriormente mencionado en cada una de sus partes. Se observa que la identificación con la izquierda está fuertemente asociada con valores democráticos, como el apoyo a la igualdad de género y la reducción de la desigualdad económica.

Gráfico 17. Probabilidad de votar por la izquierda según componente que conforma la ideología valórica en Latinoamérica, 2023



Nota: Los asteriscos indican el nivel de significancia estadística de las estimaciones: un asterisco (\*) denota significancia al 90 %, dos asteriscos (\*\*) denotan significancia al 95 %, y tres asteriscos (\*\*\*) denotan significancia al 99 %.

Fuente: Elaboración propia basada en Latinobarómetro (2023).

No obstante, lo que llama la atención es el coeficiente de la variable que representa la defensa de los migrantes. Se puede señalar que ser antixenófobos no es un valor de izquierda. Parece ser que la narrativa antimigrante es transversal a si se es de izquierda o derecha. A su vez, los ciudadanos que tienen valores ecológicos se identifican con la izquierda, pero no se puede señalar que votan por los partidos progresistas. Puede resultar coherente dado que los gobiernos progresistas han reforzado políticas extractivas que impactan estructuralmente al medio ambiente.

Por otra parte, un tema relevante que se puede observar a nivel de toda la región y que se desprende del modelo es que –como se señaló– si se es mujer existe más probabilidad que sea de izquierda; no obstante, no se puede decir *a priori* que votarán por la izquierda. Lo que sí queda claro en el modelo es que el tener valores de feminismo implica tener una tendencia a votar por la izquierda. Dada la importancia que ha adquirido en los procesos democráticos el debate del voto de la mujer y el debate feminista, en la siguiente sección se realiza un análisis de siete países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México. Estos países fueron seleccionados por ser casos paradigmáticos, ya sea por el papel activo del movimiento feminista, la presencia de partidos conservadores en temas de género, o por las marcadas diferencias entre el voto femenino y masculino.

### 8.1. Democracia, feminismo y elecciones<sup>27</sup>

En los últimos dos siglos, el feminismo latinoamericano ha desarrollado una teoría política transformadora que, hacia finales del siglo XX, comenzó a cuestionar tanto el androcentrismo como el heterocentrismo de las sociedades. Esta fuerza feminista latinoamericana ha sido el resultado de un proceso de identificación de demandas y prácticas políticas característico de los movimientos antihegemónicos, el cual ha evolucionado en función de los contextos y realidades de la región (Gargallo, 2007). Un ejemplo de ello es el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano, celebrado en 1981 en Bogotá, donde varias organizaciones de mujeres decidieron designar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta iniciativa, promovida por el feminismo latinoamericano, fue posteriormente adoptada por la ONU como fecha oficial (Lamas, 2016).

Actualmente, las olas más recientes de feminismos populares, decoloniales, transfeminismos y ciberfeminismos en América Latina han abierto nuevos horizontes en los escenarios políticos transnacionales, visibilizando temas que históricamente han sido marginados en las agendas políticas. Entre ellos destacan el aborto, la violencia de género, el trabajo de cuidados, el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas y disidencias, así como el impacto del extractivismo en la vida de las mujeres rurales, entre otros (Gago, 2019). Además, una característica central de la cuarta ola feminista en América Latina ha sido la intersección entre los ejes étnico-racial y de género. Este enfoque ha promovido el reconocimiento inclusivo de las mujeres afrodescendientes e indígenas, subrayando la importancia de integrar sus luchas y demandas en la agenda feminista (Matos y Paradís, 2013). Por ejemplo, buscando mostrar la resistencia al modelo extractivista de las mujeres indígenas (Rodríguez Enríquez, 2016).

En todo caso, movilizaciones masivas como las del “8M” por el día internacional de la mujer, el “28N” contra la violencia de género, el “28S” por la despenalización del aborto y el “29J” el día del orgullo, junto a paros internacionales y protestas locales para mostrar la importancia de la economía de los cuidados, han sido fundamentales para dar visibilidad a la lucha que encabezan las mujeres y diversidades sexogenéricas. Estas acciones se han articulado con campañas en las redes sociales bajo estrategias, consignas y *hashtags* como #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, “Aborto, seguro, libre, y gratuito”, “El violador eres tú”, #NosotrasParamos, #MeToo, “Huelga Feminista”, entre otras. Estas iniciativas reflejan la fuerza de un feminismo que ha logrado articularse en América Latina sin perder su arraigo local.

Así, en su lucha por la justicia de género y social, estos movimientos feministas diversos han irrumpido en el espacio público, exigiendo el reconocimiento y la redistribución de derechos para las mujeres, las diversidades sexogenéricas y las disidencias (Barrancos y Buquet, 2022). Es decir, a través de varias acciones y sus múltiples expresiones, los movimientos feministas en América Latina no solo han buscado ampliar derechos y reducir las desigualdades de género, sino que también han contribuido significativamente a la construcción de una democracia más inclusiva, utilizando diversos espacios y repertorios de acción (Gago, 2019).

Sin embargo, frente a estos avances en la agenda feminista y el fortalecimiento del movimiento feminista emergen corrientes conservadoras “antifeministas” que no solo se oponen, sino que se enfrentan activamente a los feminismos en una lucha por la hegemonía ideológica. En este contexto, surge la categoría de “ideología de género” (Veloz, 2021), un concepto que se origina a mediados de los años noventa entre grupos católicos derechistas de Estados Unidos, movilizados en reacción a la Conferencia de Beijing (1995) que impulsó los derechos de las mujeres a nivel internacional. Estos grupos conservadores han argumentado que la agenda de género es una herramienta neocolonial impuesta por una conspiración internacional (Gago, 2019). Asimismo, según Mara Viveros Vigoya y Manuel Alejandro Rondón (2017), la “ideología de género” es una estrategia diseñada para limitar las transformaciones impulsadas por el feminismo y el activismo por la diversidad sexual desde los

---

<sup>27</sup> Esta sección se basa en el artículo “Democracia Feminista en América Latina: los feminismos latinoamericanos en el laberinto actual de los partidos de extrema derecha y progresistas” de Gabriela Gallardo Lastra, Florencia Piñeyrúa, Alejandra Yáñez-Cancino, Andrea Guillem Macías, Julia Almeida Vasconcelos da Silva, Margarita Ramos Mier, Deisy Marisol Quintanilla Ibarra, Diana Carolina Alfonso y Marysabel Pacheco-Arreaño, publicado en el libro *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos* (Ramírez, 2024 en prensa).

años noventa. Esta resistencia de “ideología de género” se enfoca especialmente en oponerse al aborto y al reconocimiento de la diversidad de identidades, orientación o expresiones de género, atacando directamente los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTQIA+ (Vigoya y Rondón, 2017). No obstante, investigaciones recientes sugieren que estas creencias de quienes sostienen la mencionada “ideología de género” son multidimensionales, nucleadas alrededor del esencialismo de género, la primacía masculina y los mandatos normativos de roles (Kroska, 2007).

Además, esta corriente antigénero está promovida, organizada y financiada de forma transnacional por actores gubernamentales, religiosos y de la sociedad civil (Radačić y Faccio, 2020). En América Latina, ha sido fuertemente respaldada y acogida por diversos líderes, lideresas y partidos políticos. En México, por ejemplo, en 2018, partidos neopentecostales jugaron un papel clave en la promoción de la campaña del “Frente Nacional por la Familia”, que se opuso vehementemente a las propuestas legislativas que buscaban ampliar los derechos LGBTQIA+, incluido el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo (Zaremborg, 2020). De manera similar, en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro se manifestó abiertamente a favor de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en contra de la conciliación entre vida familiar y laboral, y fue un firme opositor del aborto, proponiendo penas de prisión para las mujeres que lo practiquen. Además, su discurso incluyó expresiones de odio explícito hacia la población LGBTQIA+ (Nogueira, 2020). De la misma manera, en Colombia el partido Centro Democrático se ha posicionado en contra de la agenda feminista. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, senadora por este partido, es la representante más clara en oposición a la ideología de género (Botero y Prada, 2013). En Chile, el Partido Republicano, a través de su líder José Antonio Kast han manifestado en sus discursos defender la familia tradicional y se ha manifestado contrario a la comunidad LGBTQIA+, tanto al matrimonio igualitario como a la ley de identidad de género, al tiempo que ha denunciado el “*lobby gay*” y la “*dictadura gay*” (Caro y Quital, 2023). A estos ejemplos, se pueden seguir sumando varios partidos políticos, principalmente de derecha, en América Latina.

En este contexto, resulta fundamental examinar el papel que desempeña el debate feminista dentro de los partidos políticos, así como las estrategias y demandas de las organizaciones feministas en la influencia del voto femenino durante las recientes elecciones presidenciales en América Latina. En el marco de lo señalado en esta sección se buscará responder: ¿cuáles son las particularidades de los feminismos en América Latina durante el último proceso electoral? ¿Qué propuestas hicieron los partidos políticos de centroizquierda y derecha/ultraderecha en relación con la agenda feminista? ¿Cómo se ubican los partidos políticos latinoamericanos frente al feminismo? Y ¿cómo votaron las mujeres en las últimas elecciones? La hipótesis propone que el voto de las mujeres en América Latina tiende a ir en contra de la extrema derecha, influenciado por la presencia de un movimiento feminista activo y fuerte que se opone a esa corriente política durante las elecciones. Para explorar esta hipótesis, se examinan las elecciones recientes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.

### 8.1.1. Aporías de las democracias latinoamericanas

En América Latina, identificamos diversas aporías en las democracias actuales que deben ser superadas para alcanzar el ideal de justicia de género. Entre los desafíos más evidentes se encuentra la falta de democratización del uso del tiempo entre los géneros, la violencia de género (incluidos los feminicidios), la falta de reconocimiento pleno de los derechos LGBTQIA+ (lesbianas, *gays*, bisexuales, transexuales, *queer*, intersexuales y asexuales), y el control sobre los cuerpos feminizados.

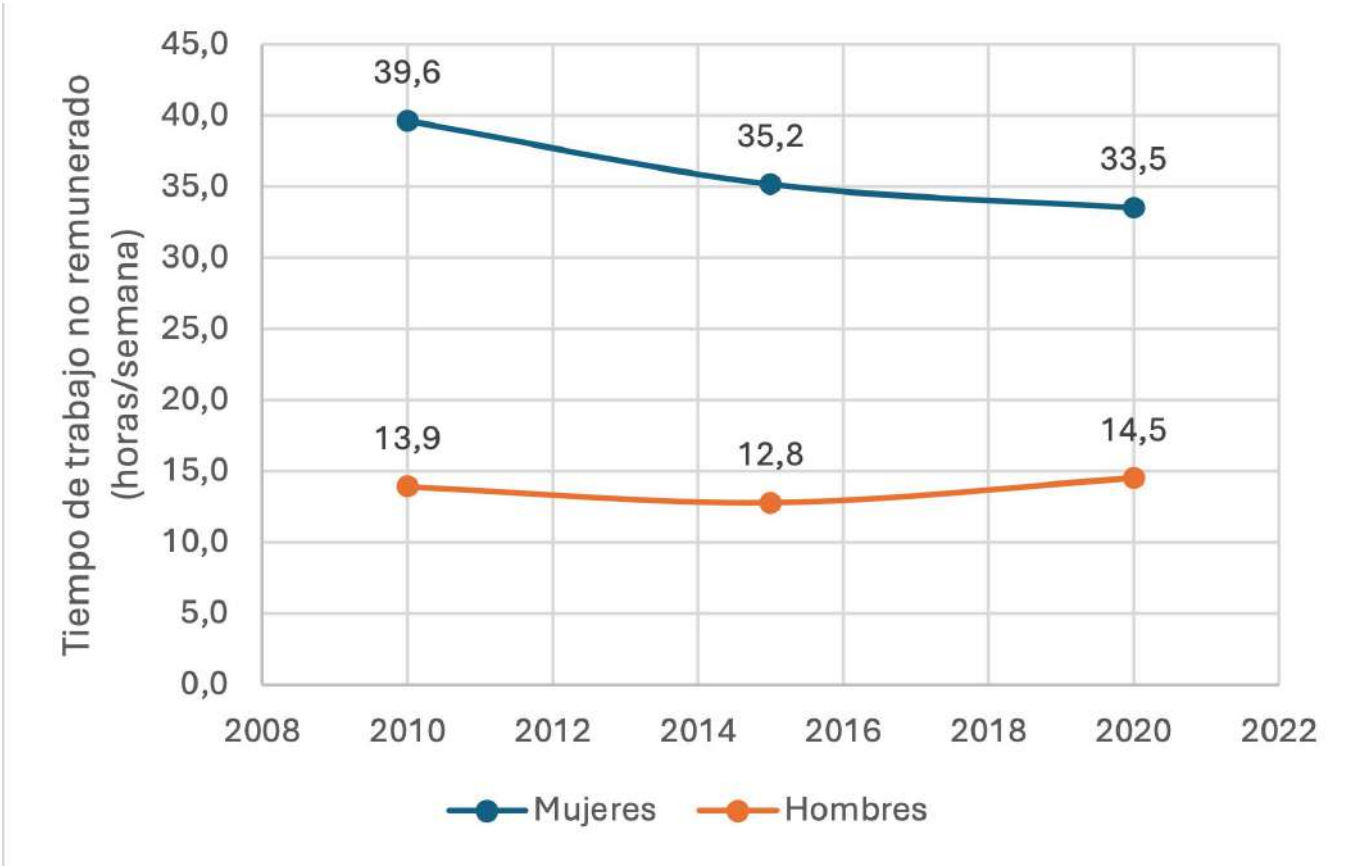
En promedio, una mujer latinoamericana dedica entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a trabajos de cuidado no remunerados (OIT, 2024). Esto equivale a un total de 8.417 millones de horas semanales que las mujeres destinan a estas labores. Además, el aporte del trabajo no remunerado al PIB de la región representa entre el 11 % y el 25,6 %, siendo las mujeres responsables del 75 % de este valor (CEPAL, 2022). Desde una perspectiva interseccional, estas cifras se agravan en el caso de mujeres racializadas o en situación de pobreza. Las mujeres latinoamericanas pertenecientes al primer quintil de ingresos dedican un 39 % más de tiempo al trabajo no remunerado en comparación con las mujeres del quinto quintil (Bárcenas, 2020). No obstante, al analizar los cambios de la última década, se observa un hecho significativo: los hombres latinoamericanos actualmente dedican más horas al trabajo de cuidados que hace diez años. De hecho, en países como Argentina, Uruguay, Guatemala, Brasil, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, estas horas comienzan a disminuir para las mujeres (tabla 13 y gráfico 18). Esto sugiere una tendencia leve hacia una redistribución del tiempo dedicado a los cuidados; sin embargo, en países como Colombia y México se observa un incremento en este tiempo (tabla 13).

Tabla 13. Distribución del tiempo de los cuidados no remunerado según género por período (en horas semanales)

| País      | 2012-2014 |         | 2019-2021 |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|           | Hombres   | Mujeres | Hombres   | Mujeres |
| Argentina | 15++      | 42++    | 17**      | 33**    |
| Brasil    | 5+        | 23+     | 11*       | 22*     |
| Colombia  | 9+        | 32+     | 12**      | 34**    |
| México    | 15+++     | 42+++   | 16*       | 42*     |

Nota: Año exacto: +2012, ++2013, +++2014; \*2019, \*\*2021.  
Fuente: Elaboración de las autoras con base en CEPAL (2023). <https://oig.cepal.org/>

Gráfico 18. Tiempo de trabajo no remunerado en América Latina por género, 2010-2020

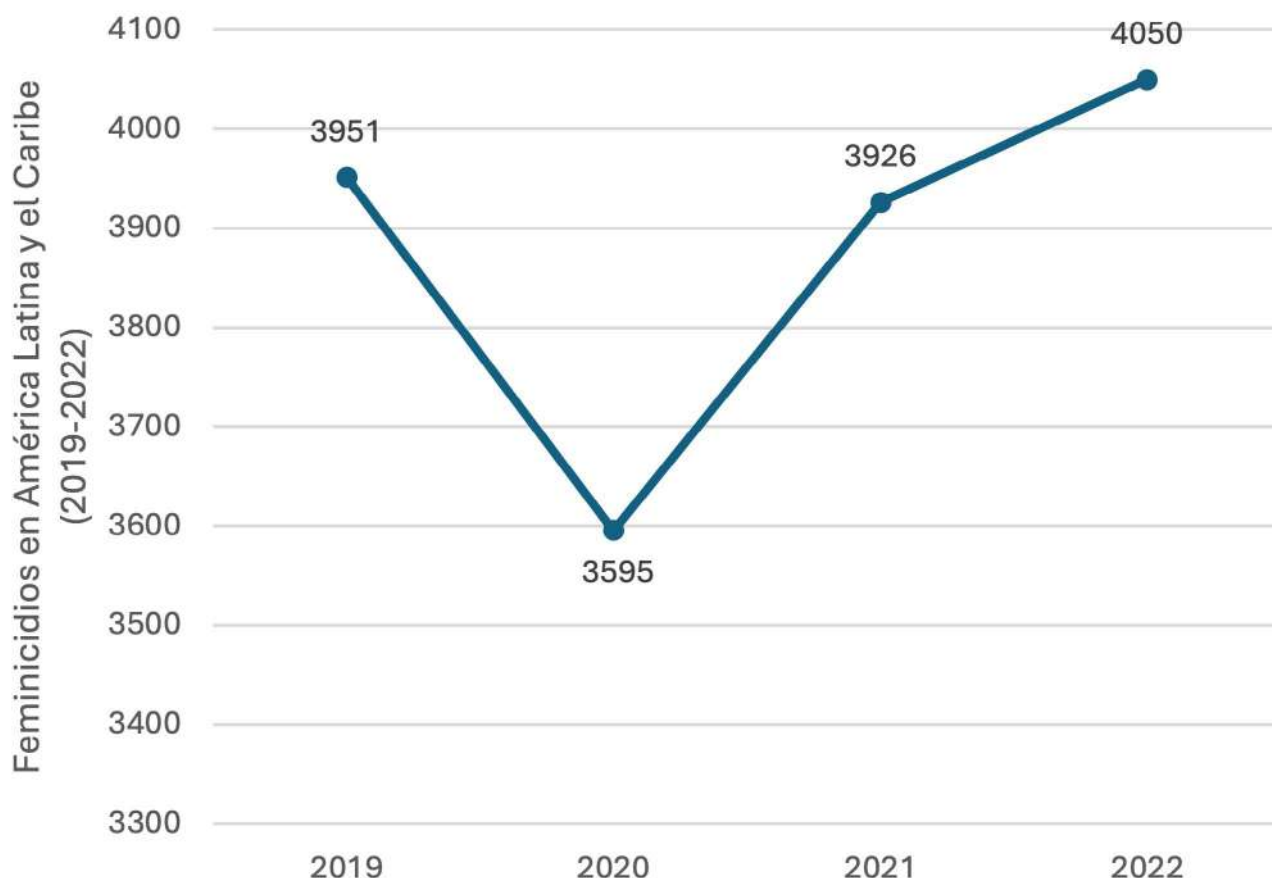


Fuente: CEPALSTAT (varios años) y Ramírez (2024).

En 2022, América Latina y el Caribe alcanzaron una marca preocupante: el mayor número de feminicidios en los últimos cinco años, considerando 26 países (ver gráfico 19) (ONU-Mujeres y CEPAL, 2023). El incremento del 5 % en los casos de feminicidios entre 2020 y 2022 pone de relieve el eslabón final de una larga cadena de violencias estructurales y cotidianas que las mujeres enfrentan a lo largo de sus vidas. Entre los países analizados, Bolivia y México presentaron las tasas más altas de feminicidios en 2022, con 1,5 por cada 100 mil mujeres, seguidos por Brasil con 1,3. En contraste, Chile mostró la tasa más baja de la región, con 0,4. Desde 2019, las tasas de feminicidios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México se han mantenido estables (gráfico 20). Sin embargo, Bolivia ha sido el único país en el que se ha observado una disminución sostenida (gráfico 20). A pesar de haber superado los 2,3 feminicidios por cada 100 mil mujeres en la última década, Bolivia logró reducir significativamente su tasa en un 34,78 % entre 2018 y 2022. En contraste, México ha experimentado un alarmante incremento del 150 % en su tasa de feminicidio durante el mismo período, aumentando de 0,6 en

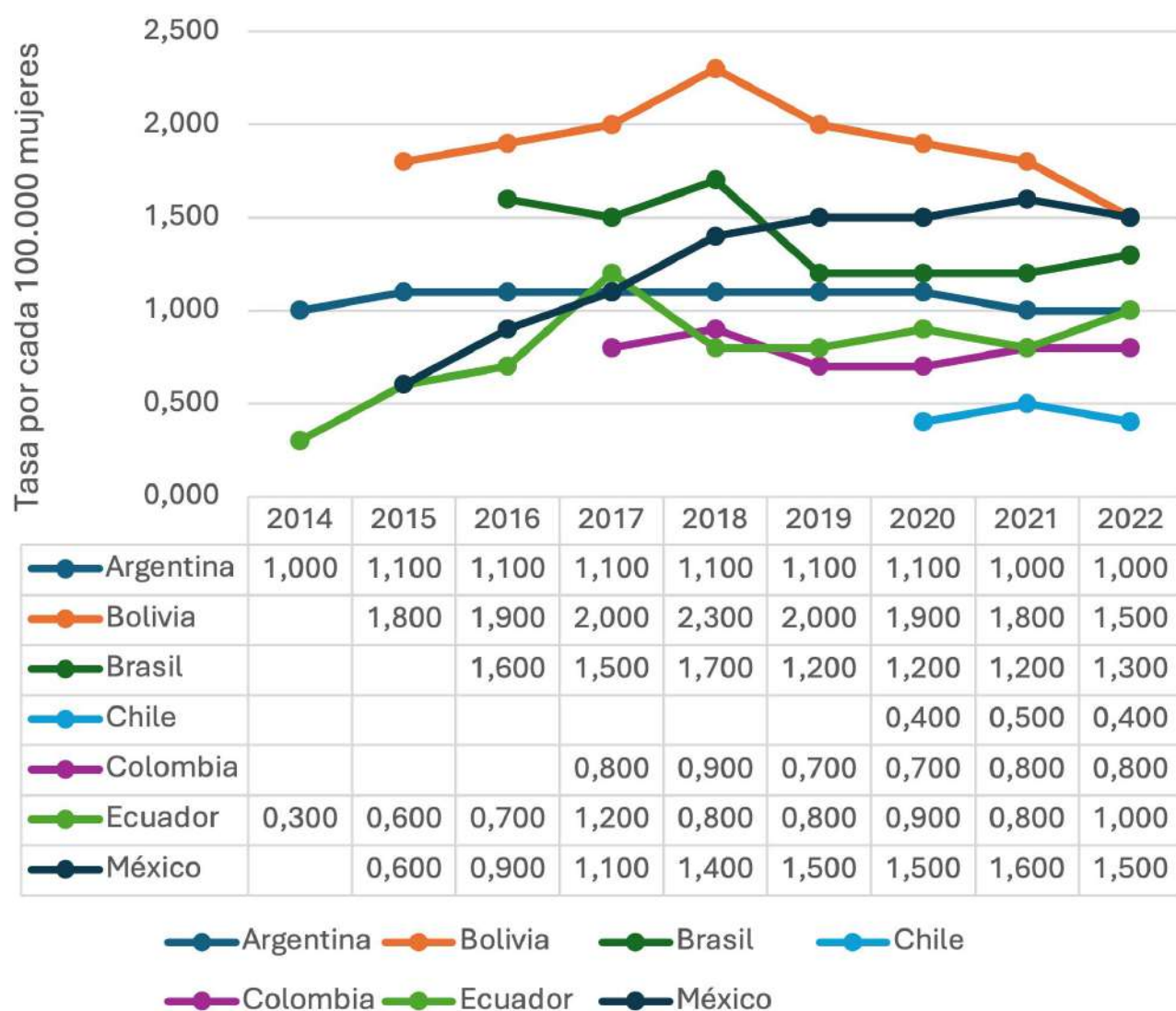
2015 a 1,5 en 2022 (gráfico 20). Este incremento se refleja en un notable aumento en el número absoluto de feminicidios, que subió de 411 en 2015 a 976 en 2022 (tabla 14). Brasil, por su parte, también ha mostrado un incremento constante en el número absoluto de feminicidios, subiendo de 1.075 en 2017 a 1.437 en 2022 (tabla 14). Por otro lado, Ecuador, aunque presenta cifras absolutas menores, muestra un patrón de aumento en las tasas de feminicidio, pasando de 0,3 en 2014 a 1,0 en 2022. En tanto, Argentina y Colombia se mantuvieron estables. Argentina en 1 durante los años 2014 a 2022, y Colombia con las tasas más bajas de feminicidios (0,8) ha mostrado leves variaciones en sus cifras entre 2017 y 2022 (gráfico 20).

Gráfico 19. Evolución de la cantidad de feminicidios en América Latina y el Caribe, 2018-2022



Fuente: Elaboración de las autoras con base en ONU Mujeres y CEPAL (2023).

Gráfico 20. Evolución de la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, 2014-2022



Fuente: Elaboración de las autoras con base en CEPAL y CELADE (2022).

Tabla 14. Evolución de la cantidad de feminicidios en números absolutos, 2014-2022

| Año  | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | México |
|------|-----------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|
| 2014 | 225       |         |        |       |          | 27      |        |
| 2015 | 235       | 96      |        |       |          | 56      | 411    |
| 2016 | 254       | 104     | 929    |       |          | 66      | 604    |
| 2017 | 251       | 110     | 1.075  |       | 208      | 101     | 742    |
| 2018 | 255       | 130     | 1.229  |       | 228      | 68      | 893    |
| 2019 | 252       | 117     | 1.330  | 46    | 177      | 70      | 945    |
| 2020 | 251       | 113     | 1.354  | 43    | 187      | 77      | 948    |
| 2021 | 231       | 108     | 1.341  | 44    | 210      | 71      | 1.015  |
| 2022 | 232       | 94      | 1.437  | 43    | 215      | 89      | 976    |

Fuente: Elaboración de las autoras con base en CEPAL y CELADE (2022).

A estas aberraciones de la democracia feminista se suma la falta de reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTQIA+. En el contexto latinoamericano, más del 60 % de las personas trans mayores de 30 años perciben discriminación (Ipsos, 2023). Un ejemplo claro de esta desigualdad es el matrimonio igualitario, un hito clave en la lucha por la igualdad. Sin embargo, este derecho no es reconocido en todos los países. Aunque en Argentina se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010, en Bolivia y México aún no se ha aprobado a nivel nacional. En México, su estructura federal crea una situación particular: 27 de los 32 estados han aprobado el matrimonio igualitario, pero no existe una legislación nacional unificada. Además, la adopción por parejas del mismo género sigue siendo más limitada, con plena legalización solo en tres países de la región.

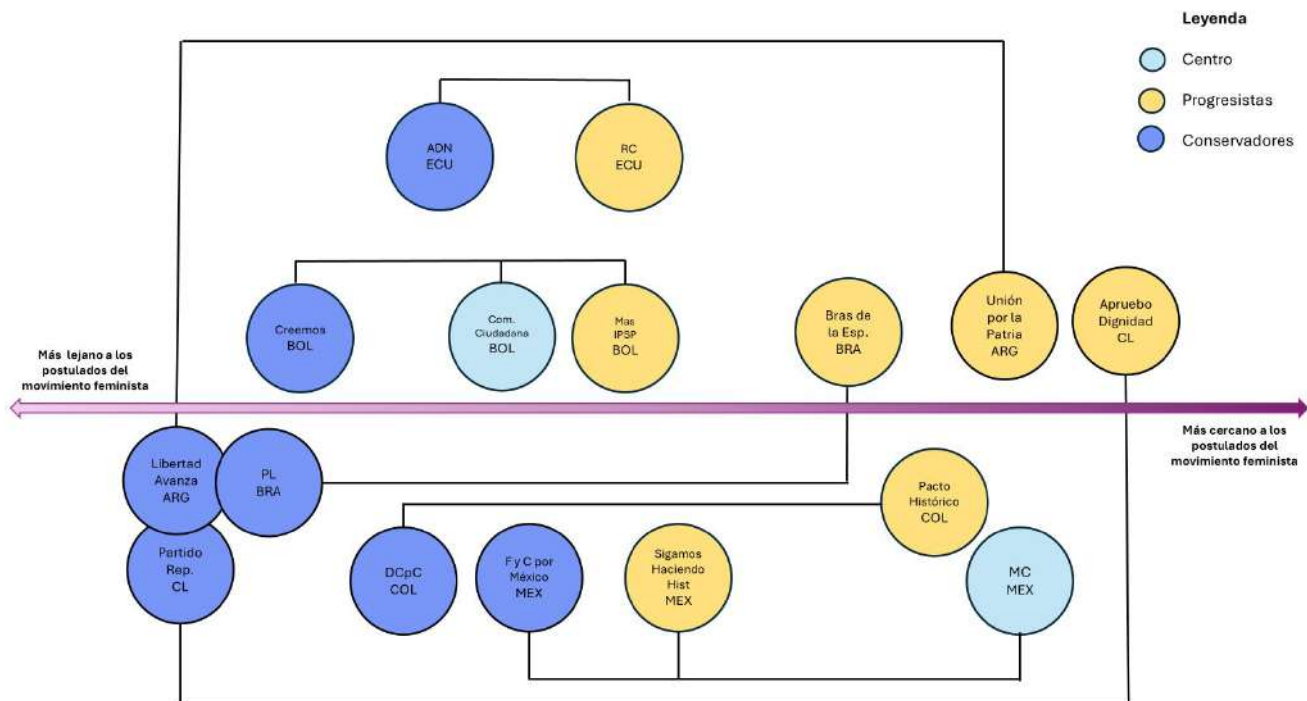
A esto se añade que el cuerpo de las mujeres sigue siendo entendido como un espacio de explotación, apropiado tanto por los hombres como por el Estado (Federici, 2010). En América Latina, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas no están plenamente garantizados. Por el contrario, estos derechos son regulados mediante un conjunto de normas que controlan y disciplinan los cuerpos feminizados. Un ejemplo claro es la penalización del aborto, que persiste en la mayoría de los países de la región. Solo en Argentina y Colombia, en los últimos años, se ha despenalizado el aborto en cualquier circunstancia, en los demás países latinoamericanos sigue condicionado. Por lo tanto, la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos –encarnada en el lema “Mi cuerpo, mi decisión”, surgido de las campañas por la despenalización del aborto– no es únicamente una demanda de derechos individuales, sino una cuestión profundamente política que desafía las estructuras del heteropatriarcado en la región.

### **8.1.2. Los partidos políticos frente a la construcción de una democracia feminista**

Tras el análisis de los planes de gobierno y el comportamiento de lxs candidatxs presidenciales ante las luchas feministas, se destaca la existencia de un bloque de partidos conservadores y de extrema derecha en Argentina (Libertad Avanza), Brasil (Partido Liberal) y Chile (Partido Republicano), que se oponen de manera explícita y se constituyen en enemigos de la construcción de una democracia feminista. Por otro lado, los partidos más progresistas que apoyan esta agenda se encuentran en Chile con Apruebo Dignidad y en Argentina con Unión por la Patria. Estos se muestran, por ejemplo, a favor del aborto libre y seguro, y apoyan el reconocimiento de la población LGBTQIA+. A estos les sigue Colombia con el Pacto Histórico, donde Francia Márquez, con su propuesta de “Vivir Sabroso” que incorporó una perspectiva de género desde la interseccionalidad, disputó la vicepresidencia; y el partido de centro Movimiento Ciudadano en México, liderado por Jorge Álvarez Máynez (como se observa en el diagrama 2).

Además, se observa que cuanto más cercanos a la agenda feminista están los partidos progresistas, más conservadora es la oposición respecto a esta temática. Esto es particularmente evidente en Argentina y Chile, donde se registra una amplia brecha en posturas frente a la democracia feminista. En Argentina, existe una diferencia significativa entre La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, quien promovió una agenda misógina y restrictiva en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, y Unión por la Patria, liderado por Sergio Massa, quien adoptó una postura más cercana al feminismo, destacándose por haber votado a favor de la despenalización del aborto. De manera similar, en Chile, se observa una clara distinción entre el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, y Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric a la cabeza. Mientras que el programa de Apruebo Dignidad aboga por el aborto libre y seguro, Kast evita abordar este tema explícitamente, aunque implícitamente apoya la vida desde la concepción en sus discursos. Por el contrario, en países como Ecuador, Bolivia y México, las diferencias entre los partidos de izquierda y derecha respecto a la agenda feminista son menos pronunciadas, a pesar de sus divergencias en el ámbito económico. En temas como el aborto, no se observan diferencias sustanciales entre los partidos, lo que sugiere que tanto la izquierda como la derecha en estos países se posicionan en un centro alejado de los postulados de los movimientos feministas que apuestan por una democracia feminista.

Diagrama 2. Ubicación de partidos frente a la democracia feminista



Fuente: Elaboración de las autoras (2024).

### 8.1.3. El actuar del movimiento feminista en el proceso electoral

En el contexto electoral de las últimas elecciones, los movimientos feministas, diversos en cada uno de estos países, reaccionaron de manera distinta frente a las opciones electorales de izquierda y derecha que disputaban el poder. En países como Brasil, Argentina y Chile, se observó una fuerte activación del movimiento feminista ante la posibilidad de que la extrema derecha llegara al poder. En Argentina, tras los resultados de las elecciones primarias (PASO), organizaciones como la Campaña por el Aborto Legal, el colectivo “Ni Una Menos” y distintas asambleas de mujeres convocaron a una marcha feminista multitudinaria que recorrió diferentes puntos del país. Esta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2023 bajo la consigna “defender y ampliar los derechos de la agenda feminista frente al avance de los partidos de ultraderecha”. Asimismo, antes de la segunda vuelta electoral, mujeres jóvenes feministas impulsaron la tendencia: “las *swifties* no votan a Milei”. De manera similar, en Brasil, el movimiento feminista, organizado por mujeres y LGBTQIA+, se movilizó en contra de la candidatura de Jair Bolsonaro, al igual que lo hizo en 2018 con el movimiento “EleNão”. Además, el movimiento feminista brasileño aunque con menor intensidad que en 2018, respaldó la candidatura de Lula da Silva. En Chile, la Coordinadora 8M movilizó a mujeres en diversas acciones, y convocó públicamente a votar por Gabriel Boric, en oposición a la agenda que llamó “misógina” del candidato de derecha José Antonio Kast.

También, el movimiento feminista colombiano desempeñó un papel relevante durante las elecciones. El colectivo feminista “La Juntanza” realizó un llamado público a través de redes sociales en apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, la primera candidata a la vicepresidencia feminista, negra y antirracista. Con los *hashtags* #SomosDecisivas y #JuntasEnSegundaVuelta, se convocaron 45 mil mujeres, incluidas congresistas electas del Pacto Histórico. Además, se llevó a cabo el Pañuelazo Feminista Nacional el 11 de junio. El miedo frente a las posturas misóginas del candidato Hernández fue un factor clave para movilizar a los feminismos, y el movimiento “Estamos Listas”, que inicialmente se había distanciado, retomó su apoyo en la segunda vuelta. Asimismo, en Bolivia, el movimiento feminista también tuvo una participación activa, aunque menos intensa. Durante la crisis política de 2019, el Parlamento de Mujeres, impulsado por Mujeres Creando y otros colectivos, unió a varias mujeres de diferentes corrientes políticas bajo el lema “la machocracia no es democracia”. Sin embargo, en las elecciones de 2020, el movimiento feminista adoptó un rol más vigilante. Por ejemplo, Adriana Guzmán, del colectivo Abya Yala, exigió celeridad en los comicios, pero las acciones se limitaron al monitoreo del proceso electoral, con el foco puesto en la crisis económica, sin un apoyo explícito a los candidatos de izquierda o derecha.

De manera distinta, en Ecuador y México, los movimientos feministas no se posicionaron a favor o en contra de ninguna de las opciones electorales. En México, aunque se llevaron a cabo encuentros entre mujeres y la candidata progresista, Claudia Sheinbaum, ninguna de las grandes coordinadoras feministas expresó un apoyo explícito. En contraste, en Ecuador no se observó una movilización o tendencia feminista organizada en el marco de la campaña, a pesar de los escándalos de violencia de género que involucraron al candidato de derecha.

#### 8.1.4. Voto de las mujeres latinoamericanas

En las elecciones recientes en América Latina, se ha evidenciado un comportamiento diferenciado del voto femenino en varios países pero que muestran algunas tendencias regionales. En Argentina, Chile y Brasil, las mujeres votaron mayoritariamente en comparación con los hombres en contra de los candidatos de derecha, favoreciendo las opciones progresistas. En Argentina, los datos del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA (2023) muestran que, en la segunda vuelta, el 44,4 % de las mujeres se inclinó por Milei, en comparación con el voto masculino del 53,9 %. En Brasil, según una encuesta de Atlas Intel (2022), el 61 % de las mujeres votó por Brasil de la Esperanza, donde el candidato era Lula, en contraste con el 37 % que apoyó a Jair Bolsonaro. La diferencia de género fue decisiva, ya que entre los hombres, el margen fue más ajustado, con el 53 % a favor de Lula y el 47 % por Bolsonaro. También, en Chile, el voto femenino fue fundamental para la victoria de Boric. Según los estudios de Decide Chile (2021) las mujeres prefirieron votar por la opción progresista frente a la opción de la derecha. Además, el voto se mostró muy diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el 68 % de las mujeres menores de 30 años votó por Boric, mientras que solo el 32 % de los hombres de esa edad apoyó su candidatura (Decide Chile, 2021). Este dato evidencia el impacto de las mujeres jóvenes en el triunfo de la izquierda.

En contraste, en Ecuador y México, las mujeres votaron en contra de las opciones progresistas. En Ecuador, el candidato de derecha, Daniel Noboa, ganó con el 53 % del voto femenino, superando a Luisa González de la Revolución Ciudadana, que obtuvo el 46,8 % del apoyo de las mujeres. Esta diferencia de 6,4 % entre ambos candidatos destaca el papel decisivo de las mujeres, mientras que entre los hombres, la diferencia fue de solo 0,7 %. En México, según datos de Áltica publicados por *El País*, el 56 % de las mujeres votó por Claudia Sheinbaum, en comparación con el 62 % de los hombres que la apoyaron. Además, las mujeres votaron en mayor proporción por Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en comparación con los hombres (Hidalgo Pérez y otros, 2024). Expansión Política, indica que el 55,1 % de los votos de Sheinbaum provinieron de mujeres y el 58,4 % de hombres. Atlas Intel, en su encuesta previa a las elecciones predijo el triunfo de Sheinbaum, observando un mayor apoyo de los hombres (60,7 %) en comparación con el 37,8 % de las mujeres.

Finalmente, en Bolivia, no se observó una diferencia significativa en el voto por género. Sin embargo, los datos del Latinobarómetro muestran que el 35,7 % de las mujeres votó por el MAS-IPSP, en comparación con el 36,7 % de los hombres. En cuanto a Comunidad Ciudadana, el 12,2 % de las mujeres y el 13,2 % de los hombres le dieron su apoyo, mientras que el partido de derecha Creemos obtuvo el 8,8 % del voto femenino y el 9,7 % del voto masculino. Este escaso margen de diferencia entre géneros refleja que, en Bolivia, el voto de mujeres y hombres no varió significativamente. En Colombia, en cambio, el voto de las mujeres desempeñó un papel clave, dado que votaron en mayor proporción que en elecciones anteriores, lo que redujo el apoyo a la derecha. En las elecciones de 2018, el 56 % de las mujeres había votado por el candidato de derecha Iván Duque, mientras que solo el 33 % apoyó a Petro (YanHass, 2018). En cambio en las elecciones más recientes, del 2022, esta tendencia cambió, lo que contribuyó a un menor voto femenino para la derecha. Una encuesta de “Invamer” realizada entre el 3 y el 7 de junio de 2024 mostró un escenario ajustado entre los dos candidatos presidenciales que competirían en la segunda vuelta. En términos de género, la intención de voto por el Pacto Histórico había disminuido, tanto entre hombres (47,6 %) como mujeres (46,8 %), mientras que Hernández mostró una caída de un punto porcentual en el apoyo femenino (48,1 %) y un incremento de más de dos puntos entre los hombres (48,2 %). Este cambio contrasta con las elecciones de 2018, cuando el voto en general estaba más centrado en las cabeceras urbanas y favorecía abiertamente a la derecha (Misión de Observación Electoral, 2022). Esto contribuyó a la reducción del voto femenino para la derecha, indicando un cambio significativo en la tendencia electoral por género en Colombia (como se puede apreciar en la siguiente tabla).

Tabla 15. Intención de voto de las mujeres colombianas en la segunda vuelta del 2018 y 2022

| Elecciones presidenciales                              | 2018    | 2022    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                        | YanHass | Invamer |
| <b>Por la derecha (Iván Duque y Rodolfo Hernández)</b> | 56 %    | 48,1 %  |
| <b>Por la izquierda (Gustavo Petro)</b>                | 33 %    | 46,8 %  |

Fuente: YanHass (2018), tamaño de muestra: 1.249 encuestas distribuidas en 60 municipios del país. Invamer (2022), tamaño de muestra: 2 mil encuestas distribuidas en 84 municipios del país.

En suma, el movimiento feminista (popular y diverso) y las mujeres latinoamericanas se han consolidado como una fuerza decisiva frente al avance de la extrema derecha, cuyo discurso, mediante la llamada “ideología de género”, ataca los derechos de las mujeres y las diversidades sexogenéricas, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, así como el reconocimiento de las personas LGBTQIA+. La presente sección deja en claro que ante la amenaza de una posible victoria de los partidos de extrema derecha que se posicionan en contra de la agenda feminista, las organizaciones feministas responden con estrategias de movilización tanto en las calles como en las redes sociales. Además, entre más amenazadas estén las reivindicaciones de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas, mayor es la activación del movimiento feminista y organizaciones de mujeres diversas.

Asimismo, parece que la mayoría de las mujeres en los casos estudiados, haciendo uso de sus derechos políticos, acuden a votar en mayor proporción y lo hacen principalmente por opciones progresistas y en contra de la extrema derecha, marcando una diferencia significativa en comparación con el voto de los hombres. Esto es evidente en países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, donde, en algunos casos, las mujeres participaron en mayor número que en elecciones anteriores y, votaron en mayor proporción que los hombres a favor de candidaturas progresistas y en contra de una agenda conservadora en materia de género. Sin embargo, cuando las propuestas y discursos sobre temas de género son prácticamente indistinguibles entre los partidos de derecha y progresistas y el movimiento feminista no se activa en contra de la opción de derecha o a favor de la opción progresista, las mujeres tienden a inclinarse por opciones de derecha o centro. Esto se observa claramente en los casos de México, Bolivia y Ecuador, donde las mujeres, en su mayoría, votaron en contra de las opciones progresistas. Este fenómeno invita a una reflexión más profunda sobre el impacto que ha tenido en el voto femenino el hecho de que partidos como Morena, la Revolución Ciudadana y el MAS hayan sido objeto de fuertes críticas por parte de los movimientos feministas en sus respectivos países, debido a las posturas y discursos de expresidentes de estos partidos en torno a los derechos de las mujeres y las diversidades sexogenéricas.

## 9. Democracia o barbarie

Lo señalado en las secciones anteriores pone de manifiesto lo que podría ser una “solución explosiva” que los autoritarismos vienen a acelerar. En efecto, la arremetida de la extrema derecha acentuará la violencia de las “dictaduras democráticas” que, quizá, dejen la farsa del componente democrático, y generen procesos de acumulación aún más violenta.

No es casual que en Bolivia el gobierno de Añez haya realizado un golpe de Estado con tanques; que militares brasileños hayan intentado imponer su agenda con los “terraplanistas”, los evangélicos y los anticiencia; que Estados Unidos haya buscado invadir Venezuela; que Donald Trump haya movilizado a sus partidarios para desconocer los resultados electorales en la “mayor democracia del mundo”; que la presidencia de Lula da Silva haya sufrido un intento de golpe a días de haber tomado posesión en su tercer período presidencial; que la embajada de México haya sido invadida por el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, violando todo acuerdo internacional a nivel mundial, etc. Todas estas son tácticas de erosión de la democracia, que no pueden explicarse como eventos aislados, sino que se concatenan en el marco de una continua y paulatina degradación de las formas democráticas.

En este sentido, también seguramente el *lawfare* se agudizará. El objetivo desde los proyectos que buscan recuperar una agenda neoliberal conservadora es asegurar lo acontecido en Argentina donde, luego del retorno del neoliberalismo “conciliador” con Macri, vuelve al poder del gobierno un neoliberalismo descarnado con Milei. Todo lo acontecido invita a repensar sobre la “banalidad del mal” de Hannah Arendt.

Ecuador, que es uno de los casos paradigmáticos de lo que el neoliberalismo vino a develar, permite visualizar lo que ha implicado el desmantelamiento del Estado, y la articulación de este con el narcotráfico. El crecimiento exponencial de los homicidios deja translucir que el nuevo neoliberalismo configura una necrodemocracia. No sorprenderá que en los países con gobiernos autoritarios neoliberales se aceleren procesos similares, pero con mayor violencia, aprovechando la “legitimidad” que les da la figura de los “estados de excepción” o el voto popular como es en el caso de Argentina.

Por el lado contrario, la situación no resulta pacífica tampoco. El 2019 será recordado en América Latina, y quizá en el mundo, como un año de movilizaciones sociales masivas. La denominada “década ganada” tuvo un impacto estructural en sus pueblos al romper con la adaptación de expectativas a las paupérrimas circunstancias en las que solían vivir los olvidados del continente.

Los de clase media, por su parte, sintieron que pueden y desean ser parte de la elite. Los gobiernos conservadores llegaron a desmantelar la materialidad conseguida por las poblaciones tanto en términos objetivos como subjetivos. En muy poco tiempo hubo reacción en las calles para frenar las recientes recomposiciones neoliberales, que ha sido y sigue siendo reprimida violentamente por las fuerzas armadas y las policías de los países, especialmente en Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. La indignación también llegó a Estados Unidos y no fue azar después de lo que sucedió en el proceso electoral de noviembre del año 2018. Ahora en el 2024, el pueblo argentino constituye el actor social en donde la defensa de derechos se disputa en la calle.

La indignación puede acrecentarse con la política de la austeridad social en un mercado laboral cuentapropista, informal y subempleado que vive del trabajo diario. La gran mayoría de la población económicamente activa en la región vive de su trabajo a destajo. En el mejor de los casos, en promedio, únicamente el cuartil o quintil más rico tiene ahorros para subsistir (y, no por mucho tiempo). Según la CEPAL, la región ha tenido una tasa de crecimiento per cápita de 0,1 % promedio en la última década. La pandemia simplemente agudizó una tendencia. Luego del efecto rebote, la tasa de crecimiento volvió a ser pírrica en el 2022 (1,4 %). No es fortuito que la variación interanual promedio en la región entre el 2022 y 2023 sea decreciente, igual a -0,6 %. Esto implicará una caída de la demanda debido a la menor inversión, que agudizará la lucha por la vida.

A dicho escenario se debe sumar lo inescrupuloso que resulta cómo han atendido las problemáticas sociales ciertos gobiernos que buscan la profundización de la agenda neoliberal. La imposibilidad de garantizar la “sobrevivencia” o incluso una muerte digna, el deterioro de la calidad de vida, el malestar económico que se sufre por la caída de ventas y despidos, la reducción de ingresos por el decrecimiento económico que habrá en la región, la falta de credibilidad en las instituciones democráticas por ausencia de un Estado social que garantice los derechos básicos puede ocasionar una guerra civil a escala local, nacional o regional.

En el mejor de los casos, será un cambio radical (¿revolución?) a favor de las vidas (humanas y no humanas) pero que puede también tomar tintes distópicos. De no existir una salida democrática con intervenciones estructurales y profundas que apaguen la bomba explosiva que se está generando en la sociedad, seguramente los muertos no serán indirectamente por la acumulación sino directamente por un enfrentamiento social.

Pero si no se recupera la ética pública y se siguen manoseando las instituciones de la democracia, la salida podrá ser violenta; por derecha, a través de procesos autoritarios; o, por el lado popular, mediante enfrentamientos civiles de la ciudadanía con el Estado en la lucha por la sobrevivencia. Lo sucedido con los movimientos sociales genera esperanzas en la región, lo cual solo ha sido viable porque la democracia y la dignidad se han defendido en las calles.

Los gobiernos denominados progresistas como el de López Obrador o Claudia Sheinbaum, Luis Arce, Lula Da Silva y Gustavo Petro deberán demostrar que sí existen alternativas y que lo que les diferencia de los gobiernos autoritarios y neoliberales es que ponen por delante la vida y la democracia.

## 10. Democracia y buen vivir/vivir sabroso

Con la caída del muro de Berlín, la frase: “no hay alternativas” se instauró en el imaginario mundial. No por azar, surgió la hipótesis del “fin de la Historia” de Fukuyama (1995).

Luego del gran acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, surgió en la región el pensamiento cepalino como teoría del desarrollo que basaba su análisis en el deterioro en los términos del intercambio y en la noción de centro/periferia. Sin lugar a duda, esto dio paso a una corriente de pensamiento propio de la región que tuvo un impacto mundial.

Esta teoría, si bien hacía una lectura desde el Sur, tenía el mismo objetivo que las políticas realizadas en el Norte: la modernización capitalista. Por su parte, el comunismo tampoco interpeló la economización de las sociedades ni el fin de la acumulación, la cual se hacía desde el Estado. No interpelaban su *episteme* ni su ontología.

Desde la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, en América Latina surge una ola de gobiernos de tendencia de izquierda que plantearon claramente propuestas alternativas de sociedad. Es sobre todo en Ecuador y Bolivia que se plantea, en este contexto, la necesidad de construir la sociedad del buen vivir, de la vida buena, de la vida a plenitud que, ahora más que nunca, adquiere relevancia.

La filosofía del vivir bien es una propuesta holística en la que la economía es un componente más de la sociedad, pero no la única. El buen vivir trasciende la mirada desarrollista. Pone en el centro de prioridad a la vida, pero no a cualquier tipo de vida, sino la consecución de una vida plena, buena, digna. En el corazón, justamente, propone una real crítica al capitalismo, tanto en lo teórico y metodológico, pero sobre todo en términos políticos para viabilizar la disputa de otro tipo de sociedad.

Una de las primeras características que tiene es que no parte de “tanques de pensamiento” o de académicos, intelectuales que den luz a tal paradigma potencial. Surge de procesos históricos, democráticos, paridos por un intelecto social colectivo. Se estructura retomando la historia de los pueblos ancestrales, pero en franco diálogo con las propuestas de las poblaciones mestizas y de las luchas de los oprimidos: feministas, estudiantes, campesinos, agricultores, informales, subempleados, ecólogos.

En términos conceptuales, rompe con el individualismo teórico y metodológico que ha tenido primacía y ha sido hegemónico al menos en la disciplina económica (lo cual no es menor, al ser la disciplina hegemónica en las ciencias sociales).

En efecto, uno de los componentes constitutivos de la filosofía social de la vida buena en el proceso de deliberación democrática vivida en la región es la recuperación de la mirada y el sentido del (de los) “otro(s)”, la(s) “otra(s)” y del “nosotros”, sin perder de vista la realización individual. No es fortuito que, en Ecuador y Bolivia, en sus artículos constitucionales, se coloque en el centro del debate, más allá de la democracia representativa, la necesidad de construir una democracia deliberativa, participativa y comunitaria.

Tampoco es azaroso que frente a la economía de mercado se reconozca la pluralidad de economías, en donde su centro sea la construcción de la economía social y solidaria que existe en virtud de que el “otro” y la “otra” viven, y en donde el Estado juega un papel fundamental en la garantía del derecho a la vida buena.

Asimismo, el mandato de construir un Estado plurinacional e intercultural frente al monolítico Estado instrumento colonial en donde se reconozca la pluridiversidad de nacionalidades y pueblos que conforman al territorio es parte de recuperar a los “otros y otras” invisibilizados, silenciados.

La “otra” también es la mujer en la sociedad del buen vivir en donde se parte del reconocimiento de la pluralidad de identidades y se reconoce –entre otros aspectos– el trabajo que implica el cuidado de “las y los otros” realizado principalmente por ellas. Explícitamente se habla en los artículos constitucionales de la importancia de la economía del cuidado y del papel vital de las mujeres en esta economía.

De la misma forma, frente al mundo xenófobo, se conmina a construir el derecho a la movilidad humana, derecho a la libre residencia y la ciudadanía universal en donde todos “los otros” del mundo estemos incluidos.

Y, en la disputa por recuperar la mirada de “el otro”, “la otra” y el nosotros se rompe con el *logos* antropocéntrico al colocar a la naturaleza como sujeto de derechos. Bajo esta perspectiva, la otra también implica una relación armoniosa con la naturaleza o la Pachamama. Si bien la vida es lo más relevante, esta no tiene sentido sin los otros, las otras y sin construir juntos el nosotros.

En el marco institucional también han existido innovaciones que han buscado transformar las estructuras tradicionales del Estado neoliberal, impulsando cambios radicales en su configuración. Ejemplos son el Estado Plurinacional en Bolivia y Ecuador, los Derechos de la Naturaleza reconocidos constitucionalmente en ambos países, así como la elección democrática del Poder Judicial en Bolivia y México. Asimismo, se podría destacar la nueva división de poderes con la inclusión del Poder Ciudadano y el Poder Electoral en Venezuela, Bolivia y Ecuador, así como las primarias internas obligatorias para los partidos políticos en Argentina y Uruguay. Además, la democracia participativa se ha fortalecido en la región a través de mecanismos como los referendos y consultas populares (Ecuador, Venezuela y Bolivia), mientras que las autonomías indígenas han cobrado relevancia en países como Colombia y Nicaragua. Más allá de los problemas que ha tenido su implementación, a diferencia de la democracia delegativa liberal se ha buscado caminar hacia una democracia con *demos* real. Finalmente, sería importante subrayar la incorporación de normas de interculturalidad en las Constituciones de Ecuador y Bolivia, que buscan reflejar la diversidad étnica y cultural de sus sociedades.

América Latina y el Caribe viven momentos destituyentes/constituyentes. A lo que fue el “primer” tiempo de la ola progresista, en este segundo tiempo nuevos países dan la disputa por refrescar la agenda de vivir dignamente. Bajo diferentes formas, como procesos constituyentes (Chile o Colombia) y reformas constitucionales, los pueblos buscar reinaugurar alternativas de vida social. Todo Bukele tiene un Petro; todo Milei, tiene un López Obrador.

La nueva agenda parece marcarla el presidente Gustavo Petro desde Colombia, quien además de las políticas redistributivas implementadas por los gobiernos nacional-populares durante la primera ola, plantea relacionar la paz con la vida (el medio ambiente)<sup>28</sup> como puntos nodales de convergencia de un nuevo modo de acumulación y de convivencia social, poniendo el centro en la distribución primaria del ingreso y en la propiedad de los medios de producción, adquiriendo centralidad el ordenamiento social de las tierras rurales, la reforma agraria, la restitución de tierras a las víctimas de despojo en el marco del conflicto armado, la titularización y actualización del catastro, entre otras. Tal perspectiva rompe con la lógica de la búsqueda de igualdad sin romper relaciones de poder. Colombia ensaya ir un paso más adelante. Luchar por una igualdad democrática que no solo redistribuya después de impuestos, sino que empodere distribuyendo medios de producción. Más allá de la viabilidad política o no en Colombia, tal agenda marca la hoja de ruta de un debate que deben dar los movimientos nacional-populares en el marco de la crisis global energética, ambiental (cambio climático), democrática y de acumulación.

---

<sup>28</sup> “La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas”.

Así como durante el primer tiempo progresista se plantearon horizontes de sentido como el Buen Vivir, Sumak Kawsay, Vivir Pleno, Alli Kawsay, en el segundo momento que vive la región vuelve la imaginación social al poder que se plantea paradigmas alternativos como el “Vivir Sabroso” o el “Humanismo mexicano”. Cada país camina con diferentes intensidades y a diferentes velocidades. ¡Pero resiste y camina!

Necesitamos de la acción colectiva, de la coordinación; necesitamos del Estado; necesitamos del otro, la otra, de nosotros. Esto evidencia la necesidad de construir un *logos* biocéntrico en donde no pueda pensarse la vida humana sin la vida no humana o de la naturaleza.

En el marco de las urgencias que parten con la necesidad de garantizar una muerte y vida dignas y en donde se requieren propuestas inmediatas tales como el no pago de la deuda externa ilegítima e ilegal, el posponer todo pago de deuda ciudadana al sistema financiero, el garantizar estabilidad laboral y el pago de sueldos o de un ingreso ciudadano universal para romper el estado de necesidad, el garantizar bienes básicos y alimentos a los más pobres, el generar reformas tributarias radicalmente progresivas con impuestos a los grandes patrimonios y herencias, es necesario recuperar el pensamiento latinoamericano y la propuesta de construir otra sociedad, como es el paradigma del buen vivir.

Mientras se busca tal conquista, la pandemia también abrió una ventana para pensar políticas contrahegemónicas de transición, tales como edificar regímenes laborales alternativos en donde se regularice el trabajo digital, se recupere el derecho a la desconexión contra la (auto)explotación del 24/7, se proponga una agenda radical de redistribución del tiempo para el vivir bien. En el campo de la ciudadanía, es vital pensar normativas para construir nuevas formas de ciudadanía digital, en donde las plataformas sean construidas con una perspectiva de constituirse en bienes públicos o comunes, de acceso universal y relevancia sistémica para la toma de decisiones.

Asimismo, estas políticas de transición deben impulsar un modelo de gobierno de los conocimientos en el cual se genere un complejo científico que permita no solo el diálogo de saberes sino también una apropiación colectiva sin ningún tipo de discriminación biopolítica, poniendo en el centro las vidas y la garantía de su reproducción en el marco de una justicia intergeneracional.

La conciencia histórica de la necesidad de un cambio radical –que frente a la necropolítica del capitalismo– ya ronda las calles, las alamedas, los parques de nuestra América Latina. Es esa misma conciencia y lucha histórica que hará que, si bien en el corto plazo puedan profundizarse las dictaduras democráticas y el autoritarismo neoliberal, también vuelva la indignación de octubre, noviembre y diciembre de 2019 a las calles, y con ello, se vuelva a poner en el centro de la sociedad lo único que tiene valor *per se*: la vida (buena, plena, digna) del ser humano y de la naturaleza.

En América Latina, el neoliberalismo no dará nacimiento a nada nuevo: es solo un recordatorio del mundo poco humano en que vivimos. La historia la cambian los pueblos y en América Latina la semilla de la transformación se sembró hace ya algunos lustros, y será a través de la unión de movimientos sociales y políticos que se viabilizará el disfrute social de sus frutos emancipatorios.

Soplan vientos de resistencia creativa en la región, como lo han demostrado las continuas y persistentes luchas por la democracia en los años recientes. No cabe duda de que, si sumamos las fuerzas, si luchamos juntos, si asumimos principios y consensuamos proyectos en grandes objetivos comunes, volveremos a recuperar la democracia en nuestra región.

## **11. A manera de epílogo. Democracia para la vida, democracia para la paz como vacuna contra el narconeoliberalismo autoritario**

América Latina se encuentra en una encrucijada. Cuando se dice que está en una encrucijada es porque como región está disputando qué camino seguir. Existe la vía distópica de caminar por la necropolítica en la cual se consolida el narconeoliberal autoritario; o transitar hacia una vía más utópica en donde se entra en una segunda ola de gobiernos progresistas, de tal forma que se pueda seguir disputando la construcción de la sociedad del buen vivir, del vivir plenamente, del vivir sabroso.

Lejos de las posturas de las ciencias políticas clásicas que suelen estudiar la democracia a través de las reglas formales, los capítulos contenidos en estas páginas han buscado indagar sobre la economía política de la democracia; es decir, cuál es la configuración de las opciones materiales que tienen y buscan nuestros pueblos para poder decidir sobre las múltiples alternativas de convivencia social.

Es claro que en el autoritarismo neoliberal la salida es individual. No hay proyectos colectivos ni porvenires compartidos. La otra vía busca construir la posibilidad de vivir juntos.

A nivel geopolítico existe una crisis hegemónica que, aunada a la crisis del capitalismo, es tan profunda que hace que incluso el matrimonio entre neoliberalismo y democracia representativa no sea sostenible. Al igual que en los setenta, parece ser que entramos en un ciclo perverso de recesión económica, hiperconcentración de la riqueza social y asedio a las democracias.

La democracia hoy en día es una traba para el capitalismo. Podríamos señalar que la mejor estrategia para frenar el neoliberalismo es la democracia. Pero no la democracia liberal; o, mejor dicho, no solamente la democracia electoral. Más bien la democracia sustantiva, aquella que tiene que ver con generar las condiciones materiales de igualdad para que entre todos y todas podamos decidir libre y soberanamente qué futuro queremos vivir.

El capitalismo no se queda quieto. Es muy “ecológico” porque se recicla y vive, así sea a costa de la muerte. En estos mismos momentos, en su transición, vuelve a intentar recuperar las ganancias a través de nuevas formas rentistas, de explotación y de alienación de las grandes mayorías.

Las economías del Sur Global lo viven con sus propias particularidades. El capitalismo busca formas de sortear la transición. En la región, la crisis y su transición se expresa en la precarización de la fuerza de trabajo, en donde, luego de los procesos de desindustrialización, el ejército de reserva tiene cuatro opciones: ser un autoexplorado configurando el grupo de trabajadores al que se le expropia su tiempo a través de las plataformas digitales o del trabajo comercial y la prestación de servicios ambulantes; ser parte del grupo explotado del modelo de

exportación de fuerza laboral incorpóreo en los pseudoprocesos de industrialización (maquilas), que llegan con buena parte de la inversión extranjera directa; ser trabajador de la industria del narcotráfico y la muerte; o migrar. Esto viene de la mano con incrementos del tiempo dedicado a los cuidados como medio de ahorrar recursos y como consecuencia del deterioro de derechos sociales, como la salud y del incremento de la pobreza, aunque se tenga un empleo formal asalariado. El salario ahora no necesariamente garantiza no ser pobre.

No obstante, estas páginas dejan apreciar también esperanza. Una mirada estructuralista y determinista diría que el sistema configura las condiciones de nuestros pueblos; y, difícilmente se puede hacer algo. ¡Claramente, no! Se pudo demostrar que la ideología importa y es quizá la mejor política anticíclica con que cuenta la región. En efecto, se evidenció que existe una clara diferencia en la economía política redistributiva dependiendo si el signo de gobierno es neoliberal o es popular-nacional. Mientras los primeros tienen patrones de comportamiento procíclicos en donde siguiendo a la ola reproducen desigualdad y concentración sobre todo en el 1 % más rico y en detrimento de las grandes mayorías, los gobiernos progresistas o de izquierda han generado en las dos primeras décadas del nuevo milenio patrones igualadores a favor de las grandes mayorías y en detrimento de la elite económica.

A pesar de lo mencionado, también se pueden detectar dos momentos en este nuevo milenio que configuran dos tiempos, siguiendo la metáfora futbolística. Mientras los gobiernos progresistas del primer tiempo (Evo Morales, Cristina Fernández, Rafael Correa, etc.) generaron procesos mucho más radicales redistributivos; en el segundo tiempo que está sucediendo existe mayor tibieza redistributiva en el bloque de izquierda, como son los casos de Alberto Fernández en Argentina, de Gabriel Boric en Chile o de Luis Arce en Bolivia. Todo lo contrario sucede en los gobiernos de derecha, que juegan un segundo tiempo mucho más agresivo y concentrador. No solo aquello: también más conservador, generando una nueva estrategia que es semilla de los protofascismos. Parece ser que la estrategia más eficaz para implementar el neoliberalismo es el neoconservadurismo. Es claro que neoliberalismo del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XX.

Ahora bien, si analizamos el bloque histórico de gobiernos de izquierda, se pueden sacar algunas conclusiones relevantes. Si empezamos el análisis desde el final hacia el inicio del nuevo milenio, podemos señalar que ser tibio genera las condiciones del retorno del neoliberalismo. Sin duda, Milei difícilmente existiría sin un gobierno como el de Alberto Fernández. En igualdad de condiciones históricas, sin duda, el 2 de julio ganará Claudia Sheinbaum y podrá continuar y radicalizar las políticas redistributivas empezadas por Andrés Manuel López Obrador. El futuro de Chile y Bolivia, si bien está por verse, avizora altas probabilidades de retorno de la derecha ojalá “solo” neoliberal y no fascista.

Un segundo tema tiene que ver con los gobiernos de la primera ola. Es claro que lograron romper con el ciclo neoliberal o ser una barrera para que no avance. Luego de la crisis mundial del 2008, de la que hasta ahora no se recupera el mundo, la región vivió momentos de redistribución económica y de ampliación de derechos sociales. La primera advertencia, no obstante, es que con “primero los pobres” no alcanza. Si bien fueron gobiernos que redujeron la pobreza, muy pocos dieron evidencia de cambiar la composición del pastel.<sup>29</sup> Dice mucho que, únicamente en cuatro países<sup>30</sup> (y solamente en ciertos años), se pudo concretar que el 50 % más bajo de la distribución de la población tenga más ingresos netos que el 1 % más rico. No solo aquello, pues en promedio se puede observar que las clases medias tuvieron más porción del pastel que las clases populares (50 % más bajo de la distribución). Lo paradójico resulta que son clases que luego votan por las derechas que no les beneficiaron. A diferencia de aquellas miradas que defienden que la emergencia de protofascismos es producto de los medios de comunicación y las redes sociales (los cuáles claramente tienen incidencia), es necesario discutir la producción de subjetividad como parte de las formas de reproducción de vida material.

Ahora bien, del informe se desprenden conclusiones significativas para el denominado progresismo regional. El primer tiempo de los proyectos nacional-populares en América Latina no solo fue antineoliberal sino que algunos países –como se mencionó– plantearon alternativas al desarrollo al buscar construir a través de sus proyectos constituyentes, pactos de convivencia social con innovaciones sociales superadoras al capitalismo. La sociedad del Buen Vivir, del Vivir Pleno, del Sumak Kawsay, del Alli Kausay, sin lugar a duda tocaba las fibras más profundas del modelo capitalista. Derechos de la naturaleza, modelo económico social y solidario, Estado Plurinacional

---

<sup>29</sup> Para un análisis detallado, ver apartado 3 y Ramírez (2024).

<sup>30</sup> Cristina Fernández (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), José Mujica y Tabaré Vázquez (Uruguay) y Raúl Castro y Díaz Canel (Cuba).

e Intercultural, ciudadanía universal, democracia participativa, deliberativa, comunitaria fueron algunas de las propuestas que emergían de un *general intellect* que generaban alternativas de mundos posibles.

Como bien se señaló en el segundo capítulo, los proyectos neoliberales en el momento de matrimonio con la democracia liberal retrocedieron en igualdad a nombre de la libertad y la eficiencia (de mercado). Una vez sacrificada la igualdad de la ecuación democrática, hoy en día, parece que asistimos a una nueva metamorfosis en donde a nombre de la libertad se busca prescindir de la misma democracia (Cadahia, 2024). Los golpes de Estado se hacen a través de las mismas instituciones democráticas.

Esto nos lleva un punto nodal en el debate regional y programático. La recuperación de la igualdad y la libertad implica pensar un proyecto que les otorgue otro significado. En el debate público parece ser que la libertad ha quedado en manos de la derecha y la igualdad (desprestigiada) a manos de la izquierda. El discurso meritocrático y de la libertad como no interferencia, en donde la igualdad fue denostada como homogeneizadora, hace de este principio algo no necesariamente deseado socialmente.

Haciendo una revisión de lo que fue la primera ola de los gobiernos progresistas podemos señalar que es necesario ser más finos, no solo cuando hablamos de igualdad sino cuando –sobre todo– implementamos políticas materiales que buscan disminuir brechas indignas. La primera ola trabajó mucho sobre la redistribución como mecanismo de reducción de distancias sociales y económicas. Los procesos redistributivos dentro de la misma lógica del capitalismo no necesariamente parecen generar sentidos contrahegemónicos sino prohegemónicos, como lo ha demostrado la “paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo” (Ramírez, 2016) sobre todo de las clases medias. Es claro que no es lo mismo redistribuir después de impuestos, a distribuir en el mismo instante que se genera la riqueza.

El proceso de igualdad emancipadora es aquel que rompe con las relaciones de poder: capital-trabajo, hombre-mujer, blanco-indígena/afro, nativo-migrante, etc. En otras palabras, la igualdad que se debe recuperar es una *igualdad democrática*. La igualdad democrática implica sí o sí una libertad emancipadora y no ficticia, como la que se busca en aquella que asocia libertad a revelación de las preferencias en el mercado. Los libertarios no defienden la libertad de los seres humanos ni la soberanía de los pueblos, sino la libertad de los mercados y la autorregulación de estos. ¡Eso no es libertad!

En la tercera década del nuevo milenio, la narrativa seductora parece recaer en los discursos de la derecha basados en la recuperación de identidades que confrontan con un otro/otra que resulta enemigo. Estrategias de negación del otro/a son armas poderosas para implementar políticas neoliberales de viejo cuño.

En este espacio, el progresismo ha quedado con un discurso que no necesariamente “compra” la ciudadanía porque –entre otras razones– tienen en la memoria gobiernos del segundo tiempo tibios en momentos pandémicos que requerían y justificaban radicalidad. Claro está que esto viene de la mano con estrategias comunicacionales que responden a grandes grupos económicos, no solo locales sino regionales o mundiales.

En este escenario es necesario leer el planteamiento del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro.<sup>31</sup> Un país históricamente con gobiernos neoliberales, pero con una característica particular que representa el presente y el futuro de muchos países de la región. Nos referimos a un modelo de acumulación concentrador que cooptó la institucionalidad configurando un narco-Estado.

La nueva geopolítica de la droga que cambia su eje en el momento que entra el fentanilo en el mercado de Estados Unidos, ha generado un “efecto derrame” que se está constituyendo una metástasis en la región. El eje del narcotráfico deja de estar en el corredor Colombia y México y se traslada, en diferentes intensidades, también al sur de la región.

En este marco, el pasado de Colombia es ya el presente y puede ser el futuro de la mayoría de los países de la región.

Lo relevante de la propuesta del Pacto Histórico es su planteamiento estructural para dar batalla a los problemas

---

<sup>31</sup> Para realizar un análisis sobre la propuesta del Pacto Histórico en el marco de la disputa por la democracia en la región ver Ramírez, Cadahia y López (2024).

del neoliberalismo y del narcocapitalismo. No es suficiente con redistribución secundaria del ingreso después de impuestos. El gobierno de Petro no solo no se queda en plantear procesos redistributivos o de expansión de derechos, sino que plantea una propuesta innovadora de gobierno que articula o pone en el centro la paz y la vida. El cambio paradigmático que propone el Pacto Histórico es poner en el foco del modelo de acumulación la democracia de la paz y de la vida, pero disputado a través del nudo ciego de América Latina y el Caribe: la tierra y los recursos naturales. En este marco, se podría señalar que la base de su modelo democrático y de superación del narconeoliberalismo es la triada “paz, territorio y vida”.

Dado que la hegemonía uribista se construyó a través del paramilitarismo, el narcotráfico, el crimen organizado y el narco-Estado, poniendo en marcha una contrarreforma agraria, la vía propuesta por el Pacto Histórico es una reforma agraria y de desarrollo integral del territorio que empodere a las organizaciones populares, indígenas, negras y campesinas. El Plan Nacional de Desarrollo del Pacto Histórico 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, inscribe la comprensión de la tierra como eje fundamental de la transformación de la sociedad.

La expansión del narcotráfico es producto de una sociedad latifundista que pacta con el crimen organizado. Esto no es diferente a lo que sucede en la región. El narcocapitalismo en la región decanta hacia el lado de la producción. Tal producción se concreta en los territorios para su cultivo y su distribución. Para la movilidad de la mercancía se requiere cooptar los círculos del tránsito del producto en donde el Estado juega un rol estratégico, tanto desde el punto de vista logístico como de aquel relacionado con la seguridad y la regulación financiera. Es un Estado comprado; por lo tanto, privatizado.

Claramente se trata de una contrapropuesta a la estrategia de Nayib Bukele para combatir la violencia, en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. En cambio, Gustavo Petro propone poner en el centro del debate la redistribución de la tierra como eje central para conquistar la paz y salir de la necrodemocracia. No hay que ser ingenuos, ya que se necesitan reformas estructurales en el campo de la justicia y seguridad, pero tampoco hay que ser ingenuos en creer que esta es la vía estructural de combatir el crimen organizado. Pero, cuando se habla de tierra, el proyecto programático liderado por Gustavo Petro habla de territorio, medio ambiente, soberanía alimentaria nucleados a través del reordenamiento espacial del agua.

Para contrarrestar los modelos de desarrollo primario-exportadores, Petro, al menos como horizonte de sentido, plantea la necesidad de superación del extractivismo. Tal planteamiento no deja de ser nodal en un momento en que se dan nuevos procesos extractivistas, en los que grandes corporaciones internacionales buscan territorios con nuevos recursos naturales como el litio y las tierras raras. La transición energética, tal cual como está siendo planteada, es hiperintensiva en recursos naturales; así como el capitalismo digital: la virtualidad requiere de mucha corporalidad. Y aquí surge un nuevo nudo a desatar si se quiere transitar por la ruta utópica de garantizar el derecho a la democracia y la vida. Los grandes capitalistas mundiales buscando los nuevos recursos estratégicos naturales para la transición energética mundial. Así, la disputa de los recursos naturales de los megacapitalistas del mundo viene de la mano con el control de los territorios, el cercamiento de los recursos naturales y el desplazamiento de la población producto de los circuitos crecientes del narcotráfico.

Uno de los orígenes más significativos de la desigualdad es la concentración de la tierra. Uno de los orígenes del narconeoliberalismo es el control de los territorios. La histórica deuda de romper con las diferencias indignas de riqueza que viven nuestros pueblos y la búsqueda de la paz social se puede empezar a saldar con la democratización de la tierra, el agua y la vida de la naturaleza.

La propuesta para Colombia trasciende su espacialidad y la coloca en el ámbito del sentido de una agenda geopolítica que cambia la lógica de la ética de la acumulación a partir de la destrucción, tanto de las vidas humanas como no humanas. Si no hay demanda, no hay producción; si no hay consumo de droga, no hay producción de droga. La guerra contra la droga no debe darse en las selvas amazónicas o los territorios de nuestro continente, en donde tal guerra conlleva ecocidios de grandes territorios de la región y muertes violentas evitables. El problema no está en el Sur Global, sino en el consumo de los ciudadanos del Norte. Gustavo Petro lo explicita en su discurso realizado en Naciones Unidas:

La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas,

para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la Selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas.

Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. (Gustavo Petro, 20 de septiembre 2022)

Superar la lógica del capital es poner por delante la vida; las vidas. Se pone de relieve el proyecto político del Pacto Histórico pues constituye una agenda nueva que ataca los cambios geopolíticos y estructurales y busca trascender las limitaciones que hubo durante el primer tiempo de la primera ola de los gobiernos denominados progresistas. Así, el Proyecto de “Paz y Vida” llega en un momento crucial para alimentar los imaginarios emancipatorios. En este proyecto, el florecimiento de la vida está asociado a la justicia social; y este no será posible sin un cambio en la matriz de acumulación que ponga en el centro la vida y la paz, a través de aquello que es la garantía básica de la reproducción humana y de la naturaleza: la tierra y el agua.

El proyecto político de Colombia ha puesto el dedo en las bifurcaciones históricas: o autoritarismos para la muerte o democracia para la vida; o acumulación para la guerra, u organización productiva para la paz. Latinoamérica y las fuerzas democráticas necesitan un nuevo Pacto Histórico. ¡Porque el antídoto al narconeoliberalismo autoritario es la democracia para la paz, es la democracia para las vidas!

### **11.1. Decálogo de acciones estratégicas para una democracia con demos**

La evidencia empírica de este libro es clara: para que la democracia con demos sea viable debe articularse a una nueva socioecología/economía política de la riqueza; pero para que exista la posibilidad de disputar un modo alternativo de acumulación es necesario que prospere una democracia democratizante y democratizadora. Empero, ninguno de los dos será posible, si en la disputa por la democracia y por las nuevas formas de generación de riqueza no se forja una organización y una subjetividad social con conciencia de transformación emancipadora y empática con el otro y la otra para generar las condiciones del deseo de vivir juntos.

Bajo lo expuesto, es pertinente formular lineamientos que permitan canalizar una hoja estructural de acción y de investigación para que el futuro de la democracia no continúe con su lógica necro sino que camine hacia la configuración de una democracia con demos, una igualdad democrática y una democracia como igualdad. Es claro que tanto en su transición como en su fin esto implica trascender a la lógica de acumulación capitalista. A continuación, se plantea acciones estratégicas para caminar en tal dirección, en el marco de las principales conclusiones que se desprenden del presente libro:

**I. Disputar el sentido del valor o del valor de las cosas al valor de la vida (buena):** La clave de la crítica al capitalismo radica en la revalorización del valor. Tal mutación implica una transformación estructural del sentido del tiempo pues si -como señala Marx- toda economía es, en última instancia, una economía del tiempo, lo que está en disputa es un sentido diferente del valor del tiempo, dado que el problema a superar está en cómo el capitalismo valora el mismo. Esto implica que la estrategia de un proyecto emancipador radica en superar la principal contradicción del capitalismo que es de índole temporal. Los avances tecnológicos que permiten liberar tiempo para una potencial emancipación, el capitalismo los usa para su reproducción. Sin la apropiación de este tiempo liberado (plusvalor), el capitalismo se desestructura. En este marco, la productividad del capitalismo implica generar un sentido del tiempo como velocidad como aceleración que solo es funcional a la reproducción del sistema capitalista: la concreción de la ganancia. Aquí la contradicción del sistema. En este marco, la disputa es por el sentido hegemónico que articula que solo lo que tiene precio tiene valor, en donde la vida (de la humanidad y de la naturaleza) también es cosificada y tiene un valor monetario.

Es necesario tener claro que la confrontación política no se centra en los procesos de redistribución ni en la distribución de la riqueza generada, sino en la distorsión que el capitalismo introduce en el significado del valor y la riqueza social. No solo eso, el objetivo principal -más allá que resulta importante realizarlo- no es ni siquiera la distribución del tiempo. Si se distribuye el tiempo sin remediar la fractura estructural

entre vida y tiempo y entre tiempo y espacio, lo que se iguala es un tiempo alienado/explotado, un tiempo cosificado. En este sentido, no se estaría democratizando el poder, sino que se estaría democratizando la alienación, (auto)explotación, o (auto)cosificación de la vida (Ramírez, 2025).

En este marco, necesitamos otra valoración del tiempo. Más allá de que el momento histórico lo requiere con urgencia dado que en las transiciones hegemónicas las fases terminales son bélicas, el sentido del valor debe estar en la vida; y, no en cualquier tipo de vida. Ésta debe ser una vida bien vivida, una vida digna, una vida plena; en donde se supere el centrismo antropocéntrico y se transite hacia un biocentrismo. Esta perspectiva implica la subsunción de la economía a la socioecología política porque la vida es más allá que la materialidad generada en el proceso de producción y consumo. Se necesita otro orden temporal para otro orden social; otra ucronía para otra utopía. En este marco, la gran pedagogía cultural y de la búsqueda de una nueva materialidad está en educar para transitar del valor de las cosas al valor de la vida buena. La disputa política es por salir del sentido común del valor ligado a las cosas, al precio, al valor de cambio, lo que implica superar la lógica del *"time is money"*. ¡Adiós la era del cronos! ¡Adiós la era del tiempo del reloj, de la velocidad de la aceleración! Bienvenido el tiempo de la vida, el tiempo del acontecimiento, el tiempo de la libertad, el tiempo de la pluralidad de tiempos; y, por qué no ¡el tiempo sin tiempo!

**II. Otra acumulación para una democracia con demos:** al analizar estas páginas es claro advertir que no es lo mismo izquierda que derecha; proyectos neoliberales que proyectos progresistas o nacional populares. Es claro que sí importa quien distribuye el pastel: si la derecha parte, se queda con la mejor parte. Hemos podido demostrar que no existen fatalismos económicos. Los ciclos económicos pueden dar estructura a la historia, pero no determinan inexorablemente su curso. Las ideologías importan y en la breve historia del siglo XXI de la región se pudo evidenciar que han servido como instrumento contracíclico de un momento mundial de crisis y recesión económica. Si hay voluntad política incluso en los peores momentos de recesión puede mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. La progresividad redistributiva no solo se ve cuando crece el pastel sino cuando disminuye. En el "quién paga los costos" de la crisis también se puede observar que las ideologías han importado en la región. No obstante, a pesar de que claramente la región vivió casi tres lustros de reducción de la desigualdad sobre todo mientras el mundo vivía una recesión que explotó en el 2008, la velocidad de la reducción no fue lo suficiente para generar una sostenibilidad igualadora que rompa con distancias indignas. Existen igualdades desigualadoras, aunque parezca contradictorio. La evidencia empírica parece señalar que procesos redistributivos con tendencia a la igualdad que no interpelan el modo de acumulación generan una subjetividad desigualadora, sobre todo de las clases medias. Por eso, la pregunta que es necesario responder es ¿qué igualdad? De estas páginas se desprende que no es cualquier igualdad la que genera una reducción sostenible de la desigualdad. Es necesario procurar una igualdad democrática, que rompa las asimetrías de poder (capital-trabajo, hombre-mujer, blanco/mestizos-indígenas, nativos-migrantes, centro-periferia, ser humano-naturaleza, etc.). Tal situación implica sí o sí no solo pensar la redistribución secundaria sino la distribución (primaria) del cómo se genera riqueza. Lo señalado conlleva poner en el centro del debate otro modo de acumulación y no solo procesos redistributivos después de impuestos. La disputa por otro sistema de propiedad y de organización económica como horizonte de sentido es una urgencia en el debate público y en la acción política. La construcción de otro sentido del valor que recupere la nodalidad de la vida no es compatible con el modo de acumulación imperante. Lo que se ha evidenciado en estas páginas es que el sistema de acumulación capitalista es incompatible con la democracia con demos. Construye democracias corporativas, privadas o controladas por élites económicas. Sin otro patrón de especialización difícilmente se puede construir una democracia con demos.

**III. Pacificar la tierra para pacificar la sociedad.** La revalorización del tiempo para la vida implica la revalorización del espacio para la vida. La turbulencia democrática de la región está articulada a la conflictividad sobre la tierra, los recursos naturales. La transición energética mundial está siendo viable a costa de la desmaterialización de los ecosistemas de la región. Estamos viviendo el inicio de un largo plazo de un proceso de "acumulación por desfosilización" que recicla el mismo capitalismo bajo otra centralidad: el litio y las tierras raras. A tal disputa del patrimonio de nuestros recursos naturales, se suma la presión ejercida sobre las extensiones de tierra necesarias para la producción de droga en la cual se incluye la privatización de las rutas para la distribución de la misma a nivel global. La nueva geopolítica de la droga implica una disputa por la tierra, la cual conlleva incentivos a mantener el *statu quo* de los latifundios. A la presión de las mineras, de los carteles se suma la presión de las grandes transnacionales tecnológicas

encabezada por Elon Musk. Este libro ha podido demostrar que la causa más importante que alimenta la industria de la droga es la desigualdad, pero también ha podido demostrar que si bien en los gobiernos nacional populares se dieron procesos de redistribución de ingreso, la reducción de la concentración del patrimonio fue muy marginal. No puede haber paz con desigualdades indignas ni con los niveles de concentración patrimonial y de los medios de producción que tienen nuestros pueblos. En este marco es necesario dar opciones productivas al campesino, al agricultor, al trabajador de la tierra y estas tienen que ser de carácter integral. A más de las políticas tecnológicas, de reforma de los sistemas de justicia y fortalecimiento de las instituciones ligadas a la seguridad, la paz sobre todo implica una reforma agraria que venga acompañada de crédito, paquetes tecnológicos, capacitación y desintermediación comercial interna y externa, subsidios para la reducción de costos. Se tiene que cambiar el modo de acumulación en donde la prioridad sea la vida sobre el dinero. Contrariamente a tal prioridad, en una economía donde los cultivos más valorados son ilegales, lo que se está sembrando es crimen. Es muerte.

El capitalismo fue posible gracias al colonialismo. La independencia política de nuestros países no implicó una independencia económica. No solo aquello, sin negar las consecuencias del intercambio desigual en el comercio mundial, urge una superación del colonialismo interno que en términos materiales implica desarticular la lógica de acumulación en la división internacional del trabajo en donde la región le corresponde ser el granero del mundo y el proveedor de materia prima. Si el capitalismo fue posible gracias al colonialismo, ahora su sostenibilidad se basa en la posibilidad de reproducción del colonialismo interno de una burguesía que realiza el capital en los circuitos de un sistema financiero articulado a paraísos fiscales por fuera de los Estados Nación. Estructuralmente no existe cambio. No existe independencia social sin independencia económica. La transformación implica un pacto social por la tierra en donde el horizonte sea la superación del extractivismo y la consolidación de una soberanía material/cultural (alimentaria, energética, económica, política y territorial). Pacificar la tierra en este sentido implica caminar en la búsqueda de eliminar/disminuir la conflictividad, la presión sobre la misma de los actores que lo disputan y compiten (transnacionales mineras, carteles internacionales, grandes terratenientes agroexportadores, transnacionales digitales) rompiendo la economía política que articula y los potencia, en el marco de dar opciones reales materiales a los que trabajan la tierra. No es fortuito que el 80% de los conflictos socio-ecológicos estén articulados a movilizaciones para prevenir actividades y proteger los territorios y los *bienes comunes* (agua y ecosistemas). El grito desesperado de la región que surge de la conflictividad señalada es salvar a la juventud, salvar a una generación que está siendo cooptada por un modo de acumulación que se recupera a través de potenciar la industria de la droga y que se encuentra desencantada -con razón- con una (necro)democracia desigualadora. Recuperar la soberanía sobre la tierra, sobre el patrimonio resulta estratégico para recuperar la paz democrática. La posibilidad de un proyecto político liberador es insostenible sin una generación que crea en un proyecto utópico emancipador que satisfaga sus expectativas subjetivas y materiales bajo nuevos sentidos del valor y nuevas prácticas materiales.

**IV. Sin democracia feminista no hay democracia con demos ni igualdad democrática.** Uno de los cambios hegemónicos más importantes que sucede en la región y en el mundo es producto de las luchas feministas. Podríamos señalar que el principal movimiento social que existe en la región es el feminismo y que sus luchas están configurando el sentido subjetivo social. La evidencia empírica ha demostrado que las mujeres tienden a tener una ideología de izquierda que defiende la democracia, la igualdad, la naturaleza y es anti-xenófoba si se compara con el hombre, quienes tienden a tener -relativamente- posiciones conservadoras, tradicionales y antidemocráticas. Las consignas "Ni Una Menos", "Vivas nos queremos", "Mi cuerpo, mi decisión", "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", "Rompe el techo de cristal", "Nos queremos libres, vivas y unidas", "No somos frágiles", "Lo personal es político", "No fue suicidio, fue feminicidio", "Cuidar sin descuidarse", "Cuidar también es trabajo", "No es amor es trabajo no pago", "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras" han configurado una disputa de transformación social sin precedentes en la historia de nuestras democracias. Se podría señalar que la emergencia de una derecha fascista es producto de la defensa de sociedades tradicionales que luchan por mantener las sociedades de los privilegios, siendo una estructurante el patriarcado. Tales reivindicaciones de los movimientos feministas deben ser leídas en el marco del entendiendo pleno de las injusticias históricas que recaen sobre ellas, pero también sobre los cambios demográficos que se vive en la actualidad y que afectan de manera desigual. La reducción de la tasa de fecundidad, el aumento de la participación laboral, el incremento de divorcios ha reconfigurado la familia, diversificándola, pero sobre todo incrementado el número de hogares encabezados por un

solo progenitor, especialmente por madres solteras. En el marco de una interpelación a asimetrías de poder históricas y reconfiguración de nuevas, las luchas feministas, sin duda, constituye la base de la centralidad de una revalorización del valor centrada en la vida digna y justa. No obstante, lo señalado, se desprende de la investigación también que si bien las mujeres tienen ideología de izquierda con los valores señalados no necesariamente se sienten identificados con los proyectos políticos progresistas. De acuerdo a la evidencia regional se puede afirmar que una mujer no vota necesariamente a los partidos políticos de izquierda, empero sí vota en contra de los proyectos patriarcales, machistas, xenófobos. La batalla cultural y material de los movimientos feministas desafía las apuestas societales conservadoras y el status quo, al poner en el centro del debate la configuración de estructuras familiares violentas e injustas, sistemas productivos sostenidos en trabajos no reconocidos —principalmente realizados por mujeres—, espacios públicos donde el tránsito está marcado por el miedo, corporalidades ajenas a su propio deseo y a la posibilidad de ejercer el autocontrol. Tal interpelación ha implicado pérdida de privilegios de los hombres que se sienten identificados con aquellos proyectos que defienden la tradición. Se puede señalar que la victoria de Trump se debe a las preferencias electorales de los hombres (10 puntos porcentuales de diferencia frente a las mujeres) e incluso más específicamente de los hombres latinos (17 puntos de diferencia). Como se demostró, la victoria de Ignacio Lula Da Silva fue gracias a un voto mayoritario de las mujeres. Asimismo, los electores que más se opusieron a Javier Milei fueron las mujeres; o, las que apoyaron más la superación de la Constitución del dictador Pinochet fueron ellas. Más allá de que existe evidencia en donde las mujeres marcaron la diferencia para que ganen proyectos neoliberales en la región, ésta parece ser consecuencia de la falta de coherencia de los proyectos progresistas de asumir las luchas feministas como parte del proyecto de transformación histórica. El neoliberalismo se apalanca en el neoconservadurismo para recuperar su agenda política. Queda claro que la superación de la necrodemocracia solo es viable si se concreta un proyecto que materialice una democracia feminista que es una democracia para la vida que camina hacia una República de los Cuidados.

**V. Frente al “pueblo contra el pueblo”<sup>32</sup>, la unidad de las luchas para disputar el Estado y potenciar la comunidad.** La crisis del capitalismo y sus estrategias de recuperación de la tasa de ganancia del capital a nivel mundial ha conllevado una reorganización del mundo del trabajo tanto en el centro como en la periferia. El neo-extractivismo, el fortalecimiento de la narco-industria, la desindustrialización no han conducido a recuperar un ciclo positivo económico en los países de la región. La región atraviesa un bajo crecimiento que genera pocos nuevos puestos de empleo. De acuerdo a la CEPAL, mientras el crecimiento en los 80’s fue del 2%, en la última década (2014-2023) fue tan solo del 0.8%. El correlato es la creación de empleo que es igual al de la década de los cincuenta. La precarización en el mercado de trabajo ha implicado la emergencia del trabajador pobre: estar asalariado no implica que no se viva por debajo de la línea de pobreza. La alta informalización -a su vez- conlleva otra relación laboral que parece estar diluyendo la conciencia de clase y articulando una lógica de enfrentamiento intraclase. La tradicional lucha de clase parece ser sustituida por “pueblo contra pueblo”: el enemigo es mi vecino. En este escenario se sube al tren de la estrategia cultura de las derechas neoliberales la configuración discursiva de basar su acumulación política articulada a las reivindicaciones identitarias que son las antítesis de las luchas sociales: “las luchas feministas son antifamilia y pro-muerte”, “los pobres son vagos”, “los jóvenes narcos”, “los migrantes ladrones que quitan puestos de empleo de los ciudadanos nativos”; y, los “ecologistas son retrasa pueblos”. Lo irónico resulta que dichas luchas sociales son asociadas con la agenda de proyectos políticos populares; empero, no en pocas ocasiones los movimientos sociales -no sin razón- no simpatizan y no se sienten representados políticamente por los gobiernos o partidos progresistas. Paralelamente, el avance del capitalismo de plataformas dispersa el sindicalismo lo cual debilita los partidos de trabajadores. La lucha de clase se diluye. El sentido social es “sálvense quien pueda”, que tiene su correlato en “me salvo solo”, lo cual genera un sentido de competencia con el otro, con la otra que se encuentra -además- en igual condición sociales precaria. A tal perspectiva debe sumarse el desentendimiento delegativo de la política social a la familia en donde se genera una suerte de privatización de la política social. Lo señalado sucede en el marco de una inalterable pero sumamente concentrada distribución de la riqueza en donde el 1% de la población tiene casi la mitad del pastel (45%)

---

<sup>32</sup> Un ejemplo de cómo la derecha realiza acciones deliberadas de dividir a la sociedad en el campo de la política de seguridad se puede encontrar en el artículo que escribo con Juan Guijarro titulado “Pueblo contra pueblo: Estado de guerra interna, polarización cultural y muerte de la democracia en Ecuador”, que será publicado por CLACSO y el Colegio de México en el 2025.

y el 50% inferior tiene menos del 1% de la torta (0.6%). Frente a tal escenario se necesita una pedagogía y persuasión democrática para unir las luchas sociales y de estos con las luchas políticas por un Estado democrático que empodere y fortalezca los territorios y comunidades locales. Milei y el nuevo capitalismo de plataforma parece que configuran una nueva tipología del neoliberalismo. Ya no solo se busca un “Estado mínimo” sino incluso se defiende el “no Estado”. Este neoliberalismo 2.0 articula la acción económica con las grandes corporaciones transnacionales. Se genera una gobernanza corporativa privada de grandes transnacionales (sobre todo digitales) de alcance mundial que estructuran un “anarquismo capitalista” (como lo ha denominado el actual Presidente de Argentina). En este marco, este casi cuarto de siglo del nuevo milenio ha demostrado que con “Estado para el pueblo, pero sin el pueblo” no alcanza; pero menos alcanza “pueblo sin Estado”. Si bien el Estado ha sido el instrumento de reproducción del sistema, resulta una agenda antisocial creer que no hay que disputarlo a la par de transformarlo. Hoy por hoy, parece ser, que el autonomismo estatal hace el juego al neoliberalismo que busca implosionar al Estado desde adentro del mismo Estado. Pero claro está también que la agenda implica repensar una estructura estatal que consolide una verdadera independencia de los poderes económicos (trans)nacionales reales y que no solo se estructure el mismo bajo formas anticuadas institucionales que no las toma en cuenta.

**VI. Lo Nacional de lo popular es la Matria Grande.** Los proyectos nacional populares han basado su agenda en la defensa del Estado Nación. En el actual sistema del capitalismo que es post-estatal, la búsqueda de soberanía pasa no solo por recuperar el Estado para el bien común. De hecho, si bien se necesita recuperar el Estado, esto es insuficiente para garantizar autonomía de gobierno en un proyecto histórico soberano.

En América Latina y mientras no se configura otro modo de acumulación alternativo al vigente, lo Nacional de lo popular es la Matria Grande. La integración regional no es un esnobismo. Es una necesidad de supervivencia de nuestros pueblos y es la única garantía de conquistar la soberanía de nuestros territorios.

Tal situación no solo implica recuperar la agenda de CELAC y de UNASUR. Implica no fallar en la conformación de una nueva arquitectura financiera regional incluido una moneda común regional; en recuperar los consejos de ciencia, tecnología e innovación, de seguridad o de salud; la configuración de carteles de países productores de Litio o de otros recursos estratégicos; en la sustitución de la OEA como espacio de resolución de conflictos democráticos en la región, sino también encierra estrategias que busquen una integración en el marco de la nueva geopolítica mundial en donde el articulador sea la misma región. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente la centralidad multipolar no debe ser los BRICS sino los LATIN-RICS. Si bien el liderazgo podría retomarlo Brasil también podría ser colectivo (Brasil, México, Colombia) pero siempre como representantes de los países de América del Sur, centro América y el Caribe. Sin duda, esto implica pensar una integración política lo cual conlleva que se debe ceder soberanía en algunos asuntos a la región frente a las perspectivas internas de la unidad Estado Nación.

No obstante, la experiencia de la disputa que se vive en el continente implica pensar que la integración no solo puede pasar por la unión de los Estados sino que debe ser también la unidad de los pueblos. Esto conlleva empujar aquellos espacios que buscan concretar la construcción de la Matria Grande desde abajo como son el foro de integración para una América Plurinacional (RUNASUR), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otros. La integración debe ser por “arriba” y por “abajo”, en donde las cumbres también sean de las bases de los movimientos sociales que comparten agendas de lucha a lo largo del territorio de la Abya-Yala. El punto de partida de esta agenda pasa por el consenso de construir la ciudadanía latinoamericana y caribeña, en donde exista portabilidad de derechos y obligaciones y en donde no exista competencia entre salarios mínimos de miseria para atraer la inversión extranjera directa.

En la coyuntura de transición hegemónica el campo de batalla se amplía, el tiempo se comprime, por lo cual la batalla en cualquier territorio de la región es nuestra batalla. A diferencia de juegos de suma cero redistribuidores de poder, pensar la Matria Grande como horizonte ampliado de destino implica pensar un juego cooperativo de suma positiva en donde se busca agregación de poder y no división ni supremacía de un poder frente a otro. Si los proyectos conservadores neoliberales tienen como proyecto la acumulación de corporaciones transnacionales, los proyectos populares no pueden tener como espacio de articulación el Estado Nación exclusivamente. No integrarnos es postergar ser colonia.

En el marco de lo señalado, ¿hay que aliarse con la potencia en declive pero aún dominante en la región, o buscar alianzas con las potencias contendoras? Ni con unas ni con otras. América Latina debe aliarse con América Latina (Ramírez y Guijarro, 2022c). Para cualquier acercamiento ya sea a la potencia en decadencia o a la potencia emergente, primero debemos adoptar la dimensión de bloque regional (ídem).

**VII. Transformar la universidad, defender la (búsqueda de la) verdad y la razón pública.** No hay democracia sin deliberación. Una de las principales promesas de la modernidad fue que los conflictos sociales serían dirimidos a través de diálogos pacíficos y en sistemas de justicia públicos justos. Una de las evidencias que arrojan estas páginas es el avance de la defensa ciudadana del dogma religioso frente a la verdad científica. En América Latina evidencia una diversificación en las creencias y prácticas religiosas, con una disminución en la proporción de católicos y un aumento en la afiliación a iglesias evangélicas (WVS). La libertad de culto sin duda es un derecho humano. Pero el dogma no puede ser el argumento defendido en una deliberación democrática. Si todos argumentamos con el dogma, esto constituye la muerte de la deliberación al no existe la posibilidad que a través de la dialéctica prevalezca el mejor argumento. Ahora bien, al problema de la emergencia del dogma como argumento democrático se debe sumar el asedio a la ciencia. Irónicamente podríamos decir que vivimos momentos en donde existe un elogio a la ignorancia. No fortuitamente han surgido en América Latina los “terraplanistas” o los que creen que el cambio climático es un mito o una invención ideológica. El negacionismo científico representa hoy en día un problema para la democracia. No puede haber deliberación democrática en sociedades en donde reine el dogma o la negación de la ciencia. La democracia necesita que el mejor argumento prevalezca ya sea el científico o el que proviene de otras formas de saberes y de argumentaciones superando procesos epistemicidas, pero lo que no puede prevalecer es el: “es así porque yo creo”, “es verdad porque yo digo”.

A lo mencionado, es necesario poner en el centro del debate la construcción deliberada de la mentira o de las medias verdades: la democracia *fake*. Es más que demostrado que en la esfera digital (mal llamada pública) existen procesos deliberados de producción de mentiras. Si bien desde un punto de vista científico no se puede decir que debemos normar el derecho a la verdad, al menos es necesario defender en la democracia el *derecho a no ser mentido*. El debate público sobre la mentira está ocasionando -como bien señala Hannah Arendt - la imposibilidad del reconocimiento de lo bueno o malo; es decir, la imposibilidad de que prospere una ética pública. Sin ética pública difícilmente puede salir a flote la democracia.

En este contexto, es claro que deba existir una estrategia deliberada de asedio a la universidad en general, pero, sobre todo, hacia la universidad pública. El objetivo en este nuevo neoliberalismo no es solo buscar la privatización de la universidad dado que constituye un negocio rentable. El sentido de la universidad en la sociedad es parte de la disputa cultural. Al sistema le resulta un problema la democracia y parte del ataque sistemático a éstas se ancla en diluir el impacto de la razón pública. La principal institución encargada de la búsqueda de la verdad es la universidad; y, como es sabido en América Latina, la principal institución que genera conocimiento y tiene como misión producir y resguardar la verdad es -sobre todo- la universidad pública. En este marco, no solo es necesario desprestigiar la ciencia sino también a la universidad y a sus académicos. No es azar que cuando llega al poder del Estado presidentes neoliberales o autoritarios buscan recortar fondos públicos y desacreditar el quehacer científico de los investigadores y académicos. No solo aquello, buscan dismantelar las institucionalidades creadas como evidencian los casos de Bolsonaro, Milei, Noboa/Lasso, Ortega entre otros.

Pero el debate es más estructural. La universidad siempre fue un reducto de la defensa de los derechos y la democracia en la región. Se podría decir que -en la región- en el marco de sus funciones históricos de transformación social, la universidad jugó un rol más estructural en la defensa de la democracia que en la transformación de la matriz productiva, en donde fue un jugador estratégico dentro del sistema de acumulación capitalista. Si bien se pudo evidenciar que existe reductos críticos estudiantiles que siguen jugando un rol público fundamental en defensa de la universidad, la democracia y los derechos sociales, llama la atención y es necesario advertir el cambio que parece estar sucediendo en la región relacionado con la formación ideológica de los ciudadanos que pasan por la universidad. Se ha podido demostrar que existe un cambio de sentido ideológico. Mientras hace una década atrás la mayoría de los ciudadanos que pasaban por las aulas universitarias tenían una ideología de izquierda, hoy en día es más probable que tengan un pensamiento de derecha. Pero ¿qué es ser de derecha según la investigación? Tener

una ideología de derecha según la evidencia es no defender la democracia, la igualdad, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y ser xenófobo. Dicha situación conlleva un debate nodal. La universidad en la región no solo requiere ser pensada en tanto el rol que debe jugar en el campo de la formación de profesionales y de producción científico-tecnológica dado la crisis y la transición capitalista que vive el mundo. Resulta fundamental que las reformas universitarias pongan en el centro de sus objetivos la formación de ciudadanos demócratas y de seres humanos empáticos, para lo cual resulta central el retorno de las humanidades y las artes en el proceso educativo y en la generación de conocimiento de cualquier carrera universitaria. La defensa de la universidad pública resulta estratégica en la resistencia a la arremetida de derechas con tintes fascistas.

La condición de posibilidad de que una universidad juegue un rol estratégico en la transformación productiva es que prospere los principios democráticos en nuestro continente. Sin duda, el (narco)neoliberalismo autoritario se consolida en el *statu quo* que juega la región en el mundo en la división internacional del trabajo. (Esto implica dejar intacto el patrón de especialización productivo de la región.) La democracia no prosperará si se diluye la razón pública como instrumento de deliberación. En este marco, defender la universidad es defender la democracia; pero para que dicha defensa tenga un potencial multiplicador en la esfera pública es urgente recuperar y reinventar una universidad radicalmente democrática y democratizadora.

**VIII. Desprivatizar la democracia, la captura de los sistemas de justicia y los medios de comunicación:** El libro de Julia Cagé (2021), *"The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What to Do About It"*, explora cómo el poder económico influye en la política moderna. La autora argumenta que el dinero desequilibra la representación cívica y democrática al dar a los ricos una voz mucho más fuerte en el proceso político, y esto es evidente en la desproporción de las donaciones de los partidos que representan a las élites frente al dinero que disponen los partidos de izquierda.

Cagé argumenta que los sistemas democráticos occidentales están en función de los intereses monetarios de los grandes financiadores de los partidos políticos; es decir, *"quien paga, gana"*, a lo que añadiríamos, *"quien paga, manda"*. En este marco, se puede hablar de una democracia privada vs. una democracia pública. Las donaciones privadas sin límite, ponen no solo en evidencia el contenido programático de los candidatos y partidos que son *"sponsorizados"* por los inversionistas, sino que se apropian de la democracia como bien público. Supone el final de los partidos políticos y el triunfo del dinero como partido único, señala la autora. En este marco, a través de diferentes mecanismos, el pago de la campaña se hace a través de diferentes acciones u omisiones particulares: políticas públicas, normativas, información privilegiada, sistemas de justicia, cargos en puestos estratégicos como empresas públicas o entidades de regulación. Uno de los orígenes de la acumulación concentrada de riqueza o de su perpetuación está asociado al vínculo sistemático entre financiamiento, procesos electorales y *"pagos"* gubernamentales. Son mecanismos que privatizan la democracia, capturan el Estado y generan acumulación concentrada de la riqueza. Este es quizá uno de los procesos políticos más regresivos en la democracia representativa moderna.

Los grandes capitalistas entendieron que financiar una campaña no es un gasto sino una inversión. Para muestra un botón: Elon Musk donó 119 millones de dólares para la campaña de Trump, y al siguiente día las acciones de TESLA, su empresa más importante, subieron 13% en su valor, es decir, su inversión en campaña tuvo una rentabilidad de 11000%, pasado sus acciones de 411 millones a 13.000 millones de dólares.<sup>33</sup>

La privatización de la democracia tiene que ver también con cooptación de los sistemas de justicia. Si se analizan los ciudadanos que pertenecen al 1% más rico de la población, no es difícil encontrar los casos en que estos han ganado juicios al Estado. Estudiar los juicios de los multimillonarios de la región que tienen contra el Estado sin duda develaría la economía política de la injusticia en países que el equilibrio de poderes debe estar centrado en la separación entre los poderes económicos y el Estado y no exclusivamente -como dicen los liberales- entre poderes del Estado. En el lado contrario, como se ha demostrado, las cárceles están llenas de pobres, jóvenes y migrantes. Esto implica no escindir la

---

<sup>33</sup>Ver <https://cnnespanol.cnn.com/2024/11/06/elon-musk-aposto-por-trump-lo-que-gana-y-pierde-con-victoria-trax/>.

justicia de la justicia social. El modelo de desarrollo imperante es un sistema que en sus entrañas genera injusticias; vive de las desigualdades, de la explotación y de la extracción de vida.

El debate señalado conlleva uno más profundo que tiene que ver con la necesidad de generar nuevas instituciones Republicanas. La separación de poderes de la democracia liberal lo que real mente separa es la administración del sistema legal de justicia de la justicia social; e incluso, para la construcción de sentido hegemónico en el debate público articuló la administración de justicia con el sistema comunicacional de los *mass media* privados. Las sentencias se discuten en los noticieros privados. No solo se privatiza el proceso electoral de la democracia sino la distribución de justicia. En este marco, la democracia requiere realmente superar la institucionalidad liberal que simula una ficticia separación de poderes. Si se busca un Estado autónomo de los poderes económicos reales como son la banca, los medios de comunicación, las grandes transnacionales digitales, entre otros, es urgente repensar una institucionalidad democrática que reinvente lo público Estatal.

**IX. Pagar la deuda ecológica y social para construir soberanía y superar el colonialismo interno económico.** Resignificar el valor implica también generar un debate público por fuera de la lógica del valor de cambio que centra la mirada en el capital. No obstante, es necesario tener claridad que tal cambio implica una transición. En tal interregno, es necesario ir configurando el sentido del cambio. No se podrá caminar en tal dirección sino se da otro sentido a la economía política de la deuda. Esta ha sido el mecanismo para generar una pseudo independencia de nuestros países. La lógica del “como si”... Se debe tener claro que no existirá soberanía de los pueblos si la deuda sigue jugando un rol que pone camisas de fuerza a tomar decisiones económicas y sociales soberanas que posibiliten nuevos patrones de acumulación autónomos de los países de la región. La trampa de la deuda, ha generado una lógica en que ésta es utilizada para perennizar la posición de nuestros países de ser exportadores de bienes primarios pero importadores de bienes secundarios industrializados y terciarios con alto valor agregado de conocimiento. No obstante, la lógica expoliadora es aún más perversa. Los acuerdos de deuda buscan que éstos garanticen el pago de la deuda de capital de obligaciones al exterior del sector privado. Es una deuda que no prioriza la inversión pública. No solo aquello, las deudas del siglo XXI, como bien lo documentan las mismas fuentes del FMI, genera fuga de capitales, incluso muchas de las veces ni siquiera parecen entrar en la economía de los países endeudados como producto de operaciones financieras y comerciales. Así sucede la denominada “bicicleta financiera”. Son deudas que entran y salen inmediatamente; se quedan en los circuitos financieros y no se materializan en obra pública, siendo emblemático en este sentido los casos de la deuda contraídos en Argentina por Mauricio Macri o en Ecuador por Lenin Moreno. No es casual que en estos países hayan surgido amplias movilizaciones sociales que interpelaron el impacto social de las deudas contraídas por gobiernos neoliberales. La pandemia y el retorno de gobiernos conservadores hizo repuntar el incremento de la deuda externa luego de momentos en los que los gobiernos buscaban soberanía financiera. La lógica implícita en estas formas de endeudamiento atan y postergan tener soberanía estatal que permita redistribuir progresivamente la riqueza y garantizar derechos ciudadanos. No obstante, en este debate debe quedar claro que nuestros países cuentan con recursos para buscar transformaciones productivas y sociales, solo que en la lógica colonial, el capital se realiza en el exterior. Según los textos de los acuerdos con el FMI, el valor de la posición de activos externos de Costa Rica correspondía al 55,1 % del PIB en 2021, el de Argentina al 85,5 % en 2021 y el de Ecuador al 54,6 % en 2023 (Idem). La región es el continente con mayores activos en paraísos fiscales del mundo. Ahora bien, la lógica de la deuda debe ser invertida. La pregunta pertinente es quién debe a quién y cómo se valora la deuda. Siguiendo la lógica antes señalada se debe poner en el centro del debate la vida buena, la vida digna. En este marco, el centro tiene una gran deuda con los países del sur global. Los países de ingresos altos dependen de una larga apropiación de recursos netos del Sur global que incluyen: 10 mil millones de toneladas de materia prima, 27.2 Exajulio de energía, 800 millones de hectáreas de tierra (Dorninger, et al., 2021). A su vez, la evidencia demuestra que los países del Centro se apropiaron de 826 mil millones de horas de trabajo del Sur Global (Hickel, Hambury y Barbour (2024)). Dichas apropiaciones pueden ser cuantificados en términos monetarios y es una deuda que debe ser pagada por el norte global. En definitiva, el centro se apropia de vida del sur global. La lógica de la reproducción de la deuda externa es la lógica de vida del colonialismo interno y externo y por lo tanto del mismo capitalismo. Invertir la lógica de la deuda de tal forma que el norte empiece a pagar la deuda ecológica y la deuda social permitiría empezar el camino para garantizar una vida soberana y plena de los Estados y de los pueblos de la región.

**X. Reimaginar el retorno a lo analógico para reinventar el tiempo.** Como bien se señaló en la acción I, la contradicción temporal principal del capitalismo es que el tiempo potencialmente liberado por la tecnología deviene en tiempo extraído por el capital. En la era digital, tal extracción no solo se da en el ámbito de la producción sino en el ámbito del consumo. La tecnología busca incrementar la productividad, pero ahora también busca aumentar la consumibilidad de los ciudadanos del mundo. Tan importante como incrementar la producción de bienes por unidad de tiempo resulta incrementar la velocidad de circulación y consumo por unidad de tiempo. Ahora bien, la disputa por la libertad no solo está en la no explotación laboral sino también la no usurpación del tiempo en la vida pos-trabajo. Así, por ejemplo, a nivel mundial el consumo solo en redes sociales pasó de 90 minutos en el 2012 a 141 minutos en el 2023. Como se señaló en anteriormente, el problema no es el contenido sino la misma lógica intrínseca a la tecnología. Esta, como se ha demostrado en otras ocasiones (Ramírez, R., Guijarro, J. y Altilano, J., 2022), no solo genera ciudadanos individualistas sino solitarios y el ser solitario a su vez genera mayor consumo de dicha tecnología. Es decir, la tecnología digital que mayor extrae tiempo de la ciudadanía son redes anti-sociales; a lo que debe sumarse que son redes que conectan pero que en el debate político son utilizados para des-comunicar. No es fortuito que se haya instaurado en el debate público el concepto de *fake news* y plataformas verificadoras de la verdad noticiosa. Mas allá de esto, es necesario desmitificar que el que gana la esfera digital de las redes sociales gana los procesos electorales. La subjetividad está creada de antemano y responde a los cambios materiales que se viven en el mundo del trabajo y los cambios que se dan en la esfera material para reproducir la vida y la cultura. Si bien no se debe dejar de dar la batalla en el contenido digital, es necesario entender que más allá del contenido, es la misma tecnología la que genera una subjetividad individualista. En este marco, la agenda estratégica debe ser por fuera del encuadre del debate que se ha implantado. Mientras la deliberación pública o los procesos electorales estén en el marco de X, Facebook, Instagram, Tik Tok, se estará jugando en un campo anti-democrático porque estas plataformas encierran una lógica antideliberativa. Los proyectos nacional populares tienen dos opciones frente a lo mencionado: a) crear tecnologías alternativas con una lógica pro-social; y/o, b) retrasladar el debate democrático al mundo analógico, al especio del encuentro “3D”, de la movilización, del territorio, del cara a cara.

Mucho se discute sobre la emergencia de los protofascismos. Una región donde reina procesos de desmaterialización, desindustrialización, incremento del autoempleo, del sálvese quien pueda, de la auto-explotación en el trabajo de plataformas y la alienación en el consumo de redes sociales y virtuales no es fortuito que el tiempo del tiempo sea el de una vida cansada, una vida en soledad, una abundancia de escasez de tiempo, una vida en donde no solo se postergan el inicio de la primera relación sexual sino que se tiene menos relaciones sexuales. Dicho tiempo es una vida descomprometida con proyectos compartidos, de antipatía hacia el otro, de competencia contra el vecino. “O me salvo solo, o no tengo futuro” parece ser el sentido de una sociedad individualista. Es un tiempo que el otro es mi competencia. Es un tiempo de “pueblo contra pueblo”.

La posibilidad de consolidar una democracia con demos debe retornar la centralidad a tener un proyecto societal que genere ilusiones movilizadoras. Es claro que en la actual arquitectura digital dicho proyecto pertenece al “ecológico” capitalismo que se recicla en tanto rentista de datos e información y tiempo. Más allá de la necesidad de construir nuevas tecnologías digitales acordes a una humanidad empática con sentido de comunidad (y, en el mientras tanto, seguir dando la disputa de sentido en la esfera digital), podríamos sospechar que el proyecto también pasa por reinventar el retorno a lo analógico, en donde se recupere el cuerpo a cuerpo; se sienta el dolor del otro, la otra y se actúe colectivamente para superarla; se recupere el espacio público y común para debatir sobre porvenires compartidos y se genere la necesidad y el sentimiento de que querer vivir juntos. Parece ser también que el proyecto de defensa de la democracia pasa por pensar una posdigitalidad que supere su lógica individualizante y reimaginar un retorno a lo analógico que conlleve reinventar nuevas ucronías, nuevos tiempos democráticos para que florezca una vida buena humana en armonía con una vida buena de la naturaleza.

# Bibliografía

Albán, Fernando (2011). La utopía republicana, estudio introductorio. En Fernando Albán (Ed.), *La utopía Republicana: Textos Políticos* (pp. 9-63). Quito: Ministerio de Coordinación Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Alemán, Jorge (2016). *Horizontes neoliberales en la subjetividad*. Buenos Aires: Grama.

Altbach, Philip (2006). Política estudiantil: activismo y cultura. En James J. Forest y Philip Altbach (Eds.), *International Handbook of Higher Education* (pp. 329-345). Dordrecht: Springer.

Althusser, Louis (2010). Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation) (1970). En Imre Szeman y Tim Kaposy (Eds.), *Cultural theory: an Anthology* (pp. 204-222). Malden: Wiley & Sons.

Apple, Michael W. (2012). *Education and power*. Nueva York: Routledge.

Bando Interamericano de Desarrollo [BID] (2021). *WorkerTech: cómo la tecnología puede mejorar los empleos emergentes en América Latina y el Caribe*. Washington: BID.

Barrancos, Dora y Buquet Cortelo, Ana Gabriela (2022). *Mujeres movilizadas en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Bittencourt, Carlos (2017). Política da ecología e ecología política: As relações institucionais da Samarco e do estado no desastre em Mariana. En Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (Eds.), *Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica* (pp. 303-318). Buenos Aires: CLACSO.

Boelens, Rutgerd; Hoogesteger, Jaime y Baud, Michiel (2015). Water reform governmentality in Ecuador: Neoliberalism, centralization, and the restraining of polycentric authority and community rule-making. *Geoforum; journal of physical, human, and regional geosciences*, (64), 281-291. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016718513001607>

Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude (2019). *La reproducción: elementos para una teoría del sistema educativo*. México: Siglo XXI.

Braverman, Harry (1978). *Trabajo y capital monopolista*. México: Nuestro tiempo.

Carlson, Colin J. y Mendenhall, Emily (2020). Preparing for emerging zoonotic viral infections in a warmer world: Climate change and the risk of disease spillover. *One Health*, (9), 100188. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100188>

Caro, Isaac y Quiral, Máximo (2023). La nueva derecha radical chilena en el contexto internacional: auge e ideología. *Política y Sociedad*, 60(1).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2016). Asuntos de género. Políticas de cuidado en América Latina Forjando la igualdad. Serie Población y Desarrollo N° 140 [Documento preparado por María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL]. Santiago de Chile: CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2022). Informe anual sobre el trabajo no remunerado y su impacto en el PIB de América Latina. CEPAL. <https://www.cepal.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024). Tiempo de Trabajo no remunerado de la población según ingresos propios por sexo (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México). *Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG-CEPAL)*. <https://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo-trabajo-no-remunerado-segun-ingresos-propios-sexo>

Consejo Nacional Electoral de Ecuador [CNE] (2023). Resultados electorales anticipadas y consultas 2023. CNE. <https://www.cne.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/ResultadosElectoralesAnticipadasyConsultas2023.pdf>

Decide Chile (2021). Desentrañando los resultados de la Elección Presidencial 2021: ¿Qué pasó el 19 de diciembre? *Decide Chile by Unholster*. <https://live.decidechile.cl/gore>

Delgado-Wise, Raúl (2022). Intercambio desigual en la era de los monopolios generalizados. *Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social*, 1(2), 101-118.

Delgado Wise, Raúl; Caballero Anguiano, Francisco y Gaspar Olvera, Selene (2023). Migration and peripheral urbanization: the case of the metropolitan zone of the valley of Mexico. *Ethnic and Racial Studies*, 46(11), 2416-2438. <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2174807>

Demaria, Federico (2023). *The political ecology of informal waste recyclers in India: Circular economy, green jobs, and poverty*. Oxford: Oxford University Press.

Donoso, Sofía (2023). Student Movements in Latin America: Pushing the Education Agenda and Beyond. En Federico M. Rossi (Ed.), *The Oxford Handbook of Latin American Social Movements*. Nueva York: Oxford University Press.

Dorninger, Christian et al. (2021). Global patterns of ecologically unequal exchange: Implications for sustainability in the 21st century. *Ecological economics: the journal of the International Society for Ecological Economics*, (179), 106824. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106824>

Dussel, Enrique (1994). *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Quito: Abya Yala.

Elias, Norbert (1989). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Federici, Silvia (2010). *Calibán y la bruja*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Filgueira, Fernando (2013). Los regímenes de bienestar en el ocaso de la modernización conservadora: posibilidades y límites de la ciudadanía social en América Latina. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, (22).

Fischer-Kowalski, Marina (1998). Society's metabolism. *Journal of Industrial Ecology*, 2(1), 61-78. <https://doi.org/10.1162/jiec.1998.2.1.61>

Fischer-Kowalski, Marina y Hüttler, Walter (1998). Society's metabolism. *Journal of Industrial Ecology*, 2(4), 107-136. <https://doi.org/10.1162/jiec.1998.2.4.107>

Fukuyama, Francis (1995). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta/De Agostini.

Gandy, Matthew (2004). Rethinking urban metabolism: water, space and the modern city. *Cityscape*, 8(3), 363-379. <https://doi.org/10.1080/1360481042000313509>

Gargallo, Francesca (2007). Feminismo latinoamericano. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, 12(28), 17-34.

Gill, Jungyun y DeFronzo, James (2009). A comparative framework for the analysis of international student movements. *Social Movement Studies*, 8(3), 203-224.

Goldman, Michael (2005). *Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization*. New Heaven: Yale University Press. <https://play.google.com/store/books/details?id=TO52BvfU2woC>

Guzmán-Concha, César (2017). Introducción: Movimientos estudiantiles y cambio político en la América Latina contemporánea. *Boletín de Investigación Latinoamericana*, 36(2).

Harvey, David (1997). *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Malden: Wiley & Sons. [https://play.google.com/store/books/details?id=h\\_nScbuwI0C](https://play.google.com/store/books/details?id=h_nScbuwI0C)

Harvey, David (2007). *A brief history of neoliberalism*. Nueva York: Oxford University Press.

Hermo, Javier y Pittelli, Cecilia (2009). La reforma universitaria de Córdoba de 1918. Su influencia en el renovado pensamiento emancipatorio en América Latina. *Revista Bicentenario*.

Hickel, Jason et al. (2022). Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990-2015. *Global environmental change: human and policy dimensions*, (73), 102467. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467>

Infante-Amate, Juan et al. (2022). The open veins of Latin America: Long-term physical trade flows (1900-2016). *Global environmental change: human and policy dimensions*, (76), 102579. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102579>

Ipsos (2023). Orgullo LGBT 2023 (LGBT+ Pride Study 2023 Global Survey). Ipsos. <https://www.ipsos.com/en/pride-month-2023-9-of-adults-identify-as-lgbt>

Johnson, Christine K. et al. (2020). Global shifts in mammalian population trends reveal key predictors of zoonotic disease transmission. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 287(2019), 2736. <https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2736>

López, Magdalena y Loza, Jorgelina Mariana (2021). Articulaciones, representaciones y estrategias de la movilización contra la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina (2018-2020). *Población y Sociedad*, 28(1), 131-161.

Malo Larrea, Anntonio (2022). El Metabolismo Social. En Hernando Bernal Zamudio et al. (Eds.), *Tesaurus de Biomimesis: Estudios Transdisciplinarios en Armonía con la Naturaleza* (pp. 293-304). Getxo: Red Internacional de Biomimesis.

Martínez Alier, Joan (2015). Ecología política del extractivismo y justicia socio-ambiental. *Interactions*, (3), 57-73. <https://doi.org/10.22201/CEIICH.24485705E.2015.7.52384>

Mazzucato, Mariana; Ryan-Collins, Josh y Gouzoulis, Giorgos (2023). Mapping modern economic rents: the good, the bad, and the grey areas. *Cambridge Journal of Economics*, 47(3), 507-534.

Misión de Observación Electoral [MOE] (2022). Resultados electorales Elecciones Presidenciales Primera y segunda vuelta 2022. MOE. <https://www.moe.org.co/datos-electorales/>

Moreano, Melissa; Molina, Francisco y Bryant, Raymond (2017). Hacia una ecología política global: aportes desde el sur. En Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (Eds.), *Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica* (pp. 197-211). Buenos Aires: CLACSO.

Nercesian, Inés; Robles-Rivera, Francisco y Serna, Miguel (Eds.). (2023). *Las tramas del poder en América Latina: élites y privilegios*. Buenos Aires: CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/248910/1/Las-tramas-del-poder.pdf>

Nogueira-Cunha, Leonam L. (2020). *La antipolítica de género en el gobierno de Bolsonaro y sus dinámicas de violencia*. Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.

Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA [OPSA] (2023). Repercusiones Post-Paso Total País - Agosto 2023. *PSI-UBA*. <https://www.psi.uba.ar/opsa/>

Odum, Howard Thomas (2007). *Environment, Power, and Society for the Twenty-first Century: The Hierarchy of Energy*. Nueva York: Columbia University Press. <https://play.google.com/store/books/details?id=T02rAgAAQBAJ>

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2018). *Care work and care jobs for the future of decent work*. Ginebra: ILO.

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2024). Las personas trabajadoras de América Latina con responsabilidades de cuidados: Una mirada regional al Convenio núm. 156. *OIT*. <https://www.ilo.org>

Ramírez, René (2014). La virtud de los comunes: de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos. *El Viejo Topo*.

Ramírez, René (2020a). Dictaduras democráticas, autoritarismo neoliberal y revueltas populares en tiempos de COVID-19. *Celag*. <https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/06/covid-dictaduras-democraticas-web.pdf>

Ramírez, René (2020b). Ni larga noche neoliberal, ni corto interregno de gobiernos progresistas. En René Ramírez y John Ackerman (Eds.), *La disputa por la democracia en América Latina. Perspectivas y desafíos en una era de transformación global*. México: PUEDJS-UNAM/Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

Ramírez, René (2021). Regresiones autoritarias neoliberales y revueltas populares en tiempos de COVID-19. En René Ramírez, John Ackerman y Miguel Ramírez (Eds.), *Pos-Covid/Pos-Neoliberalismo. Propuestas y Alternativas para la transformación social en tiempos de crisis*. México: Siglo XXI/UNAM.

Ramírez, René (2023a). *Quien parte y reparte, ¿se queda con la mejor parte? Las derechas y las izquierdas en la distribución del pastel en América Latina, 2000-2020*. Buenos Aires: Mármol Izquierdo Editor/CELAG-IPET.

Ramírez, René (2023b). Las resistencias creativas como detonador de un cambio epistémico en el pensamiento social latinoamericano. En Lilian Pereira et al., *Reflexiones filosóficas e históricas: ciencia, enseñanza de la ciencia y política científica*. Cali: AFHIC/Universidad del Valle.

Ramírez, René (2024). *Ciencia, tecnología y humanidades en los ciclos largos económicos, políticos y sociales en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: UNA.

Ramírez, René (Coord.) (2024, en prensa). *Estado de situación de la democracia en América Latina y el Caribe: (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos*. Buenos Aires: CLACSO.

Ramírez, René; Cadahia, Luciana y López, Rodrigo (2024). *El rol de Colombia en la disputa por el derecho a la democracia y la igualdad en América Latina y el Caribe en el capitalismo tardío del siglo XXI*. Buenos Aires/Barcelona: CLACSO/Sentit Comú.

Ramírez, René y Guijarro, Juan (2023). La distorsión en la esfera pública digital. Estudio de caso sobre la reforma electoral en México (2022). [Documento de Trabajo 10]. México: PUEDJS-UNAM.

Ramírez, René y Minteguiaga, Analía (2020). Ecuador insurrecto y lucha de clases: la dialéctica entre materialidad y subjetividad. En Franklin Ramírez (Coord.), *Octubre y el derecho a la resistencia: revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador* (pp. 365-392). Buenos Aires: CLACSO.

Retrepo Betancur, Luis (2021). Migración en Sudamérica en los últimos treinta años. *El Ágora*, 21(1), 61-74.

Roca-Servat, Denisse (2020). Los comunes desde las ecología(s) política(s) del sur/Abya-Yala: Visibilizando alternativas al desarrollo extractivista en la región. En Denisse Roca-Servat y Jenni Perdomo-Sánchez (Eds.), *La lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo: miradas desde las ecología(s) política(s) latinoamericanas* (pp. 27-37). Buenos Aires: CLACSO.

Rotta, Tomás N. y Rishabh, Kumar (2024). Was Marx right? Development and exploitation in 43 countries, 2000-2014. *Structural Change and Economic Dynamics*, (69), 213-223.

SCImago (2024). SCImago Institutions Rankings: Institutions Map. *SCImago Research Group*. <https://www.scimagoir.com/institutionsmap.php>

Sonter, Laura J. et al. (2020). Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity. *Nature Communications*, 11(1), 4174. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17928-5>

Soto, Dulce (2024). Sheinbaum gana la elección con votos de hombres y apartidistas, según análisis. *Expansión Política*. <https://politica.expansion.mx/elecciones/2024/06/04/claudia-sheinbaum-gano-la-eleccion-votos-hombres>

Swyngedouw, Erik (2006). Circulations and metabolisms: (Hybrid) Natures and (Cyborg) cities. *Science as culture*, 15(2), 105-121. <https://doi.org/10.1080/09505430600707970>

Toledo, Víctor (2008). Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, (7), 1-26. [http://www.redibec.org/IVO/rev7\\_01.pdf](http://www.redibec.org/IVO/rev7_01.pdf)

Toro Pérez, Catalina (2020). Eco-feminismo(s), geo-hidrografías, producción y lucha por los comunes: Alternativas (para re-existir) al desarrollo (desde Abya/Yala) en un mundo en crisis. En Denisse Roca-Servat y Jenni Perdomo-Sánchez (Eds.), *La lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo: miradas desde las ecología(s) política(s) latinoamericanas* (pp. 15-25). Buenos Aires: CLACSO.

Tünnermann Bernheim, Carlos (2018). *Ochenta años de la Reforma Universitaria de Córdoba*. Santo Domingo: Ed. UASD.

Vallès, Josep M. y Martí Puig, Salvador (2020). *Ciencia política: un manual*. Barcelona: Planeta.

Wallace, Rob et al. (2020). COVID-19 and Circuits of Capital. *Monthly Review*, 72(1), 29-43. [https://doi.org/10.14452/MR-072-01-2020-05\\_3](https://doi.org/10.14452/MR-072-01-2020-05_3)

Ward, Lucas (2013). Eco-governmentality revisited: Mapping divergent subjectivities among Integrated Water Resource Management experts in Paraguay. *Geoforum; journal of physical, human, and regional geosciences*, (46), 91-102. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016718512002783>

Wright, Erik Olin (2009). Comprender la clase. *New Left Review*, (60), 98-112.

